ARTURO BAREA

CONTRA EL FASCISMO

LUCHA POR EL ALMA ESPAÑOLA
ESPAÑA EN EL MUNDO DE LA POSGUERRA

— DOS TEXTOS INÉDITOS —

ESPASA

ARTURO BAREA

CONTRA EL FASCISMO

LUCHA POR EL ALMA ESPAÑOLA
ESPAÑA EN EL MUNDO DE LA POSGUERRA

— DOS TEXTOS INÉDITOS —

ESPASA

Índice

Portada
Sinopsis
Portadilla
Introducción a la edición española
Lucha por el alma española
Prefacio
Capítulo I. Imagen de un país totalitario
Capítulo II. El jefe de un Estado
Capítulo III. Las fuerzas que respaldan a Franco
Capítulo IV. La casta
Capítulo V. El mito hispánico
Capítulo VI. El fascismo y las masas en España
Capítulo VII. Gibraltar y Marruecos
Capítulo VIII. Hispanoamérica
Capítulo IX. ¿Y la izquierda española?
Capítulo X. El destino de una España libre
España en el mundo de la posguerra
Mensaje del laborismo británico a España
Introducción. Hacia una política británica para España
España en el mundo de la posguerra
Bibliografía seleccionada
Notas
Créditos

Gracias por adquirir este eBook

Visita Planetadelibros.com y descubre una nueva forma de disfrutar de la lectura

¡Regístrate y accede a contenidos exclusivos!

Primeros capítulos
Fragmentos de próximas publicaciones
Clubs de lectura con los autores
Concursos, sorteos y promociones
Participa en presentaciones de libros

PlanetadeLibros

Comparte tu opinión en la ficha del libro
y en nuestras redes sociales:

Explora **Descubre** **Comparte**

SINOPSIS

Lucha por el alma española (editado originalmente en inglés en 1941) y *España en el mundo de la posguerra* (publicado en 1945) son los únicos escritos explícitamente «políticos» del gran escritor Arturo Barea —conocido, sobre todo, por la trilogía autobiográfica *La forja de un rebelde*— que Espasa recupera para los lectores españoles por iniciativa de William Chislett.

Exiliado en Inglaterra entre 1939 y 1957, año en el que murió, Barea explora en estas páginas las raíces ideológicas del franquismo, lamenta que democracias como la británica dejaran sola a la República española durante la Guerra Civil con la excusa de la «no intervención», defiende la destitución del dictador y explica su visión de lo que debería ser una España democrática.

Dos textos necesarios para entender el posicionamiento intelectual de un autor español que ha marcado nuestra literatura.

Arturo Barea

Contra el fascismo

Lucha por el alma española y
España en el mundo de la posguerra
Dos textos inéditos

ESPASA

INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

Arturo Barea (1897-1957) es conocido, sobre todo, por haber escrito la trilogía autobiográfica *La forja de un rebelde*[1], publicada originalmente en la década de 1940 en Inglaterra (aunque para su primera edición en España hubo que esperar hasta 1977, dos años después de la muerte de Franco)[2], país al que había llegado exiliado en febrero de 1939, pocas semanas antes de la derrota de la República española, acompañado de su segunda esposa, la austriaca Ilsa Barea-Kulcsar (1902-1973).

Antes de trasladarse a Inglaterra, habían pasado un año en París malviviendo en el Hotel Delambre (al que ellos mismos, por mal nombre, llamaban «Hotel del Hambre» haciendo un juego de palabras). Se habían conocido y se habían enamorado mientras trabajaban ambos en la Oficina de Censura de Prensa Extranjera en la sede de la Telefónica, en la madrileña Gran Vía, durante la Guerra Civil[3]. Al tratarse del edificio más alto de Madrid, era blanco frecuente de los obuses y las bombas de los nacionales. Los bombardeos y las jornadas de dieciséis horas de trabajo como censor y locutor de radio («La voz incógnita de Madrid») le ocasionaron una crisis nerviosa. Cuando desembarcó en Inglaterra, Barea estaba, según sus palabras, «desposeído de todo, con la vida truncada y sin una perspectiva futura, ni de patria, ni de hogar, ni de trabajo [...] rendido de cuerpo y de espíritu».

El resto de su obra no es tan conocida, y ese es especialmente el caso de estos dos escritos que se editan ahora en español por primera vez: *Lucha por el alma española* (editado originalmente en inglés en 1941 con el título *Struggle for the Spanish Soul)*[4] y el panfleto *España en el mundo de la posguerra* (publicado en 1945 con el título *Spain in the Post-War World)*. Su publicación sigue a las del pionero estudio que Barea hiciera de Lorca y su ensayo sobre Unamuno, que también habían estado inéditos en España todo este tiempo *(Lorca*, Instituto Cervantes, 2018; *Unamuno*, Espasa,

2020, prefacio a cargo de William Chislett)[5]. De este modo, todas las obras que Barea publicó inicialmente en inglés están ahora editadas, por fin, en su idioma y su país maternos.

Lucha y *España* son sus únicos escritos explícitamente «políticos» y en ambos defiende la remoción de Franco y el restablecimiento de la república derrotada en la Guerra Civil. Aunque vivió casi veinte años en Inglaterra y había publicado muy poco antes de eso, España ocupó siempre el lugar principal en la mente y la obra de Barea. La vida dura de su adorada madre, que trabajaba como lavandera en el río Manzanares en Madrid, y la Guerra Civil lo marcaron profundamente. Su madre, que se había quedado viuda cuando Barea apenas tenía dos meses, emigró de Badajoz a Madrid con él y sus tres hermanos. Gracias a su valentía, Barea y sus hermanos no acabaron en la inclusa. Cuando murió su adinerado tío, ya no hubo quien le pagara a Barea el excelente colegio de la Escuelas Pías de San Fernando al que iba en Lavapiés, con sus buenos laboratorios y una biblioteca bien dotada. A los trece años empezó a trabajar de aprendiz en una tienda. Esta diferencia entre sus humildes orígenes y su educación como señorito lo perseguiría durante toda su vida.

Curiosamente, sin embargo, la mayoría de las ochocientas cincuenta y seis charlas que Barea dio en la BBC (una por semana para el servicio para América Latina de la cadena británica, pues Barea no podía trabajar para la sección española de la BBC porque se le consideraba demasiado comprometido políticamente) trataron de Inglaterra. Comenzaron a emitirse en 1940, aunque él se presentaba en ellas bajo el pseudónimo de «Juan de Castilla» para no perjudicar a su familia en España. La misión inicial de aquel espacio era contrarrestar la propaganda nazi en América del Sur durante la Segunda Guerra Mundial presentando una imagen positiva de la vida en Gran Bretaña. Esas monologales reflexiones de quince minutos, en las que Barea muchas veces describía la vida inglesa observándola desde el punto de vista de un forastero simpatizante con su país de acogida, solían liderar las encuestas anuales de valoración de los oyentes. A Barea le gustaba frecuentar los *pubs* porque le permitían entrar en contacto con un amplio espectro de la sociedad. Uno de los espacios habituales de sus charlas era «La tabernita de Frank», en el que, en un imaginario pero

arquetípico *pub* rural regentado por el susodicho Frank, se debatían los temas de actualidad. Solo una de sus charlas en la BBC ha sobrevivido hasta nuestros días, que se sepa. Todas las demás se destruyeron por motivos de espacio. La misma suerte corrieron las emisiones radiofónicas de George Orwell.

Pero de no haber sido por la pérdida del mecanuscrito y las primeras galeradas de *Lucha,* «destruidas por acción del enemigo» (pues unas bombas alemanas alcanzaron en mayo de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, el almacén de la editorial en Plymouth), este habría sido el primer libro de Barea en publicarse en inglés. La obra, traducida del español (como la mayoría de todas ellas) por Ilsa[6], que también participó en las labores de redacción y de investigación de todos los libros de su marido, apareció finalmente en julio de 1941, poco después de *La forja*, primer libro de la trilogía autobiográfica.

El editor de Barea, Fred Warburg, dueño de Martin Secker y Warburg, editorial conocida sobre todo por publicar los libros de George Orwell *Homenaje a Cataluña* (1938), *Rebelión en la granja* (1945) y *1984* (1949), escribió a Barea tras el bombardeo:

> Por culpa de la incursión aérea, no solo se destruyeron existencias en almacén, sino que también se perdieron los mecanuscritos, incluido el de tu libro. Todas las noches se guardaban en la caja fuerte, y la caja fuerte quedó enterrada bajo los escombros y aún no ha sido localizada. Es posible, por supuesto, que, cuando la encuentren, se pueda abrir y el mecanuscrito esté intacto en su interior, pero, a efectos prácticos, debemos asumir que tu mecanuscrito se ha perdido, sobre todo porque no hay modo de saber cuánto se tardará en encontrar la caja.

Afortunadamente, Barea tenía un duplicado de ese mecanuscrito.

El libro fue el número diez de la serie Searchlight de ensayos breves escritos por conocidos autores de la izquierda no estalinista, Orwell entre ellos (su obra *El león y el unicornio: El socialismo y el genio inglés* apareció como el número uno de la serie). También escribió uno Arthur Koestler, en cuyo *Testamento español* (publicado por Victor Gollancz en 1937 y no incluido en la serie Searchlight) describió sus experiencias como corresponsal durante la Guerra Civil, incluidos los tres meses que pasó en prisión tras ser arrestado por las fuerzas de Franco acusado de espionaje. Orwell —que había luchado por la República encuadrado en las milicias del

antiestalinista POUM en 1937— y Tosco Fyvel fueron los directores editoriales de la serie. *Homenaje a Cataluña* se publicó después de que Orwell hubiera huido de España rumbo a Inglaterra al temer por su vida, amenazada por el Partido Comunista y la policía secreta controlada por el NKVD. Unos agentes del NKVD detuvieron por aquellas mismas fechas a Andreu Nin, líder del POUM, en 1937 y lo torturaron hasta matarlo.

Barea comenzó a escribir *Lucha* durante (o justo después de) la furiosa batalla de Inglaterra, que se prolongó desde junio hasta el final de octubre de 1940. Los tres años de Guerra Civil en España habían terminado el 1 de abril de 1939 con la victoria de Franco: más de doscientas mil personas habían muerto en combate, y las asesinadas extrajudicialmente o ejecutadas tras procesos judiciales sin garantías sumaron al menos ciento cincuenta mil en las zonas controladas por los «nacionales» y otras cincuenta mil en los territorios bajo control republicano, y todo ello sobre una población total de veinticuatro millones. Más de doscientos cincuenta mil españoles se exiliaron de forma permanente; además, unos treinta y tres mil niños (incluyendo a un amigo mío, Herminio Martínez) y niñas habían sido sacados de España por barco durante la guerra con destino principalmente a la Unión Soviética, México y Gran Bretaña. La guerra hizo estragos en la economía española, en la que aproximadamente la mitad de la mano de obra trabajaba en la agricultura. El PIB descendió un 36 % en términos reales entre 1935 y 1938; la producción nacional no recuperó hasta 1953 su nivel previo a la guerra.

El ensayo, en el que Barea exploraba las raíces ideológicas del franquismo, iba dirigido a un lector izquierdista no demasiado sofisticado. Incluye capítulos sobre aspectos tales como: Franco, con especial referencia a sus años de formación en el África española (Marruecos) y, en especial, en la Legión, creada en 1920 por José Millán-Astray; las fuerzas que respaldaban a Franco; la «casta» que dirigía España; el «mito hispánico»; el fascismo y las masas en España; Gibraltar y Marruecos; Hispanoamérica; la izquierda española, y el destino que aguardaba a una España libre. Como en toda su obra, Barea también se inspira aquí en su propia experiencia. Por ejemplo, él mismo había sido reclutado para el Ejército en 1920 y había servido en Marruecos en la época en que Franco y Millán-Astray ya tenían

mando en plaza allí, y se había contagiado de tifus después de la derrota de Annual en 1921, en la que murieron ocho mil soldados españoles movilizados para la guerra del Rif. De hecho, en *La ruta* (1943), el segundo libro de la trilogía autobiográfica, Barea relataría con expresiva viveza sus experiencias de aquel periodo.

Los editores de la serie Searchlight pretendían contrarrestar la, a su entender, excesiva influencia que ejercían los comunistas sobre la opinión pública a través del Left Book Club, el club editorial izquierdista de Victor Gollancz. El propio Barea no había sido nunca comunista: él estaba afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato creado en 1888 por Pablo Iglesias, fundador también del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La esposa de Barea, Ilsa, había estado afiliada al Partido Comunista de Austria antes de romper con él para ingresar en el Partido Socialdemócrata.

Barea, como tantos otros exiliados, lamentaba que democracias como la británica o la francesa hubieran dejado sola contra el fascismo a la democrática República española durante la Guerra Civil bajo la excusa de la «no intervención». Los únicos países que prestaron apoyo activo a la República y le suministraron armas fueron la Unión Soviética y (en mucha menor medida) México.

Barea admiraba a Gran Bretaña y a Winston Churchill, pese a no sintonizar con la orientación de su política interior. Estaba muy agradecido al país que le había dado refugio y, en 1948, obtuvo la nacionalidad británica. Se sentía a gusto en Inglaterra, aunque en algún momento pensó en emigrar a México. Sin embargo, «más de lo que esperaba y más de lo que parecería previsible en un español, me aficioné a la vida inglesa en seguida, y me enamoré de la campiña inglesa», con la excepción de «este maldito tiempo inglés», escribió:

> Solo aquí he podido empezar a respirar de nuevo. Aquí un hombre puede por fin sentirse libre. Inglaterra está dirigida hoy por un hombre como Winston Churchill, que, como conservador que es, puede defender en política interior muchos postulados que van contra mis ideas, pero que, cuando menos, es un hombre. Por decirlo con toda franqueza: es un hombre con agallas. Puede que los españoles antepongamos la hombría descarnada a todo lo demás. Y tal vez tengamos la sensación de que Inglaterra nos dejó solos en nuestro propio momento trágico, pero al menos ahora, cuando ese momento le ha llegado a Inglaterra, el pueblo inglés se está

> mostrando tan firme y resuelto como lo fuimos los españoles de Madrid y Barcelona. Y no es fácil que un español reconozca esto: significa más de lo que un inglés se imagina. Significa que sentimos que la lucha de Inglaterra es la nuestra, incluso aunque los ingleses no sintieran en su día que nuestra lucha era la suya.

El ensayo no tuvo demasiado éxito comercial. A principios de 1942, solo se había vendido cerca de la mitad de la primera edición de cinco mil ejemplares. Warburg, no obstante, no se arredró. Así se lo expresó por carta a Barea:

> Yo sí tengo la sensación de que, cuando la revolución llegue a España, agotaremos las existencias de tu libro muy rápido, y que deberíamos tener lista para entonces una nueva edición actualizada, ampliada y revisada, con la que atender la que será una acuciante demanda. Creo de verdad que no hay ningún otro libro en el mercado que aporte un análisis tan claro y verosímil de la situación española como el tuyo.

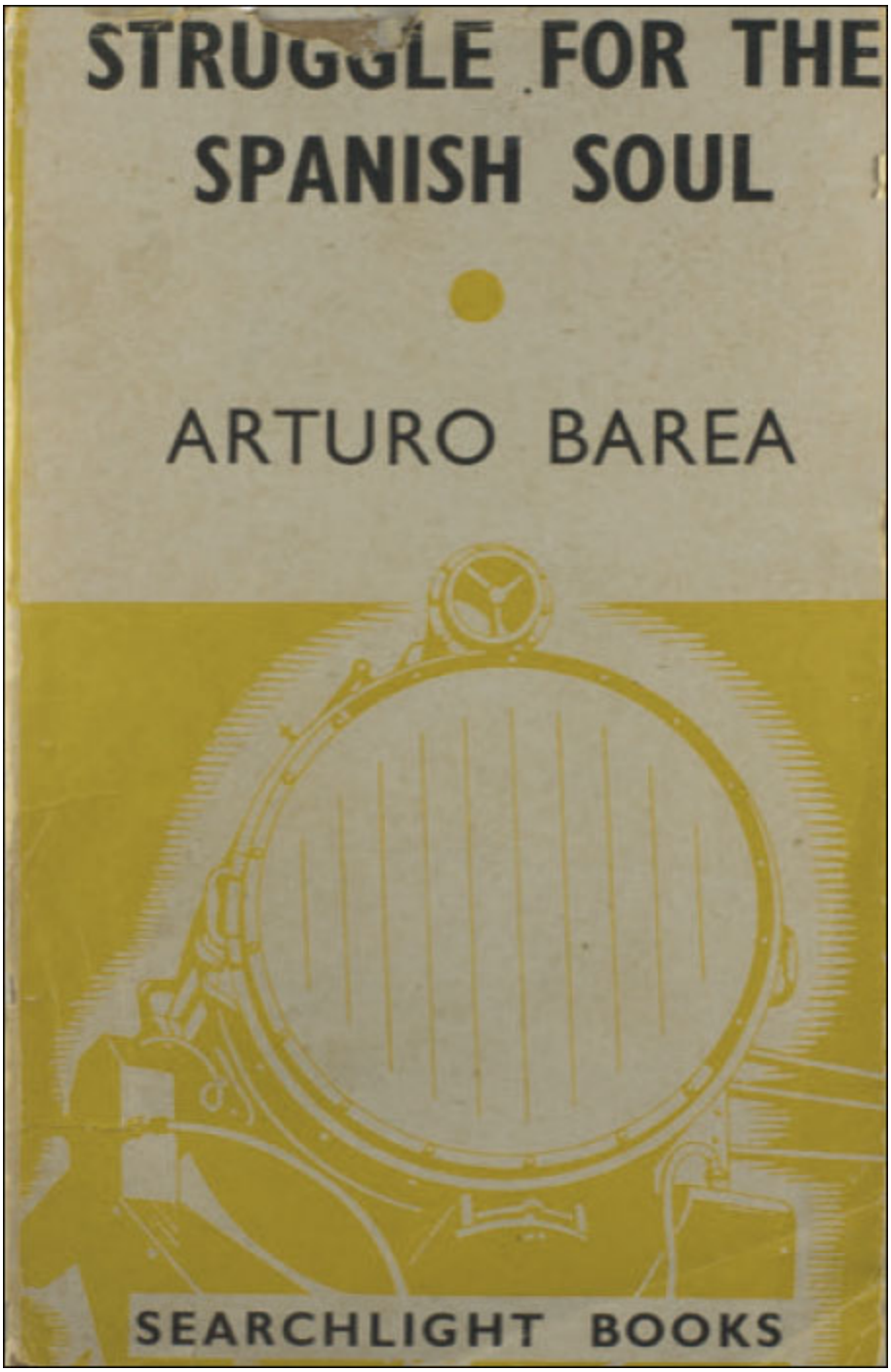
En *Horizon*, la revista literaria de referencia que dirigía Cyril Connolly, se publicó una reseña del libro, precisamente en el mismo número en que figuraba una crítica elogiosa de Orwell a *La forja*[7]. En otros números de la revista, se publicarían también un relato breve de Barea *(Las tijeras)*, un extracto de *La ruta* (concretamente, en el mismo número en que apareció la traducción inglesa que Ilsa había hecho de la crónica de Luis Portillo sobre el famoso enfrentamiento entre Miguel de Unamuno y Millán-Astray en el paraninfo de la Universidad de Salamanca) y largas reseñas del propio Barea sobre *Por quién doblan las campanas*, de Hemingway, y *El laberinto español*, de Gerald Brenan.

El crítico anónimo del libro en *Horizon* escribió sobre *Lucha* que era «una pequeña obra maestra de esa nueva rama de la literatura que es el híbrido entre libro y panfleto, y que parece estar adquiriendo una importancia creciente en la educación de las masas», y añadió que «el principal valor de actualidad del libro es el de mostrarnos la asombrosa eficiencia con la que el nazismo logra encajar algunas aspiraciones nacionales extranjeras en su plan para un "nuevo orden"». Esto último venía a propósito de lo que escribe Barea sobre cómo Alemania «es plenamente consciente de las posibilidades que un fascismo hispánico extendido le brindaría para agrupar los países sudamericanos exportadores

de materias primas bajo la hegemonía de una España falangista como valiosísimo complemento de los países industriales europeos que ya se hallan bajo el yugo germano».

Hacia el final de su ensayo, Barea nos explica que, según su visión de lo que debería ser una España democrática, esta

> […] tendría que fundamentarse en las fuerzas de acción colectiva espontánea y administración comunal que constituyeron el núcleo central de la fuerza de la defensa republicana y de la defensa de Madrid. Tendría que mostrarse generosa para trazar una línea de separación con la historia pasada, pero también firme en la destrucción de los bastiones de la casta y dura en el tratamiento de cualquier intento de sabotaje. [...] Tendría que reinstaurar y completar la autonomía cultural y administrativa de Cataluña, el País Vasco y Galicia. Tendría que renunciar resueltamente a toda aventura colonial y poner todo ese empeño en la colonización interior del territorio español desatendido, y de los no menos olvidados seres humanos de España.



Publicado en la colección Searchlight Books de Martin Secker y Warburg, en Inglaterra, en 1941.

El panfleto *España en el mundo de la posguerra*, del que Arturo e Ilsa fueron coautores, se publicó en agosto de 1945, tres meses después del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa en mayo de ese año, y al poco

también de que el Partido Laborista, bajo el liderazgo de Clement Attlee, barriera del poder a los conservadores de Churchill (en julio). Es un trabajo muy distinto (y bastante inferior) a *Lucha*, un emocional escrito polémico que, aun así, no deja de representar un buen documento histórico.

La victoria de los Aliados redujo el régimen de Franco a la condición de poco menos que un apestado internacional. El dictador había tomado partido en su día por las potencias del Eje, con las que se identificaba ideológicamente aunque España fuera oficialmente un país neutral. Hitler quería que Franco entrara en la guerra y se reunió durante siete horas con él el 23 de octubre de 1940 en Hendaya, junto a la frontera francoespañola, pero el encuentro fue un fiasco. Hitler comentó tras el mismo que «antes preferiría que me arrancaran tres o cuatro muelas que volver a pasar por esto». Franco exigía mucho a cambio de la participación española en la contienda mundial. Además de Gibraltar, reclamaba amplias franjas del Imperio colonial francés en el norte y el oeste de África. Al final, la principal aportación de España al esfuerzo de guerra de Hitler fue el envío de una División Azul de dieciocho mil voluntarios para combatir en el frente oriental en 1941. El régimen también exportó a Alemania wolframio, una materia prima clave para la fabricación de armamento, así como otros minerales, y autorizó el atraque de submarinos germanos en puertos españoles. El Banco de España recibió oro nazi, parte del cual se les había saqueado a las víctimas de los campos de concentración. Unos diez mil españoles fueron internados también en esos campos (la mayoría en Mauthausen-Gusen), pero Franco no movió ni un dedo por ellos. Los españoles allí enviados habían luchado con la Resistencia francesa contra la ocupación nazi o habían servido en las filas del Ejército galo. Solo un 40 % aproximado de ellos sobrevivieron.

Sabedora de la recién adquirida condición de paria internacional del régimen, la oposición española en el exilio —y, en particular, el Partido Comunista, que había sido la fuerza más activa contra la dictadura— redobló sus maniobras de posicionamiento antifranquista, animada por la esperanza de que los Aliados terminaran derrocando al dictador. En octubre de 1944, después de que la ciudad francesa de Toulouse hubiese sido liberada de los nazis, una fuerza comunista de varios miles de guerrilleros,

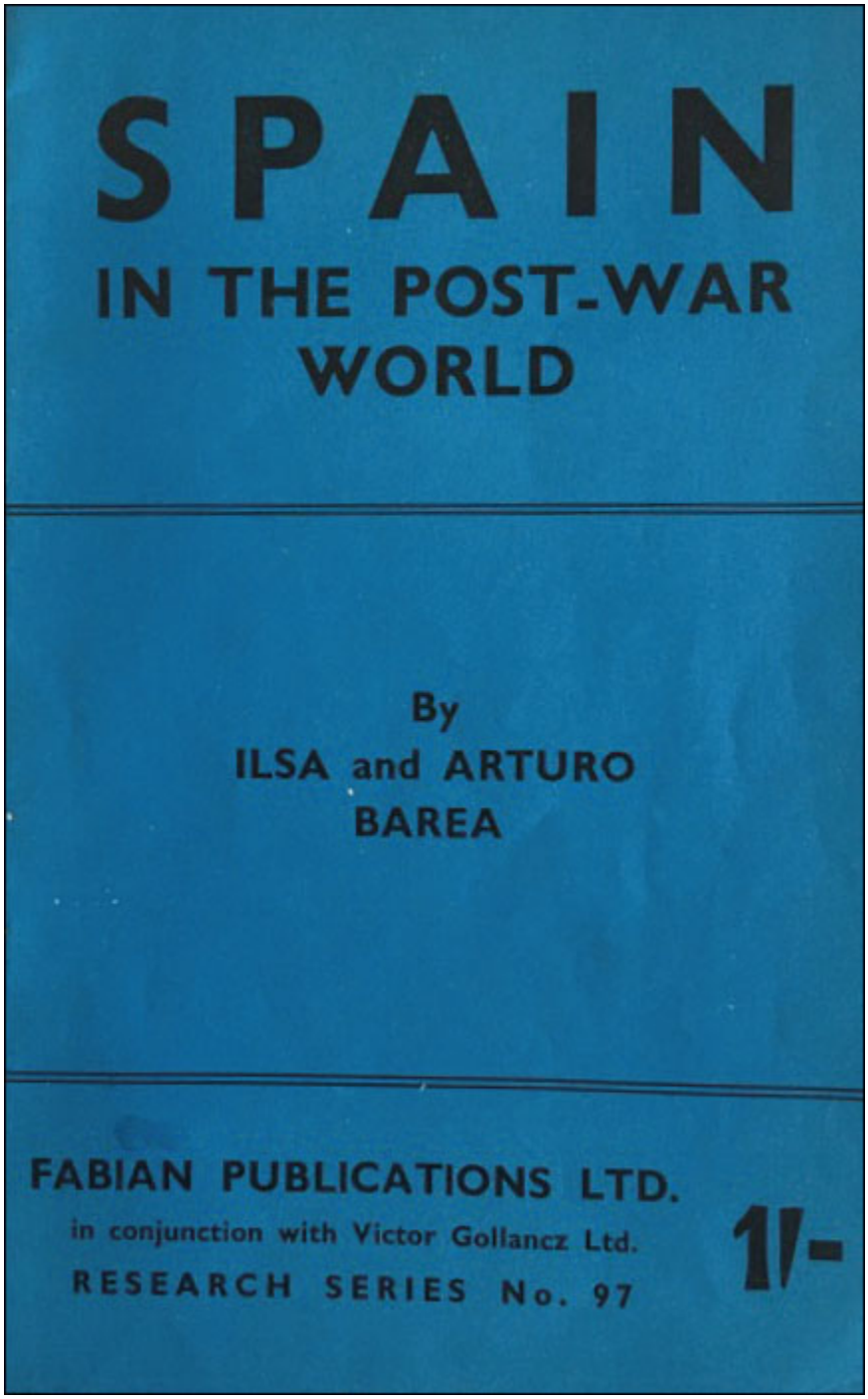
muchos de los cuales habían luchado con los maquis (la Resistencia a la ocupación alemana), cruzaron la frontera del norte de España, pero fueron derrotados por las fuerzas franquistas en el Valle de Arán.

Barea e Ilsa reiteran muchos de los argumentos ya expuestos en *Lucha* y defienden lo mucho que le convendría a Gran Bretaña derrocar a Franco y contar con una república democrática en España para que este país dejase de ser un cobijo para los nazis. Barea captó las esperanzas de quienes preveían un pronto derrocamiento de Franco en la única novela que escribió, *La raíz rota*, publicada en Argentina en 1951 (Salto de Página la publicó en España en 2009). A diferencia de Barea, el protagonista de la novela, Antolín, regresa a la España de Franco para retomar el contacto con su familia y, posteriormente, se marcha de nuevo tras haberse sentido como un extraño en su propia tierra. (Barea dejó a sus cuatro hijos en España cuando partió hacia el exilio. Estos y su primera esposa, Aurelia, emigrarían luego a Brasil en los años cincuenta). Las decisiones adoptadas por Stalin, Roosevelt y Churchill en Yalta en febrero de 1944 fueron las que posibilitaron en la práctica que Franco permaneciese en el poder en España.

> Él, como todos, había creído que a las veinticuatro horas del colapso de Alemania, el régimen de Franco habría dejado de existir y que en muy pocos días se encontraría en España. La esquina de Dean Street [Soho, Londres] estaba más animada que nunca. Ya no era solo el punto de cita de los camareros y los músicos sin trabajo [...]. Lo que él quería explicarle era la alegría desbordante de todos, los planes fantásticos, el desengaño tremendo que vendría después.

Publicado por la Sociedad Fabiana, una organización socialista británica fundada en 1884 que continuaba estando afiliada al Partido Laborista, *España en el mundo de la posguerra* pretendía animar al nuevo Gobierno laborista a emprender algún tipo de acción contra Franco. Pero el Gobierno de Londres no tardó en alinearse con la política exterior estadounidense, pues no quería, bajo ningún concepto, arriesgarse a perder la ingente ayuda que traería el Plan Marshall a Europa, del que España quedó excluida. El panfleto comienza con la declaración del Consejo Nacional Laborista del 28 de junio de 1944, en la que los laboristas se desmarcaban de las «amables palabras» que Churchill había dirigido al Gobierno español y recordaban «aquellos trágicos años en los que el pueblo español estuvo sumido en una sangrienta lucha por la defensa de sus

derechos y libertades constitucionales contra unos militares rebeldes liderados por el general Franco, quien, con la ayuda de los dictadores alemán e italiano, devolvió al pueblo español a una situación de servidumbre física, intelectual y política».



Publicado por Fabian Publications en colaboración con Victor Gollancz, en Inglaterra, en 1945.

El panfleto dibuja a grandes trazos una imagen panorámica de la España de Franco y de las fuerzas que apoyan al régimen (la clase terrateniente, el Ejército y la Iglesia católica), y en el apartado económico, presta exagerada atención a la importancia del capital alemán en España, hasta el punto de excluir el capital británico y francés, que también era importante en aquel entonces y que apenas se menciona. Es como si Barea e Ilsa intuyeran que la cuestión política del apoyo previo de Franco a Mussolini y a Hitler ya no fuera a bastar para convencer a los Aliados de que echaran al dictador. El panfleto también dedica varios párrafos a la ley española de patentes —un tema muy querido por Barea, que trabajó como encargado de una oficina de patentes en Madrid entre 1924 y el inicio de la Guerra Civil— y a los diversos medios de los que, a juicio de Barea, se valieron varias empresas y empresarios alemanes para asegurarse una posición importante en la economía española durante los años veinte y treinta.

Como es lógico, Barea reprocha a los Aliados su política de no intervención, que permitió que «el actual régimen español fue[ra] instituido mediante la agresión y est[é] siendo mantenido a través de la opresión». Según él, Franco debería ser eliminado del poder «con su consentimiento o sin él, mediante una negociación, o a través de un golpe militar, o de resultas de un discreto chantaje internacional», y en su lugar debería restablecerse la República instituida sobre la base de la Constitución de 1931. El Gobierno republicano debería decretar inmediatamente después de su vuelta al poder una amnistía para ambos bandos y convocar nuevas elecciones. Barea nunca dejó de reclamar el derrocamiento de Franco allí adonde iba (por ejemplo, en sus visitas a Dinamarca, a Estados Unidos —donde enseñó en el Pennsylvania State College en 1952— y a América del Sur —durante una gira de dos meses por Argentina, Uruguay y Chile en 1956, enviado por la BBC—).

La conexión de Barea con la Sociedad Fabiana vino probablemente a través de Gavin Henderson, segundo *lord* Faringdon, un político laborista partidario de la República española y fabiano incondicional. (Fue presidente

de la Sociedad en 1960-1961). En 1937, transformó su Rolls Royce en una ambulancia y lo condujo hasta España, donde se usó como hospital móvil de campaña en el frente de Aragón.

Barea e Ilsa se mudaron en 1947 a Middle Lodge, en la parroquia de Eaton Hastings (en South Oxfordshire), una residencia de la hacienda de Buscot Park, propiedad de *lord* Faringdon. Barea vivió allí los últimos diez años de su vida. Para entonces, ya era un conocido escritor y radiofonista de la BBC. La casita de campo, por la que el matrimonio pagaba un alquiler muy bajo, estaba rodeada de zona verde y no tenía electricidad: se alumbraban con lámparas de parafina y la radio iba a pilas. Cocinaban con gas de bombona. Una cocina de carbón suministraba agua caliente y calefacción a la vivienda. Había un escritorio grande en la sala de estar. Arturo e Ilsa se sentaban a él, el uno frente a la otra, mientras leían, escribían a máquina y trabajaban. Las paredes estaban atestadas de libros colocados en estanterías de madera que el propio Barea había diseñado y fabricado. La pintura de las paredes y el techo se había vuelto marrón del humo del tabaco que fumaban los dos: unos cien cigarrillos sin filtro al día en total. Los esposos, muy unidos, salían juntos a pescar al lago que había detrás de la casa. A Barea le gustaba ir a comprar los sábados a la localidad de Faringdon para irse luego a tomar algo al *pub* The Volunteer (donde, desde 2013, una placa en la fachada, colocada allí por un grupo de admiradores, le rinde homenaje). Siempre se sentaba en el área «pública» —jamás en la «privada»— para charlar allí con los parroquianos (trabajadores agrícolas y artesanos) con su inglés chapurreado, recopilando material para sus emisiones radiofónicas sobre la vida en Inglaterra. Falleció de un ataque al corazón en los brazos de Ilsa el día de Nochebuena.

WILLIAM CHISLETT
Comisario de la exposición sobre Arturo Barea
en el Instituto Cervantes en Madrid en 2018

BIBLIOGRAFÍA

BAREA, Arturo, *Palabras recobradas: Textos inéditos*, edición de Nigel Townson, Debate, Madrid, 2000.

— *La ventana inglesa*, catálogo de la exposición sobre el autor en el Instituto Cervantes, 2018, con ensayos de Juan Manuel Bonet, Antonio Muñoz Molina y William Chislett, en https://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/Catalogo-Arturo-Barea.pdf.

EAUDE, Michael, *Triunfo en la medianoche del siglo*, Renacimiento, Sevilla, 2022.

NIETO MCAVOY, Eva, *A Spaniard in Hertfordshire: The Intellectual Exile of Arturo Barea*, tesis doctoral no publicada, Birbeck, Universidad de Londres, 2017, en https://www.academia.edu/38306135/A_Spaniard_in_Hertfordshire_the_Intellectual_Exile_of_Arturo_Barea.

LUCHA POR EL ALMA ESPAÑOLA

Mecanuscrito y primeras galeradas destruidas
por acción del enemigo..., mayo de
1941. Primera edición..., julio de 1941.

PREFACIO

Una noche, poco después de que estallara la guerra en septiembre de 1939, yo estaba sentado en una habitación medio a oscuras en Londres y, mientras esperaba el noticiero, hablaba con mi vecino, a quien me habían presentado como un escritor español, refugiado republicano. Parecía cansado y hablaba en un francés titubeante. Yo acababa de regresar de Polonia tras cruzarme Europa; la Guerra Civil española parecía haber quedado irremediablemente atrás, tan lejana que hasta su recuerdo me resultaba difícil evocar. Pero bastó con que Arturo Barea hubiera pronunciado unas pocas frases sobre España, sobre Europa, para que me resultara evidente que estaba ante un escritor inusualmente perceptivo. De pronto, toda aquella turbulenta revolución bajo el sol español volvió a la vida. Desde aquel sombrío septiembre, ha sido mucho lo que ha acontecido. Pero es mérito sobresaliente de este libro de Barea, *Lucha por el alma española*, que el recuerdo de una amarga derrota que nos habíamos empeñado en olvidar nos sea devuelto al pensamiento, con mejorada comprensión, que no amargura, y que la trágica lucha del pueblo español con todo en su contra se nos muestre, no como el último fracaso del pasado, sino como una parte continuada de nuestra propia historia presente.

Si echamos la vista atrás, la Guerra Civil española podría parecernos hoy un ensayo primitivo del conflicto presente, primitivo tanto en cuanto a sus métodos bélicos como en cuanto a sus esperanzas: esperanzas como la de que la solidaridad internacional pudiera fundamentarse en su mera declaración, o la de que la democracia europea pudiera construirse inspirándose en la dictadura de Stalin. Hemos aprendido desde entonces que tenemos que esforzarnos mucho más para alcanzar un verdadero internacionalismo; que el nacionalismo y el «mito nacional» son una fuerza más arraigada que nunca en nuestra era moderna de máquinas y grandes ciudades. En un anterior libro de la colección Searchlight, titulado *El león y*

el unicornio, George Orwell recordaba el «mito inglés», esa mezcla de patriotismo, desidia, cordialidad y valor imperturbable que conforman el punto fuerte de Inglaterra. En *Offensive against Germany*, Sebastian Haffner analizaba el «mito alemán» de la acuciante sensación de inestabilidad que no cesa de impulsar a la mentalidad germana hacia los extremos. Ahora, en *Lucha por el alma española*, Arturo Barea nos proporciona una imagen memorable, coloreada con destellos de lucidez poética, del verdadero «mito» nacional de la España moderna. Nos muestra una nación confundida aún por una herencia de pasada grandeza transformada en presente miseria, que lucha apasionadamente por despertarse de una larga parálisis; nos muestra el conflicto entre el falso «mito» del intento de revivir el pasado muerto de España —con el solo propósito de ayudar a la conquista nazi de todo el mundo hispanohablante — y el verdadero «mito» de una España libre y moderna que emerge de su cautividad para ejercer de auténtica líder de toda la civilización hispana; una España cuyos sufrimientos, cuyas cuitas, están inseparablemente ligados a los nuestros. Por decirlo con sus propias palabras,

> […] esta guerra nos impulsa inexorablemente a todos hacia una libertad constructiva, seamos ingleses o españoles. Y cuanto más sean las genuinas fuerzas democráticas y socialistas de Inglaterra las que ocupen los puestos clave de la línea de fuego, como sería lógico que los ocuparan en una guerra contra el fascismo como esta, más activos aliados encontrarán entre los españoles libres.

T. R. FYVEL
Junio de 1941

Capítulo I
IMAGEN DE UN PAÍS TOTALITARIO

Goya, el gran pintor rebelde de España, tituló uno de sus más asombrosos y crípticos cuadros *El año del hambre*[*]. Está colgado en la Sala Goya del Museo del Prado, en Madrid. Ninguna pintura de la escuela expresionista ha alcanzado jamás la formidable fuerza emocional de este enorme lienzo. Está pintado en grises sucios y negros diluidos. Muestra una inmensa llanura desolada (salpicada por unos pocos árboles desnudos, retorcidos, a los que la helada y el viento han despojado de sus hojas), un cielo de nubes de tormenta con unas panzas oscuras y cargadas de nieve, y una procesión de figuras fantasmagóricas. Es un desfile interminable de miles y miles que forman la vanguardia de millones de sombríos espectros vivientes: son el pueblo de España tras las guerras napoleónicas, flagelado por la peste, roído por el hambre, quebrado por la persecución. Sus huesos —apenas recubiertos de piel reseca— son ya visibles bajo las ropas harapientas; la mortal calavera se perfila nítida en aquellos rostros, bajo sus sombreros de ala ancha.

A veces, tras horas escuchando las incorpóreas voces de mi país a través de mi aparato de radio, me parece estar contemplando esa terrible visión ante mí, transformada en una película que se proyecta sin final.

Niños vagabundos recogidos de las calles de Madrid. Niños que estiran la mano para llevarse un terrón de azúcar, una galleta o unas migajas de la mesa de un restaurante, y las devoran con los labios sucios del polvo callejero. Colas de madres hambrientas con niños aferrados a sus faldas, aguardando el plato de lentejas o alubias que les reparten en los comedores del Auxilio Social, organización de socorro humanitario. Un millón de hombres en prisión y en campos de concentración. Un millón de muertos. Y dos millones de familias sumidas en el sufrimiento, que lloran a los muertos

que ya se han ido o a sus muertos en vida. Un invierno terrible con temporales de nieve e inundaciones arrasando el país, que intensifican el hambre y el frío en los hogares que no tienen calefacción. Una primavera amarga con amenazas de nueva guerra en el ambiente. Fábricas cerradas y campos de labranza abandonados, cubiertos ahora de ortigas. Y, al mismo tiempo, costosos preparativos militares. Enconadas riñas políticas larvadas o, incluso, explícitas, cuya ferocidad solo mitiga el miedo a que el bando más fuerte en la disputa arrastre al infausto rebelde hasta las comisarías donde los hombres son subyugados a golpes para ser luego enviados a la cárcel, al campo de concentración o al batallón de trabajos forzados, cuando no incluso al paredón. Carteles de reclutamiento para la terrible Legión en las esquinas de las calles. Fervor patriótico y religioso que alcanza desmesuradas cotas de histerismo. Reaparición de las imágenes milagreras y las suntuosas procesiones. Peregrinajes fantásticos y morbosos en los que personas ansiosas por ganarse el favor, si no de Dios, sí al menos de quienes están ahora en el poder, trasladan cadáveres a hombros por todo el país durante muchos días y noches, con tal de hacer pública demostración de una fe que no sienten.

¡Goya y más Goya!

El 31 de enero de 1941, en los quince minutos que duró el informativo de las noticias locales y provinciales, Radio Málaga facilitó un muestrario perfecto de la España de hoy.

Hubo primero unas palabras de denuncia contra aquellas personas que viven en el lujo y se enorgullecen de ello en la ciudad de Málaga, mientras doce mil personas necesitadas tienen que ser auxiliadas con arreglo a los principios de la caridad cristiana. Luego se habló de unas visitas oficiales a los gobernadores civil y militar por parte de los funcionarios y oficiales recientemente trasladados a la provincia. A continuación, se anunció un programa de festividades religiosas, misas, funerales, procesiones, etcétera. Luego, unos anuncios de la junta provincial de abastos recordaron a los molineros su obligación de elaborar una declaración mensual de sus reservas de trigo y cereal para consumo humano y animal, y de llevar la cuenta de las cantidades molidas, conforme a las normativas tal y tal, y en los impresos este y aquel, so pena de castigo severo por incumplimiento.

También se anunció que, al día siguiente, una ración de medio litro de aceite de oliva se expendería al precio oficial de 3,75 pesetas por litro. (El aceite de oliva es la única grasa que hay para cocinar en esas regiones y la ración que se dispensaría iba a ser la primera en semanas, aunque a un precio oficial que era más del doble del vigente antes de la guerra). Y que los fabricantes de jabón también deben presentar declaraciones mensuales de sus existencias de jabón, así como de las materias primas requeridas para la producción de este, según los reglamentos tal y tal, y en los formularios este y aquel. La fiscalía hizo pública una lista de sanciones económicas de un importe medio de 1.000 pesetas (unas 20 libras esterlinas en un país donde el salario semanal medio está en torno a 1 libra y 10 peniques). Concretamente, se impondrían multas por la venta o la molienda ilícitas de harina; por el horneado y la venta ilícitos de pan; por la venta ilícita de alpargatas, de legumbres secas, de aceite de oliva, de jabón, de patatas; por la venta y compra ilícitas de higos y hortalizas.

Los anuncios fueron rematados por unas notas informativas del gobernador civil en las que se comunicaba que ya se habían impuesto numerosas multas por aguar la leche, y que, en el futuro, los infractores serían denunciados ante la fiscalía y puestos bajo la tierna y delicada custodia de esta. A un hombre lo multaron por llevar en secreto una pequeña fábrica de jabones. (En esa provincia de España, son muchos los hogares en los que se fabrica jabón con el residuo del aceite de oliva que producen; algunos lo vendían sin ser ni siquiera conscientes de que había regulaciones y formularios para ello). A otro hombre lo sancionaron por tener en su posesión una máquina para cerrar herméticamente latas de frutas o verduras sin contar con el permiso oficial pertinente. Por último, llegó el turno de unos consejos paternales dirigidos a todos los oyentes en los que se les recordaba su deber de declarar todas sus existencias y todos sus aperos y herramientas, «pues en arduos momentos como los presentes, el Estado debe tenerlo todo bajo su control».

Ahí, concentrados en quince minutos, tenemos mendigos y pompa religiosa, un confuso embrollo agravado por un sinfín de impresos que rellenar y de declaraciones que jurar, una sola y exigua ración de comida anunciada, y una larga lista de multas y sanciones de lo más deprimente y

miserable. Ahí tienen un vistazo de lo que es un sumamente complejo y desproporcionado aparato de control e intervención, que aprieta especialmente las clavijas a los pequeños tenderos y propietarios de la más recia y orgullosamente independiente estirpe de habitantes del sur de España.

Málaga estuvo siete meses bajo gobierno republicano antes de que la ocuparan italianos, moros y legionarios españoles. Un ferviente partidario o apologista del régimen de Franco podría decir, pues, que los mendigos, la burocracia y la escasez de alimentos en Málaga se deben exclusivamente a la «destrucción roja». Pero también podríamos ir más al norte, hacia provincias donde el «glorioso Movimiento» franquista ha estado gobernando ya desde el 18 de julio de 1936, provincias que jamás fueron tocadas directamente por la guerra. Cito al azar de entre mis propias notas:

El 3 de febrero de 1941, la fiscalía de Salamanca (ciudad donde había estado el cuartel general de Franco durante toda la Guerra Civil) anunció que un hombre había sido condenado a trescientos días en un batallón de trabajos forzados, que otro había sido condenado a pasar un año entero en uno de esos batallones y que a una mujer se le había impuesto una pena de trescientos días de cárcel por comercio ilícito de alimentos.

En diciembre de 1940, el dueño de un molino de harina de Segovia fue multado con 150.000 pesetas (unas 3.000 libras [esterlinas]) por molienda, acumulación y comercio ilícitos de ese alimento. Un comerciante de Santiago de Compostela fue multado con 10.000 pesetas (200 libras) porque había vendido a un precio excesivo suelas para remendar zapatos viejos. Segovia es la capital de una de las provincias menos pobladas y más empobrecidas de España. Santiago de Compostela es una pequeña ciudad en el corazón de Galicia que no tiene más que una universidad, una catedral famosa (meta de muchos peregrinajes) y artesanos que viven de los estudiantes y los peregrinos. No hay allí un mercado de productos industriales. La vida es primitiva y mísera. Diez mil pesetas son una cuantía exorbitante en Compostela, más aún cuando se está aplicando a algo como la especulación con suelas de zapatos gastados.

El Pueblo Gallego, uno de los diarios locales de Galicia, publicaba el 16 de febrero de 1941 un artículo que arremetía contra quejicas y gruñones diciendo que los ricos que tenían suficiente gasolina para tres coches y todo lo necesario en sus mesas para comer deberían tomarse la molestia de vez en cuando de pasearse por las calles y ver los grupos de niños hambrientos y de pobres temblando por falta de ropa de abrigo. El artículo ponía el colofón a ese panorama de miseria desesperada diciendo que quienes cobraban 25.000 pesetas anuales (unas 500 libras) no tenían de qué quejarse, aunque el Estado se les llevara un 40 % de su renta en forma de impuestos. ¡Y eso que provincias como Segovia y las de Galicia habían tenido la bendita suerte de llevar nada menos que cinco años bajo el gobierno directo de Franco!

El 16 de enero de 1941, la BBC emitió una descripción de la situación en España. El locutor dijo que resultaba doloroso ver la cantidad de mendigos que se concentraban junto a las puertas de los cafés y los restaurantes. Nunca antes había visto a tantos niños mendigos en España. Dijo también que era vergonzoso ver a mujeres con bebés de pecho que apenas abultaban más que muñecos, o a niños de diez años con brazos y piernas no más gruesos que mangos de cuchillo.

Todos los días, durante el invierno de 1940-1941, Radio Madrid iba anunciando los nombres de la docena aproximada de niños vagabundos que eran recogidos a diario de las calles de la capital con la esperanza de dar con algún pariente suyo. Eran solo una mínima parte de los niños mendigos que recogía el Auxilio Social en Madrid; a la mayoría de ellos se les perdía el rastro en las instituciones de socorro humanitario. A veces, coincidían los apellidos y la dirección de tres o cuatro niños de los anunciados: hermanos y hermanas que habían huido de un hogar sin comida ni combustible. O que no tenían domicilio alguno al que ir. Sus padres tal vez estaban muertos, o huidos, o parados, o en la cárcel, o trabajando por una miseria. En febrero y marzo de 1941 se extendió la fiebre tifoidea por las ciudades (cuando ni siquiera en los meses de asedio a Madrid durante la guerra había habido episodios de ese tipo). No había comida con la que aumentar el nivel de la salud pública. La carne se repartía en raciones de cien gramos semanales por cabeza en los distritos más afortunados. Las hortalizas y el pescado

apenas si aparecían en el mercado. Las patatas eran una promesa que nunca se materializaba en las cantidades suficientes. Las legumbres salían en raciones pequeñas e irregulares. Las autoridades comenzaron entonces su gran campaña contra la mendicidad: la policía detuvo a grupos de desdichados hambrientos —sin duda portadores de gérmenes— en los pórticos de las iglesias, en las cafeterías y en las esquinas de las calles para internarlos en instituciones o enviarlos de vuelta a su parroquia local. También se procedió a quemar los infestados harapos que llevaban puestos. La propaganda oficial trató a quienes señalaron que tan brutales medidas no servían para eliminar las causas de la enfermedad física y social como si fueran unos rebeldes peligrosos. Siguió creciendo el hambre y, con ella, la propagación de la tifoidea. Pero ahora ya no hay tanta presencia visible de mendigos ni de niños vagabundos.

Quienes se lo pueden permitir pagan en el mercado negro 15 pesetas (unos 6 chelines) por una barra grande de pan blanco. Pero el jornal de un trabajador no cualificado es menos que eso. Es evidente que, si uno no se puede comprar una barra de pan con todo lo que gana en un día de trabajo, no tiene otra alternativa que conformarse con las raciones oficiales de pan, baratas en comparación. Pero ¿y cuando no se pueden obtener siquiera las raciones de pan que oficialmente corresponden? En ese caso, si se tiene dinero, no solo se puede conseguir pan en el mercado negro, sino otros productos también. Si no se tiene dinero, hay que tratar de conseguir raciones de otros alimentos que puedan sustituir al pan. En la España de Franco, sin embargo, el racionamiento de comida no implica que la gente reciba realmente sus raciones con regularidad, ni grandes ni (como bien puede ser el caso) pequeñas. Simplemente significa que se castigará a quien sea sorprendido comprando o vendiendo fuera de los canales oficiales, y que siempre que llegan suministros a la ciudad o a la provincia, cierta parte de estos se dispensan a cambio de los correspondientes cupones de racionamiento. Cien gramos de carne o cien gramos de panceta una vez cada cuatro meses; un cuarto de litro de aceite de oliva una vez al mes; media libra de lentejas o de jabón basto solo de uvas a peras. Así que todo el mundo recurre al mercado negro y trata de conseguir algo, lo que sea, de alguien que vende lo que produce en un pequeño huerto, o de un tendero

amigo, o de un especulador afortunado. Entonces, un vecino que no ha tenido tanta suerte, o cuya esposa se ha peleado con la tuya, te denuncia: te ponen una multa equivalente al salario de un mes y a tu proveedor, otra equivalente a sus ingresos de dos meses. Tú y tus hijos pasáis hambre. El pequeño comerciante no puede pagar la sanción, si no es ganando ese dinero rápidamente mediante otros tratos ilícitos. Si a él lo denuncian una segunda vez, pueden enviarlo a un batallón de trabajos forzados, pueden cerrarle la tienda de tres a seis meses y pueden confiscarle su material de trabajo.

Un inglés, apolítico él, que tuvo un buen empleo comercial en Cataluña hasta el final de 1940, ha comentado que Barcelona estaba considerado uno de los lugares más favorecidos de España en cuanto a la comida, y en especial, el pan. (Merece la pena destacarlo, pues la propaganda oficial española está actualmente empeñada en demostrar que las regiones que estuvieron más tiempo bajo el «dominio rojo» son las que están ahora sufriendo la peor miseria). En ese privilegiado lugar, había raciones de pan «disponibles casi siempre», mientras que en otras ciudades y pueblos pasaban semanas sin recibir reparto alguno. Los garbanzos, alimento básico en la dieta de las clases pobres en España, eran casi imposibles de conseguir, salvo de contrabando y a precios elevados. «Muy rara vez» había patatas, que, a veces, eran sustituidas por boniatos. Sí había un «reparto ocasional» de pequeñas raciones de arroz. Por lo general, había abastecimiento regular de pescado y verduras, pero estaban tan caros que la población más pobre no se los podía permitir. Las raciones de azúcar solo se dispensaban de forma «muy ocasional». La ración oficial de un cuarto de litro de aceite de oliva se repartía cada cuatro o cinco semanas y no había ninguna otra grasa disponible. Los salarios habían sido incrementados en un 25 % y, por ley, se suponía que las horas extras trabajadas en domingo debían remunerarse, aunque, en la práctica, a menudo no se hacía. Pero los precios oficiales de alimentos esenciales habían aumentado un 250 %, mientras que su subida en el mercado negro alcanzaba niveles de entre el 500 y el 800 %. La consecuencia era que la corrupción se había generalizado entre quienes disponían de medios para ejercerla. «A los ricos les va muy bien», dijo el inglés.

Pero tampoco a los ricos les gusta lo que ocurre. Los sindicatos de la Falange, junto a toda clase de órganos oficiales y semioficiales de control e intervención, obligan a la industria a someterse a una política de producción que se ajusta al ideal de la autarquía, pero aniquila la poca industria española que quedaba. Los industriales y los banqueros se ven continuamente forzados a hacer aportaciones de dinero a toda suerte de organizaciones benéficas o secciones de la Falange y, si no dan la talla en ese sentido, los falangistas amenazan veladamente con hacer con ellos «justicia social», lo que hace que entre estos crezcan los murmullos de queja contra los «bolcheviques falangistas». Los pequeños comerciantes y artesanos, habitualmente los ciudadanos más conservadores, modestos y católicos practicantes, se ven convertidos de pronto en delincuentes que infringen una maraña de leyes y órdenes. Si se quejan, pasan *ipso facto* a convertirse en «desleales al régimen». Agricultores que apenas si saben escribir su propio nombre tienen que rellenar impresos sobre sus existencias dos veces al mes, y si no lo hacen, son castigados. Se ven obligados a acudir a alguien en el ayuntamiento local o en la delegación del sindicato falangista con esos documentos y pagarle un dineral por cumplimentarlos. Así que, al final, prefieren cultivar solamente lo que necesitan para sí mismos y no trabajar de más para que venga un sindicato a robarles su producción (en cumplimiento de la letra de una ley que nunca han entendido) para pagársela más adelante, sabe Dios cuándo. Pero si cultivan un volumen inferior a su cuota previa, son considerados «desleales al régimen» y se arriesgan a que los denuncien, los arresten, los multen y, en último término, los arruinen.

Muchos trabajadores están en paro y, aun así, no hay suficientes obreros cualificados. Tengo un amigo, un joven socialista, cuya historia ilustra muy bien por qué España tiene tanta escasez de mano de obra cualificada y por qué han cerrado tantas empresas y se ha generado un desempleo masivo al mismo tiempo que existe una acuciante demanda de mano de obra.

Mi amigo es de León, una provincia de Castilla la Vieja *[sic]* que quedó bajo el poder de los rebeldes nacionales desde los primeros días del Alzamiento. Su padre era originalmente un artesano; en un momento

posterior de su vida, tuvo una explotación agrícola en la que dio empleo a muchos trabajadores. Uno de sus hijos era maestro de escuela, otro era ingeniero y un tercero era un mecánico especializado en motores de combustión interna. El padre murió ejecutado por la Falange local porque, de joven, había sido amigo de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista español. Su hijo maestro fue ejecutado porque él también era socialista. El ingeniero cayó en la guerra siendo sargento del Ejército republicano. El mecánico es ahora un refugiado en Inglaterra, y tiene el brazo derecho y la pierna izquierda inutilizados por los proyectiles de un tanque italiano. España ha perdido así a un granjero, un maestro, un ingeniero y un mecánico de una sola familia.

Son innumerables los casos de ese tipo, como innumerables son las citas que podemos tomar de la prensa y la radio españolas que nos describen este «año del hambre» de la España de Franco. Me he limitado a mencionar hechos que he tomado de fuentes españolas oficiales o de testigos independientes, aunque tampoco hay otro modo de saber lo que está acaeciendo en España tras la (no demasiado eficaz) pantalla de humo de la censura y la intimidación, la fantasía y la torpe propaganda. Lo que he mostrado aquí solamente es la penosa superficie del problema.

Dos de los cuatro jinetes del Apocalipsis llevan cabalgando incansablemente por España desde hace casi cinco años: el Hambre y la Muerte. En los primeros meses de 1941, el tercero (la Peste) emprendió también su particular galope: la tifoidea se está extendiendo entre las desdichadas masas hambrientas de las ciudades españolas. Ahora es el cuarto de ellos, la Guerra, el que parece estar subiéndose de nuevo a su caballo: Hitler, a través de Franco, reclama a España para su conflagración bélica, para su «nuevo orden» de sangre.

Y entre tanta mezquina miseria destructora del alma, entre el creciente temor a una nueva guerra, resuena la voz de la propaganda: «Tened fe en el Caudillo, nuestro invencible Franco; él, que nos ha prometido Patria, Pan y Justicia»*.

Capítulo II
El jefe de un Estado

En torno al nombre del Generalísimo Franco, el actual *Führer* del Estado español, tanto amigos como adversarios han tejido sendas leyendas. De una de ellas emerge convertido en héroe; de la otra, en carnicero. Cada bando ha suprimido, respectivamente, sus cualidades malas y sus cualidades buenas, y por ello, la imagen que un español cualquiera tiene de este jefe del Estado varía conforme a cuál sea su credo político.

Yo voy a intentar ofrecer mi propia imagen de él.

Don Francisco Franco —de nombre completo, Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde— nació en El Ferrol el 4 de diciembre de 1892 en el seno de una familia acomodada en la que era tradición que los hijos sirvieran en la Armada española como sus padres. Él y su hermano Ramón iniciaron sus estudios con esa carrera en mente, pero nunca llegaron a cruzar las puertas del Colegio Naval. El Gobierno español lo había cerrado por motivos económicos, pues ya había demasiados oficiales para una flota militar tan disminuida como la española.

En aquel entonces, España soportaba todavía el lastre de un personal obsoleto en una Armada anticuada. Muchos buques se habían perdido en las guerras de Cuba y Filipinas; algunos de los oficiales se habían jubilado, pero otros vegetaban en cargos oficiales, tratando de demostrar que hacían algo a cambio del salario que recibían. Pero cuando el prestigio de un uniforme es un sentimiento aprendido que se lleva en la sangre, es muy difícil que un muchacho se resista a su llamada. Como no quedaba otra opción, Francisco Franco ingresó en la Academia de Infantería de Toledo. Seguía siendo poco más que un mozo cuando salió de allí destinado, con el

grado de alférez, al Regimiento [n.º 8] de Zamora. Pero el joven que soñaba con convertirse en héroe no tardó en encontrar terriblemente aburrida la vida de un cuartel perdido en una provincia apartada.

El África española —es decir, Marruecos— era territorio abierto a cualquier hombre dispuesto a arriesgar el cuello, a exponerse no solo a las caprichosas balas, sino también a algo más aterrador y peligroso aún: las enfermedades. Solo la malaria había matado ya a miles de personas cuando Franco ingresó en el [18.º] Regimiento de Infantería de África en 1911.

Francisco Franco era (y es) un hombre absolutamente carente de miedo físico. Existen dos formas de valentía: la del hombre que siente temor, pero lo controla y realiza deliberadamente actos de valor, y la del hombre que nunca ha sentido el miedo y para quien la valentía es una condición natural y el miedo, una cualidad desconocida y ajena. Yo creo que Franco, a quien he visto muchas veces al frente de sus legionarios en África, pertenece a esta segunda categoría.

Ascendido ya a segundo teniente, comenzó su carrera dotado de esa cualidad innata y enseguida empezó a distinguirse. Personalmente, tengo la impresión de que ha sido un hombre honrado toda su vida: honrado en el sentido de su corrección e incorruptibilidad en el plano financiero y económico. Y en un ambiente como el de Marruecos, donde, desde el Estado mismo hasta el más sencillo soldado, eran atracados a diestra y siniestra, esa doble cualidad de la valentía y la integridad le valieron a Franco la simpatía de quienes servían bajo su mando y lo diferenciaron de sus superiores. Entretanto, Franco estudió ciencia militar con apasionado fervor mientras tenía aún fresca en la mente su formación en la academia y la ilimitada ambición de sus veinte años de edad de aquel entonces. Pero era muy difícil ascender en un regimiento de infantería a fuerza de mero mérito militar. Los ascensos estaban reservados a candidatos de distinguida alcurnia y poseedores de aún más distinguidos contactos, y Franco, un desconocido oficial de bajo rango, comenzó a albergar un amargo resentimiento. Sabía que era mejor que todos aquellos jóvenes caballeros que, tras haber cumplido tres años de servicio obligatorio o voluntario, y

haber participado en una o dos operaciones no revestidas de particular peligro, ya se habían ganado una estrella más en la graduación militar. Él aguardaba vigilante su oportunidad.

En aquellos años inmediatamente previos a la Primera Guerra Mundial, el general Berenguer estaba organizando unidades de nativos para que sirvieran como tropas de choque a imitación del Ejército colonial francés. Necesitaba oficiales dispuestos a comandar aquellas tropas salvajes, a las que siempre se enviaba a la línea de fuego, y de las que nunca se sabía si terminarían volviéndose contra sus propios oficiales —como, de hecho, ya había ocurrido en docenas de ocasiones— huyendo a las montañas con sus rifles y su equipo a cuestas. La principal compensación que recibían los oficiales de esos «regulares» era un rápido ascenso, y Franco fue ascendido, primero, a primer teniente, y, luego, a capitán, cuando aún no tenía más de veintidós años de edad. Los moros lo creían invulnerable a las balas, pero, en 1916, recibió un tiro en el vientre que casi lo mató.

Fue en ese periodo cuando Franco cometió lo que, muy probablemente, fue su primer acto de rebelión. Se había presentado para un ascenso al grado de comandante, pero se le había denegado en virtud de su extrema juventud. ¿Dónde se había visto que hubiera comandantes de veintidós años? Franco escribió entonces una carta al rey de España, jefe supremo de los Ejércitos, apelando a su poder para revocar la decisión. O bien se merecía el ascenso, o bien no, alegó él; pero si se lo merecía, debían concedérselo. Tenía amigos en la Corte. Y consiguió el ascenso. Pasó a ser comandante, el más joven del Ejército español. Pero no había ningún mando disponible para él, por lo que se vio condenado a esperar su oportunidad inactivo en Oviedo. Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento del funcionamiento interno de una comunidad militar puede imaginarse el ambiente en el comedor de oficiales en torno al «jovenzuelo» que ya era comandante, cuando había allí capitanes que acumulaban veinticinco años de servicio. Tampoco los capitostes podían estar tranquilos oliéndose el peligro que para ellos podía representar aquel arribista que trepaba por el escalafón sin mostrar respeto alguno por los encanecidos bigotes de los generales.

Fue entonces cuando la suerte volvió a llamar a su puerta. El Gobierno había creado una Legión para Marruecos, con el nombre de «Tercio de Extranjeros», y se necesitaban oficiales voluntarios que fueran capaces de lidiar con soldados reclutados entre la escoria de Europa. Franco se presentó voluntario para que se le asignara un mando en el Tercio. La Legión Española, a cuyo frente estaba el entonces coronel Millán-Astray, fue dividida en «estandartes», cada uno bajo el mando de un comandante. Por su valor y sus conocimientos militares, Franco se ganó en aquella fuerza una posición solo inferior a la del jefe de la misma, y quién sabe si más distinguida aún, pues el peor defecto de Millán-Astray fue siempre el de darse demasiada importancia.

Millán-Astray no perdía nunca la ocasión de hacer público anuncio de su propia y temeraria valentía por adelantado, con nutridas estridencias y aspavientos. El valor de Franco era de una variedad más fría y serena, lo que le permitía medir bien el curso de las operaciones y evitar desastres y sacrificios absurdos de sus hombres, como los que a menudo causaba la imprudente osadía de su jefe. Franco era, además, un hombre de excepcional buena fortuna: salía indemne de lances en los que muchos oficiales y soldados caían muertos o heridos. Y la muerte no solo parecía no querer saber de él, como él mismo decía a veces, sino que incluso le ayudaba a despejarle su carrera limpiándola de obstáculos. Millán-Astray quedó incapacitado para el servicio activo después de que las balas hicieran tantos estragos en su cuerpo y su rostro que ya no podía seguir ejerciendo como jefe de la Legión. El del comandante Franco fue uno de los tres nombres sugeridos para relevarle en el mando; los otros dos, el teniente coronel Valenzuela y el también teniente coronel González Tablas, morirían en apenas unos meses, con lo que Franco se convirtió en jefe de la Legión Española por derecho propio.

Mientras tanto, en las primeras décadas del siglo XX, se iban sucediendo las desgracias para la campaña española en África. El rey formó entonces un directorio militar presidido por el general Primo de Rivera, y las fuerzas españolas en Marruecos procedieron a una desastrosa retirada hacia sus baluartes en la costa. Pero, a raíz de aquello, el líder de las tribus rifeñas, Abd el-Krim, se proclamó sultán y atacó a los franceses en

Marruecos, y España no tuvo más remedio que acudir en ayuda de Francia para acabar con él. Hubo, pues, que conquistar Marruecos y volver a pacificarlo. El propio general Primo de Rivera viajó a África. Mientras estaba allí, tomó decisiones estratégicas discrepantes de las de Franco, lo que derivó en lo que, desde cualquier punto de vista posible, fue un acto de insubordinación por parte de este. Y probablemente fuera Franco quien tenía la razón en aquel momento. Se trataba de una situación de extremo peligro, y el general Primo de Rivera no dejaba de ser un jovial señor mayor, aficionado al vino y las mujeres, que quería enderezar el país a su paternal modo. Al final, el dictador cedió y fue Franco quien elaboró los planes de la exitosa ofensiva sobre Alhucemas, preludio de la posterior conquista progresiva de la infeliz colonia. Completada la reconquista de Marruecos, Franco se vio convertido en general con solo treinta y dos años de edad.

La guerra había terminado. Parecía que los generales del Ejército español no iban a ser más que figuras decorativas a partir de aquel momento. Franco fue nombrado director de la Academia General Militar de Zaragoza, pero él no podía conformarse con ser una figura decorativa. Él era un soldado activo que necesitaba la guerra para vivir. En lugar de limitarse a ser un director nominal de la academia, alguien que solamente firmara documentos oficiales en su despacho y se dejara llamar «abuelo» por los cadetes, adoptó un papel activo en la instrucción y expuso sus teorías tácticas y estratégicas a los futuros oficiales. Con el tiempo, se manifestó en contra de la política militar del Gobierno republicano que, en 1931, había reemplazado a la monarquía. Tras haberse «politizado» con aquel gesto, fue destituido y promovido por los sucesivos Gobiernos de izquierda y de derecha, alternativamente. Al final, consideró necesario olvidar su promesa de lealtad a la República y unir su suerte a la de los que estaban preparando la Guerra Civil, encantados de tenerlo de su parte por su reputada valentía y su genialidad militar. En vísperas de la guerra, era uno de los ocho generales encargados de comandar la insurrección, encabezados por el general Sanjurjo.

En aquel momento, la muerte volvió a ponerse de su lado. Unos días antes del estallido real de la rebelión, el líder civil de la misma (y previsible futuro dictador de España), José Calvo Sotelo, fue asesinado en Madrid en represalia por el asesinato anterior de Castillo, un popular teniente de la Guardia de Asalto. Tras aquello, el general Sanjurjo continuaba siendo el cabecilla militar del movimiento. Pero cuando despegaba de Lisboa para ocupar su puesto al frente de la insurrección, su avión se estrelló cerca del aeródromo de salida y perdió la vida.

La rebelión nacional había sido así decapitada. En Burgos se formó entonces un consejo político-militar: la Junta [de Defensa Nacional]. Franco, el hombre que había organizado el transporte por mar y aire de los moros y del Tercio de Extranjeros desde Marruecos hasta España, fue entonces proclamado Generalísimo de las fuerzas nacionales el 1 de octubre de 1936. Luego, en junio de 1937, cuando se iba a formar el primer Gobierno nacional propiamente dicho en sustitución de la Junta militar, se postuló al general Mola para que fuera su presidente. Pero también Mola moriría al poco en un accidente de aviación. Como consecuencia, el Generalísimo se quedó sin rival alguno que le pudiera discutir el mando de la España nacional y, tras la victoria final, el del Estado español.

A nadie que lo haya visto le resulta fácil imaginarse a Franco como líder de España. En su aspecto físico, tiene menos de español que de judío mediterráneo típico (y no es que pretenda yo introducir aquí ninguna teoría racial). Es regordete y bastante bajo, incluso para lo acostumbrado en España, donde los hombres altos son excepción; tiene la piel muy blanca y el pelo negro, aunque sus ricitos apretados de antes se han tornado ahora en franjas grises y una calvicie incipiente. Su redondo rostro, con una nariz normal aunque afilada, se va estrechando en un mentón pequeño bajo unos labios infantiles y adustos. Sus ojos, algo saltones, son inexpresivos y muy abiertos: son los ojos de un hombre que carece de problemas interiores personales y se mantiene incólume ante los exteriores. Siempre me ha parecido que mostraba síntomas de aquella predisposición linfática que elimina (o, cuando menos, reduce) muchas de las reacciones y sensaciones

que resultan normales en otras personas. Sea como fuere, no cabe duda de que, físicamente, Franco no se corresponde en modo alguno con la idea española tradicional de un héroe y un «caudillo».

Quien nunca fue un político; quien nunca pretendió interferir en la política interna de España, si hemos de creer sus declaraciones al comienzo de la Guerra Civil; quien nunca había tenido un credo político que presentar ante el pueblo y quien nunca había movido a las masas en una ola de entusiasmo como sí lo hicieran Hitler y Mussolini en ciertos momentos de sus trayectorias se encontraba de pronto al frente del país merced a la oportuna intervención de la muerte y a su propia organización magistral de la matanza de un millón de españoles.

Mucho se ha escrito sobre la psicología del general Franco, pero apenas si existen descripciones de la misma que vengan de algún amigo íntimo, por la sencilla razón de que, debido precisamente a su prodigiosa carrera militar y su egocéntrica actitud distante, este joven general tenía muy pocos «íntimos» y muchos críticos envidiosos. Quienes más podrían contar sobre la vida privada de Franco serían los soldados que han compartido acuartelamiento con él durante años. Pero, con los escasos hechos conocidos de que disponemos, solo podemos facilitar un análisis provisorio de su carácter.

Francisco Franco probablemente se sintió abrumado por las responsabilidades del mando militar a una edad demasiado temprana. Hasta entonces, solo había sido un oficial joven y audaz a quien no le había resultado muy difícil expresar su personalidad. Pudo arriesgar el cuello cuando le vino en gana con los demás oficiales, hermanos de armas suyos, como espectadores: indiferentes algunos, admirados otros y condescendientes no pocos, que sentían lástima por el insensato que creía necesario arriesgar la vida en África cuando a un oficial español normal le resultaba muy fácil mantenerse a distancia del peligro y aguardar a los ascensos automáticos o recurrir a los buenos contactos que tuviera.

Pero cuando Franco fue ascendido al grado de comandante, la cosa cambió. Acababa de entrar en la camarilla de aquellos que en el Ejército español son llamados los «jefes» y ya no era un simple oficial de bajo rango. La casta de los jefes en España abarca a todos los grados que van

desde comandante hasta general y está formada, generalmente, por hombres de edades comprendidas entre los cincuenta y los setenta años. La camarilla se mostró hostil al «comandantín», como habían empezado a llamarlo en Oviedo. ¿Quién era aquel mozuelo que se había atrevido a abrirse paso en un círculo reservado a hombres maduros? La camarilla quería que Franco se pudriera en Oviedo a la espera de un mando que no le llegara nunca. Pero entonces, un día, Franco rompió con la camarilla y se marchó a la Legión para dedicarse a la tarea de construirla y desarrollarla. Lo cierto, sin embargo, es que fue la Legión la que lo construyó y lo desarrolló a él.

Y fue así como Franco terminó convertido en un producto de la Legión Española, por lo que, para comprenderlo, hay que comprender lo que es la Legión. Esta Legión, que yo conocí personalmente desde el día en que se fundó en 1920 hasta comienzos de 1924, es muy diferente de la imagen que de ella se dibuja en las leyendas románticas tejidas en derredor suyo por un sector crédulo de la prensa inglesa cuando los legionarios acudieron a «liberar a España de los rojos» en 1936.

El decreto que instituyó el Tercio de Extranjeros permitía que cualquiera que tuviera la condición física requerida se alistara en él. A ningún candidato a legionario se le inquiría por su nombre, su país o su pasado. Una vez aceptado, pasaba a estar bajo la protección de la ley española, convertido ya en soldado de España, y ninguna fuerza policial podía reclamarlo. Esta era una garantía que se extendía a delincuentes de toda ralea, incluso a aquellos que habían sido condenados a muerte en España o en el extranjero. El Gobierno español no extraditaba a los soldados del Tercio. Las primeras unidades de la Legión eran fácilmente distinguibles. Estaban formadas por convictos fugados, aventureros y forajidos, hombres desmoralizados por la Gran Guerra.

En las oficinas de reclutamiento se presenciaban innumerables escenas como la siguiente:

Oficial de reclutamiento: ¿Nombre?

Recluta: ¿Y a usted qué más le da? Ponga el que más le guste... Juan Pérez.

O. R.: ¿Nacionalidad?

R.: ¡Oiga, menos charla! He venido aquí porque me han dicho que ustedes no hacían preguntas. Si es así, me quedo; si no, me voy.

O. R.: De acuerdo. A partir de ahora, este será su nombre y estos sus datos personales...

Y alistados quedaban. Allí había desde tratantes de blancas de Marsella hasta fugados del viejo penal colonial de Ceuta, pasando por desertores de navíos de todas las naciones, un *ras* abisinio, un príncipe ruso y cuatro o cinco oficiales alemanes condecorados con la Cruz de Hierro de Primera Clase que habían perdido su equilibrio mental en los campos de batalla de Francia y que solo vivían ya para matar (pues en tal necesidad fisiológica se había convertido aquel impulso para ellos). Y había borrachos. Allí debían de estar alistados los peores borrachos del mundo. Jamás he visto a personas más bebedoras que aquellos primeros legionarios: más *sanguinariamente* bebedoras, quiero decir.

Cuando el primer buque de transporte de reclutas atracó en Ceuta, la ciudad tembló. La primera noche, fueron asesinadas dos personas en la localidad: una prostituta y un cabo de la guardia. Y esa misma noche, comenzó una persecución contra los legionarios por las callejuelas que duró hasta la mañana siguiente. Para entonces, se contaban ya dos muertos más. En veinticuatro horas, el mando se vio obligado a instalar un campamento de tiendas en [Dar] Riffien, a unos veinte kilómetros de Ceuta, y a encerrar en él a toda aquella horda que había aterrorizado la ciudad. El teniente coronel Millán-Astray pronunció entonces su primer discurso, que comenzó con un «¡Caballeros legionarios!».

La disciplina se impartía con salvaje fiereza.

La tropa se quejaba de la comida y, un día, cuando llegó la hora de servirla, el primer hombre de la cola se negó a que le dieran su ración. El oficial lo mató de un tiro en la cabeza. El segundo se negó a su vez, y también este cayó muerto junto al caldero. El tercero dudó, cogió su porción, entró en la cantina y la tiró. El oficial le disparó. Los demás se comieron sus raciones. Pero, tras aquello, la comida mejoró.

Fue en el campamento de Riffien donde se inventó la famosa «guardia de agua»: el fondo de una garita de cemento, en la que apenas si cabía un hombre de pie, se llenaba de agua hasta el extremo inferior de la abertura (unos cuarenta centímetros en total), y allí se encerraba al infractor de turno durante una semana o dos, con los pies apenas sin espacio para moverse y cubiertos de cuarenta centímetros de agua.

En Rokba el-Gozal, un soldado del Quinto Estandarte disparó su rifle una noche. Al llegar la patrulla hasta donde estaba aquel hombre, él confesó que había visto unas sombras y se había asustado. Cuando, a la noche siguiente, se instalaron puestos de avanzada en previsión de emboscadas, ese mismo soldado fue atado a un tronco de árbol, mirando hacia las posiciones moras, y allí lo dejaron toda la noche para que se le curara el miedo.

Cuando atacaba, el Tercio no conocía límites a su venganza. Cuando dejaba atrás un pueblo, nada quedaba de este más que llamas y cadáveres de hombres, mujeres y niños. Yo mismo fui testigo de cómo habían quedado arrasados los pueblos de Beni-Aros en la primavera de 1921. Cuando mataban a un legionario en alguna marcha aislada campo a través, sus compañeros cortaban el cuello de todos los hombres de los pueblos vecinos hasta que el agresor diera la cara. Los moros llamaban a la Legión los «diablos de la borla roja», en alusión a la pieza que adorna sus gorros.

Tras el desastre de Melilla de 1921, Ceuta envió el Primer Estandarte de la Legión como fuerza de auxilio. Uno de los legionarios afirmó en el barco que le cortaría las orejas al primer moro que se encontrara. Nada más poner pie en el muelle melillense, fue precisamente cortar las orejas del primer moro con el que se encontró lo que hizo: concretamente, las de un amigo de las fuerzas españolas y notable de la comunidad mora. Nada le ocurrió a aquel legionario por aquello.

Los oficiales del Tercio tenían que mostrarse más despiadados que sus soldados, pues, si no, estos no habrían dudado en dispararles por la espalda en plena acción de combate. Yo mismo vi a uno de sus oficiales caer en Ayalia por el efecto de una bala que le había atravesado limpiamente el cuello tras alcanzarle por detrás.

Durante muchos años de su juventud y su edad adulta, Franco vivió y se desarrolló en medio de ese cuerpo salvaje, dándole forma al tiempo que era formado por él. Se acostumbró a esa vida de aventura bárbara, se habituó a la visión de la destrucción, y perdió por completo la cualidad de la imaginación humana, si es que alguna vez llegó a poseerla.

Tras haberse vuelto más despiadado, más egocéntrico, más desconfiado e infinitamente más seguro de sí mismo, al término de la guerra de Marruecos Franco se vio de pronto reducido al nivel de un teórico y un profesor, o, en según qué momentos, al de un mando militar corriente destinado a una región militar olvidada. Sus esmerados cálculos estratégicos, despojados de su vía de salida natural en un escenario bélico, se transformaron en ensueños peligrosamente concretos sobre campañas contra el «enemigo interior», encarnado en sus propios enemigos personales, aquellas personas que querían acabar para siempre con la guerra y con el Ejército. Ahora era a esas personas a quienes había que vencer o erradicar cuales soldados insubordinados del Tercio. No eran mejores que los insurgentes moros, y ni siquiera mostraban la valentía de aquellos. ¿Terror? Si lo ordenaba él, era justicia militar, porque él actuaba en ese caso como comandante supremo.

A Franco debió de parecerle natural e inevitable convertirse en Generalísimo, pasar luego a ser Generalísimo y Caudillo, e imaginarse erigido en futuro líder de un Ejército español aumentado para luchar por un Imperio español acrecentado (obviamente, a expensas de Francia y Gran Bretaña). Siempre habría otros que se encargaran de hacer el trabajo político por él, aunque solo fuera porque le necesitaban. Y seguro que, porque él haría grande a España, otros países se harían aliados suyos (países que también hubieran derrocado a la decadente democracia para traer de vuelta la disciplina y la guerra). Esos países existían, ciertamente: eran Alemania e Italia.

Pero, a día de hoy, en la primavera de 1941, Italia se ha convertido en vasallo de Alemania, y el mismísimo Reich, extendido por todo el continente desde el Peloponeso hasta los Pirineos, necesita a España, sí, pero no como un aliado, sino como una base de operaciones. Franco se encuentra ante un callejón sin salida: sin destruir el tejido mismo de su poder totalitario, no puede hacer otra cosa que atender las demandas de Hitler y tratar de guardar las apariencias pidiendo a cambio una compensación moral y territorial. Mientras los alemanes preparan aeródromos en suelo español, él se mantiene callado y distante, y deja que

su tutor político, Serrano Suñer, actúe. Él, Franco, es prisionero de su propio pasado, prisionero del fascismo para el que él mismo había ganado la primera sangrienta batalla de la guerra europea.

Así pues, el retrato del general Franco que emana de los hechos concretos es el de un hombre desprovisto tanto de la debilidad física del miedo como de imaginación alguna. Un hombre de una fría inteligencia (y puede que hasta genialidad) militar, como dijo de él el mariscal Lyautey, pero carente de las cualidades propias de un líder político o un estadista. ¡Una simple herramienta peligrosa y destructiva en manos de unas fuerzas políticas y sociales ajenas a él!

Capítulo III
LAS FUERZAS QUE RESPALDAN A FRANCO

En 1928, fui durante unos meses gerente temporal de una de las mayores y más rentables haciendas agrarias de Castilla, la Dehesa Casablanca. El dueño era un hombre muy rico, una especie de fanático religioso que vivía como un avaro pero que, sin embargo, gastaba enormes sumas de dinero en sus hijos, de quienes quería hacer unos auténticos caballeros aristócratas. Había adquirido la mayor parte de sus propiedades —incluida la propia granja Casablanca— concediendo préstamos al 60 % de interés a los dueños originales de las mismas, que las ponían como garantía hipotecaria de aquellos. Aunque ejercía un poder feudal absoluto sobre sus vastos dominios, no era de sangre azul ni pretendía serlo. Sus hijos, sin embargo, tenían unos coches magníficos, frecuentaban los más selectos círculos, y uno de ellos era amigo de los más destacados toreros de España, pero también de las más elegantes mujeres de mundo de Madrid.

Tres pequeños pueblos dependían por completo de la granja para su subsistencia económica. No había ningún otro gran patrono en la zona y los hombres que no se atrevían a emigrar de aquellas localidades tenían que acudir a él a ofrecerse como braceros, pastores y, en contados casos, artesanos (herreros, carreteros, carpinteros y albañiles). Estos rudimentarios artesanos eran la élite de los trabajadores; por encima de ellos, en la jerarquía, venían ya el vinicultor y el encargado de la prensa del aceite de oliva. Los pueblos estaban a casi diez kilómetros cuesta arriba de la granja y era habitual que los hombres durmieran en unas dependencias anexas. Cada dos domingos, iban a sus casas a cambiarse de ropa y regresaban al amanecer del lunes. Pero oían misa dominical en la capilla de la finca, porque allí se pasaba lista, y si alguien faltaba, se le evaluaba negativamente, a menos que fuera uno de los hombres que estaban

trabajando en los campos en aquel momento. Los hombres cuyas familias iban a misa recibían una mención positiva y, por eso, las pobres mujeres hacían el esfuerzo de desplazarse regularmente a pie hasta la capilla con sus hijos pequeños, a fin de que a sus hombres les dieran trabajo para unas semanas más.

El jornal medio era de 1,75 pesetas (algo así como 1 chelín). Los jornales más altos eran de 2 chelines con 6 peniques. La jornada laboral era «de sol a sol», es decir, que los braceros tenían que comenzar a trabajar antes del alba y terminaban tras anochecer. Dormían junto al ganado y tenían que levantarse en plena noche para dar agua a las vacas o atender a los cerdos y las ovejas. La mayoría de ellos tenían cinco o seis hijos, pero, aun así, el dueño les descontaba la manutención del jornal que les pagaba. En cuanto lo veían posible, los padres enviaban a los hijos a trabajar a la granja. Todo el trabajo era estacional. No existía, huelga decirlo, forma alguna de seguro social.

En una ocasión, los recolectores de aceitunas, que cobraban a destajo y ganaban unas 2 pesetas al día, pidieron un aumento. Querían que les pagaran 25 céntimos más por fanega (es decir, un incremento de penique y medio, lo que habría llevado sus ingresos diarios hasta el chelín con 6 peniques). Su petición fue rechazada y ellos se declararon en huelga. Mi hermano, que era el gerente permanente, discutió con el amo y le recordó que las bandadas de pájaros que arrasaban a diario con los olivares desatendidos causaban en realidad más pérdida económica que la que habría causado pagar esos jornales más altos. El dueño respondió: «Yo llevo esto como un negocio. No me importa que la cosecha entera se eche a perder, porque yo no dependo de ella, pero los trabajadores deben aprender que no tienen derecho a reclamar nada». Así que la cosecha se pudrió en los árboles y los lugareños comenzaron a pasar hambre. Por la misma razón, el dueño también se negó a modernizar la maquinaria, vieja y obsoleta, que había en la finca. No es de extrañar, puesto que la mano de obra humana es más barata a ese precio, e introducir máquinas complejas habría obligado a traer técnicos y mecánicos de las ciudades, con sus ideas subversivas.

El viejo no era de ningún partido político en particular, aunque, en un sentido general, se encuadraba en la extrema derecha católica. Sus hijos probablemente se hicieran falangistas: no lo sé, no he seguido sus prometedoras trayectorias. Los braceros de la finca de Casablanca, cada vez más desesperados y llevados de la tenue conciencia de que tenían derecho a una vida mejor que la de la mera subsistencia, se convirtieron en aquellos a quienes la gente llamaba «anarquistas». Durante la gran huelga de los trabajadores agrícolas de 1933, mataron el ganado y quemaron las cosechas de su odiado jefe: ninguno de ellos vio otra opción de acción política y social colectiva después de que las esperanzas iniciales de la nueva República se hubieran echado a perder con la subida al poder de hombres como su patrono. Por aquello se los castigó con crueles penas de prisión y hambre.

He descrito esa hacienda en particular y su estructura porque son ejemplos típicos de los cimientos económicos sobre los que se han desarrollado la derecha y la izquierda españolas durante las tres primeras décadas del siglo actual. El rico usurero de tierras, convertido ya en capitalista que, lejos aún de ser un industrial moderno, controla toda la vida política, religiosa, social y económica en vastas extensiones de terreno, y su coprotagonista, el peón agrícola, cada vez más hosco, desesperado y anarquista, han interpretado un papel más fundamental en la vida política de mi país que los políticos y los obreros organizados de las ciudades. No fueron los terratenientes aristócratas de Andalucía y Extremadura, reducidos en número, sino los muchos capitalistas agrarios de las llanuras de Castilla quienes más activamente se destacaron como enemigos de la reforma agrícola y el progreso social, y como fuerza motriz de los partidos políticos de la derecha.

Al comienzo del presente siglo, España estaba gobernada nominalmente por un rey, Alfonso, que ahora acaba de fallecer, pero que no era entonces más que un muchacho que había heredado una monarquía precaria. El país estaba vacío de dinero y de mano de obra: de dinero, porque las aventuras coloniales se habían engullido las pesetas que

quedaban; y de mano de obra, porque, además del oneroso precio que se habían cobrado las guerras en Cuba y Filipinas, un flujo continuo de emigrantes españoles huía de la miseria de su país hacia América. Solo había una cosa en la que España era rica, rica como casi nadie: en «héroes». Y no existe forma de riqueza más peligrosa que esa para un país que precisamente no sabe qué hacer con sus héroes.

El primer cuarto del siglo deparó a España las largas e ineficientes campañas de Marruecos, un buen terreno de combate en el que mantener ocupados a héroes que, de otro modo, estarían inutilizados.

Pero, mientras tanto, se habían ido produciendo cambios importantes en el propio país. La política española había dejado de estar dominada por un puñado de generales que lideraban unas camarillas políticas que trasladaban sus particulares duelos a las calles, y había empezado a adherirse a las reglas parlamentarias. Surgieron las organizaciones obreras y la ley tuvo que reservarles un espacio en política, con lo que la gran masa del pueblo español descubrió entonces su derecho a tener su propia cuota participativa en la vida pública.

Aquello era una novedad. Durante la era «liberal», España había seguido siendo —incluso allí donde la débil y corrupta clase media española había logrado introducirse en la maraña de intrigas políticas y componendas de intereses— un país esencialmente feudal en el que los señores conservaban su monopolio. Cuando la revolución social pasó a constituir una amenaza para las clases dirigentes, que hasta entonces solo habían tenido que pelear por el reparto de poder entre ellas mismas, estas —la aristocracia feudal agrupada en torno a la Corte, el alto clero, el Ejército, los grandes terratenientes, los contados capitalistas y el ingente e inflado cuerpo de los funcionarios del Estado— tomaron posición contra aquellas otras fuerzas incipientes. Y, aun así, los millones de españoles (dieciocho de un total de veinte) que sufrían una vida de hambre e impedimentos no pedían nada más que una democracia parlamentaria que pusiera fin a los privilegios hereditarios. Pero eso era pedir demasiado.

El primer intento de aplastar el progreso moderno y forzar el retroceso de la situación en España fue obra de la monarquía a comienzos de los años veinte. El rey Alfonso instigó un golpe militar característico de la tradición

de los «pronunciamientos» de generales ambiciosos. Pero la dictadura patriarcal de Miguel Primo de Rivera resultante de aquello fue un fracaso; la corrupta monarquía murió de pura debilidad, y una noche, en abril de 1931, el rey tuvo que abandonar España a toda velocidad subido a su famoso Hispano-Suiza de 60 CV. La República española se instauró así de forma incruenta y, gracias a ello, con una democracia tan amplia que todos sus enemigos hallaron confortable acomodo en ella.

Su primer presidente fue un antiguo monárquico que se había convertido a la causa republicana por desprecio y rencor hacia Alfonso XIII. Era un cacique típico de la provincia de Jaén, alguien que había hecho fortuna especulando con el aceite de oliva y que mantenía la más cordial de las relaciones con la Iglesia; de ahí que muchos de los políticos de la vieja escuela hicieran piña en torno a él con la excusa de que tenían que protegerlo de los peligros de un Gobierno y un Parlamento democráticos. La pugna se inició desde el mismo día de la constitución de las nuevas Cortes. La mayoría parlamentaria se adhirió a los principios desarrollados durante la lucha contra la moribunda monarquía: la Iglesia dejó de tener rango de credo oficial del Estado; se disolvió la Compañía de Jesús y se despojó a las órdenes religiosas de su anterior inmunidad ante la ley. Además, se desarrollaron planes para reformar el Ejército, reducir la absurdamente elevada cifra de generales (próxima al millar) y de oficiales (uno por cada once soldados). También se proyectó la reforma del derecho a la propiedad de la tierra para dar acceso a esta a quienes quisieran trabajarla, y para erradicar los vergonzosos latifundios de la región de Extremadura, donde los braceros hambrientos se peleaban por hacerse con las bellotas maduras en dura pugna con los cerdos de engorde y con la Guardia Civil. Asímismo se proyectaron sendas reformas del poder judicial y de la Administración pública, aparte de planes para combatir el analfabetismo y para introducir los centros de enseñanza laicos, para sanear las finanzas nacionales, para crear un estatuto de los trabajadores y para hacer efectiva la jornada laboral de ocho horas.

Con estos proyectos, la República se atrajo la inmediata hostilidad de todos aquellos que sintieron atacados sus derechos. Eso quiere decir la animadversión de nada menos que la españolísima y poderosísima Iglesia

católica; del Ejército, a excepción de la tropa, con lo que los enemigos eran uno de cada doce militares; de los grandes terratenientes; los bancos; la industria y las grandes empresas, y, por último, de la gran masa de los funcionarios de niveles superiores al más básico. (Estos últimos, los de «tercera categoría», eran los pobres desdichados, sin influencias ni contactos, que, en 1931, ganaban 150 pesetas mensuales —unas 4 libras— y hacían todo el trabajo duro).

¿Cómo luchar contra la República? Los grupos de la derecha estudiaron bien a su enemigo. Vieron que por las filas de este se movían una serie de ambiciosos arribistas, dispuestos a ser sobornados con dinero u honores, como Alejandro Lerroux; pero también un buen número de intelectuales románticos y republicanos viejos, así como una inmensa masa informe de trabajadores del campo y la industria, «pequeños hombres», que compartían la convicción romántica de que ya se había ganado la gran batalla por la democracia republicana cuando, en realidad, esta estaba a punto de empezar.

Y la derecha sobrevivió por sus propios medios. Tenían de todo: fondos en abundancia; capacidad de ejercer presiones personales; la tremenda influencia religiosa de los confesionarios y los púlpitos, reforzada por el inveterado sistema educativo doctrinario; apoyo del extranjero; control moral y económico sobre los pueblos, y, por encima de todo, la posibilidad de activar el aparato militar en cualquier momento.

Mussolini había mostrado ya su interés por los problemas españoles en 1924, cuando había dado lecciones de dictadura al general Primo de Rivera, quien quería, según sus propias palabras, salvar la monarquía y la nación con «los atributos de la virilidad». También Hitler, aunque en fecha más reciente, había recuperado ese interés activo por España que tan asiduamente había cultivado el servicio de inteligencia de la Alemania del káiser. La derecha española sabía que podía contar con la afinidad práctica de las dos potencias fascistas. Tenía de su lado, además, al hombre más rico de España, el millonario Juan March, que estaba dispuesto a arruinarse, si hacía falta, para arruinar, a su vez, a la República, porque esta había anulado su escaño en las Cortes —obtenido mediante fraude electoral— y lo había enviado a prisión por delitos contra la propiedad. La derecha

también podía contar con la industria pesada alemana y con un sector de la italiana, interesadísimas ambas en los recursos naturales todavía por explotar en España. Asimismo, podía dar por sentado el interés favorable (y algo más que benévolo) de la City de Londres y de los importantes capitalistas británicos y estadounidenses con intereses en España, y, finalmente, también podía contar con la indiferencia de la política exterior británica, aun cuando la lógica dictara que Gran Bretaña era un aliado natural de la República. Y cuando digo «indiferencia», sé que soy culpable de quedarme muy corto: en realidad, salvo unas pocas excepciones destacadas como las del señor Churchill y el señor Eden, la mayoría de los conservadores británicos veían con desconfianza la nueva forma de gobierno republicano instaurada en España. Y en Francia, la corrupta y venal derecha de los Laval y los Bonnet ardía en deseos de cooperar con la derecha española en un momento en que la izquierda gala era ya presa de la inestabilidad y de la división interna.

De entrada, la derecha española estaba dividida en grupos que actuaban de manera independiente, aunque los unieran unos objetivos comunes. Los jesuitas formaron enseguida un partido político católico y, simultáneamente, una organización obrera católica que, en teoría, era un sindicato, pero, en la práctica, funcionaba como un grupo político. Los pocos grandes industriales que había en España sumaron fuerzas para defenderse frente a la nueva legislación laboral y recurrieron para tal defensa a toda clase de medios, desde la presión personal hasta los cierres patronales masivos. Los monárquicos españoles, anteriormente divididos en dos bandos definidos por su respectiva lealtad a dinastías diferentes, llegaron a un acuerdo y movilizaron conjuntamente el antiguo fanatismo de las provincias norteñas que habían luchado por el pretendiente don Carlos contra la reina Isabel II durante la primera mitad del siglo previo. Mussolini prometió su apoyo a un movimiento dedicado a la «liberación de España». La Alemania de Hitler organizó sociedades culturales, profesionales y deportivas a través de los canales de sus diplomáticos y de los numerosos alemanes residentes en España. Las futuras SS españolas fueron instruidas en los métodos nazis. Los oficiales españoles formaron organizaciones

clandestinas y llegaron incluso a ordenar la construcción de fortificaciones de hormigón en puntos estratégicos de las carreteras madrileñas, amparándolo todo en unos presuntos ejercicios de instrucción militar.

La derecha española tenía la ventaja de estar unida por un fin común y bien definido, pero carecía de líderes. Con el pretexto de la religión, los jesuitas crearon a uno, José María Gil Robles, quien, como inteligente discípulo de sus amos que era, reunió en torno a su propio grupo político a una gran masa de derechistas sin que prácticamente ninguno de ellos tuviera creencia fanática alguna en ningún credo político. En 1934, la Iglesia casi logró el control constitucional del país a través de ese partido de Gil Robles, la llamada CEDA. No lo consiguió, pero no tanto porque los obreros se sublevaran contra el clericalismo en la famosa revolución de Asturias de 1934, sino porque las represalias tomadas por el Gobierno de entonces contra Asturias fueron tan salvajes que, al final, el país entero estaba conmocionado y habían cundido en él las protestas avergonzadas contra lo sucedido.

Fue más o menos por entonces cuando se produjeron dos acontecimientos que afectaron a la cuestión del liderazgo político. Unos meses antes de la revolución asturiana, el Gobierno Lerroux había otorgado una amnistía a los instigadores de una anterior rebelión derechista abortada; uno de sus líderes, el católico fascista José Calvo Sotelo, regresó entonces a España desde el exilio y recuperó su escaño de diputado en las Cortes. Al mismo tiempo, las incipientes SS españolas se iban desarrollando a buen ritmo merced a las tolerantes simpatías del Gobierno, y al dinero y las influencias de sus patrocinadores nazis. Lo que yo he llamado aquí las SS españolas es la organización conocida por el nombre de Falange, y requiere de cierta explicación adicional.

El anterior dictador español, el general Miguel Primo de Rivera, tenía un hijo, José Antonio, un joven e inteligente abogado que había aprendido, a partir de los errores de su propio padre, lo difícil que era gobernar un país atrasado como España. Parece ser que estaba tan resentido por el fracaso de su progenitor como convencido de que él sabría hacerlo mejor. Al final, se sintió llamado a continuar allí donde su padre había fallado: en la reconstrucción militarista de España para auparla al rango de potencia

europea. La imagen de lo que su padre pudo haber hecho y no hizo, su propia educación religiosa y su familiaridad con el fascismo italiano y, posteriormente, con el nazismo alemán lo llevaron de un modo lógico a la conclusión de que solo una dictadura basada en un partido nacional único, adaptada a las necesidades y las peculiaridades de España, pero siguiendo el modelo de las dos dictaduras fascistas europeas, podía aportar la solución al problema. Esto lo movió a formar un grupo constituido por la Falange Española (unas fuerzas de choque) y las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), una organización obrera, así como por el Sindicato Español Universitario (SEU) como organización de intelectuales y estudiantes.

La Falange, como serían conocidos todos ellos, fue desde el principio independiente de todos los demás grupos derechistas, aunque no se opuso abiertamente a ellos. Contaba, cómo es obvio, con amplio apoyo alemán —algo que un fascismo puramente español católico no habría podido tener—, pero, durante mucho tiempo, careció de influencia alguna en las fuerzas armadas.

Por su parte, el Ejército español —o, para ser más precisos, su cuerpo de oficiales— eligió al general Sanjurjo como líder de su propia organización política secreta y lo acompañó de otros ocho generales.

Así pues, en los momentos precedentes al estallido de la rebelión contra la República, estos eran los grupos que formaban el bando rebelde: un partido católico moderado liderado por Gil Robles, un grupo católico monárquico-fascista liderado por José Calvo Sotelo, un grupo de militares comandado por el general Sanjurjo y un grupo puramente nazi-fascista liderado por José Antonio Primo de Rivera. Las fuerzas monárquicas conservadoras se habían asociado con el grupo de los militares y estaban representadas en él por el general Mola.

Pero en los días inmediatamente previos al comienzo real de la rebelión, Calvo Sotelo fue asesinado, el general Sanjurjo murió en un accidente aéreo en Portugal, José Antonio Primo de Rivera fue arrestado y encerrado en prisión y José [María] Gil Robles se asustó y huyó a Portugal. Sin una cabeza dirigente y responsable, el movimiento rebelde se convirtió, en aquellos momentos iniciales, en un hervidero de ambiciones personales.

Los generales de las provincias castellanas formaron una Junta militar. El general Queipo de Llano se proclamó dictador de Andalucía y se mofaba de la Junta todas las noches desde los micrófonos radiofónicos: «¡Haré lo que me dé la gana!». Entretanto, Franco, cumpliendo con su verdadero papel de líder militar eficiente, invadió el sur de España con sus «regulares» moros y el Tercio, sin hacer caso alguno de la incipiente Junta. Y la verdad era que ninguna de esas partes sabía bien en qué dirección se encaminaban.

La Guerra Civil se desarrolló a un ritmo inesperado. Toledo pronto fue reconquistada por los nacionales y parecía que el Madrid republicano tenía pocas esperanzas de poder defenderse tras los cinco primeros meses de combates. La Junta veía la victoria al alcance de la mano. El 1 de octubre de 1936, tras la entrada en Toledo de la columna del general Yagüe, Franco fue proclamado Generalísimo de los Ejércitos y «Caudillo» *(Führer)*, pero no jefe de Estado. El general Cabanellas, un viejo y gris monárquico, continuó ejerciendo las funciones de presidente de la Junta en Burgos, y el general Mola, cuyo ejército amenazaba Madrid, continuaba siendo la personalidad política más prominente entre los generales. Fue él quien inventó el famoso lema de la «quinta columna» que esperaba que lo ayudara a conquistar Madrid desde dentro, en colaboración con las cuatro columnas del Ejército que avanzaban sobre la capital. Mola era el hombre que encarnaba las esperanzas de los monárquicos y los católicos propiamente dichos: esperanzas de restablecimiento de una monarquía feudal, respaldada por las capacidades de combate de las tropas de requetés, sencillos campesinos de Navarra, Guipúzcoa, Cataluña y Galicia, que seguían a sus señores feudales entonces como los habían seguido (a ellos y a sus curas) durante las guerras carlistas de un siglo antes, porque para ellos el señor de su valle era la viva representación del mundo, el rey, Dios y su modo de vida.

Pero, por detrás de los generales, la Falange —con sus milicias— se estaba convirtiendo en el flagelo de la retaguardia. Sus líderes radicales estaban empeñados en crear su propio Estado totalitario (un Estado fascista moderno) libre de reliquias feudales y desvinculado de la tutela de la Iglesia. Allí estaba también presente Alemania, respaldando a la Falange. También se encontraban los católicos moderados de Gil Robles, a la sombra de la guía ejercida por los jesuitas, que se habían dado cuenta de que las

raíces mismas del sistema monárquico en España estaban muertas y luchaban entonces por crear su propio Estado autoritario corporativista. Esas dos tendencias rivales, la de los totalitarios católicos y la de los totalitarios fascistas, estaban necesitadas de una figura representativa, puesto que ni una ni otra eran suficientemente fuertes para volar por sí mismas. El único hombre posible en ese sentido era el verdadero líder militar de la guerra, el general Franco, no implicado en ningún partido político concreto, aunque personalmente comprometido contra la monarquía. Ambas alas tenían cierta influencia sobre él: los católicos, porque le habían ayudado en la Corte a lo largo de su carrera, y Falange, porque estaba conectado con la mencionada ayuda «técnica» que los rebelados recibían de Alemania, sin la cual el asedio de Madrid tenía muy pocas esperanzas de triunfar.

Nació así la idea de convertir a Franco en el líder de un partido nacional único. No cabe duda de que no fue una idea suya propia; pero él encontró la asesoría necesaria para dar el paso en su cuñado, Ramón Serrano Suñer, un hombre dotado de perspicacia política, astucia, ambición (bajo una apariencia de modestia) y muy buena relación tanto con católicos como con falangistas, aunque, de entrada, mejor aún con los primeros. Este hombre ejerció de secretario político de Franco.

El 5 de febrero de 1937, Jiménez del Rey publicó un sensacional artículo en la *Gaceta Regional* de Salamanca (ciudad donde Franco tenía su cuartel general) en el que proponía la creación de un partido franquista y sugería la instalación en todas las ciudades de grupos locales abiertos a «todos los hombres de buena voluntad». Al mismo tiempo, Gil Robles, quien, incluso desde su exilio voluntario en Portugal, continuó ejerciendo como líder de su partido Acción Popular, dio instrucciones a su representante en Valladolid, Luciano de la Calzada, para que interrumpiera toda actividad de su formación y diera un paso adelante hacia la «unificación». El 6 de febrero, toda la prensa salmantina hizo suya la propaganda favorable a un «partido propio de Franco» que estuviera basado en el principio de la hermandad, que incluyera solamente a los católicos y que se rigiera por la máxima de «Dios, España y Franco».

Este «globo sonda» chocó con tal oposición general que, tres días más tarde, la secretaría del Generalísimo negó oficialmente que Franco tuviera intención de convertirse en dictador o en líder de un partido personal. Franco consideró necesario mostrarse ante la multitud desde el balcón de su palacio en Salamanca con un líder de los requetés a su izquierda y un líder de la Falange a su derecha. Su imparcialidad llegó hasta tal punto que la exclamación proferida en aquella ocasión fue la típica de los monárquicos requetés, «¡Viva España!», pero acompañada del saludo «romano» de la Falange.

Aun así, se había dado la voz de alarma, y los monárquicos y los tradicionalistas con sus milicias —los requetés— comenzaron a manifestarse de forma tumultuosa en algunas provincias septentrionales en defensa de sus derechos.

El 1 de marzo se produjo un hecho significativo: el *signor* Cantalupo acudió a Salamanca en calidad de enviado oficial italiano y presentó sus credenciales ante Franco como jefe del Estado español. Aquel era el primer reconocimiento oficial de Franco por una potencia extranjera. Un par de días después, fue *herr* Von Faupel quien llegó allí como enviado oficial alemán con el mismo propósito. En la recepción que le dispensó, Franco pronunció una frase que no ha tenido la fama que se merecía y que se merece incluso ahora, cuatro años después de lo sucedido: «La paz que se ha instaurado en el Reich es la paz que queremos instaurar en nuestro país».

Y hay que admitir que Franco ha cumplido aquella promesa.

Tras un mes de conflictos internos, el 19 de abril de 1937 se publicó el «Decreto número 255», firmado por Franco. En él se proclamaba la fusión de los requetés y los tradicionalistas (por un lado) con la Falange (por el otro) para formar un único partido, el único que existiría a partir de entonces, denominado Falange Española Tradicionalista y de las JONS, a partir de la disolución voluntaria de todos los demás partidos restantes. El nombre mismo (que, como es lógico, nadie menciona nunca completo en el uso cotidiano) evidencia la intención de que fuera una solución de compromiso entre los dos grupos rivales. El preámbulo del decreto declaraba que esta unificación era un paso necesario para la creación de un Estado totalitario. El nuevo partido actuaría como intermediario entre el

Estado y la sociedad. Estaría bajo el mandato directo del jefe del Estado. Las milicias de ambos grupos también se unificarían y quedarían integradas en el Ejército, aunque bajo un mando especial. Incluso la junta política del partido sería nombrada en primera instancia por el jefe del Estado.

Al principio, los falangistas estaban eufóricos. Franco había aceptado el programa de la Falange como el propio del Estado frente al programa católico, con la sola excepción de un único punto falangista que apenas ya si reclamaban porque les producía cierta vergüenza, referido a la reivindicación de cierta cuota de educación laica.

Sin embargo, dos días después, el 21 de abril, se produjeron unos misteriosos incidentes en Salamanca. Los líderes de la vieja guardia falangista, los «camisas viejas», se rebelaron contra Manuel Hedilla, que había quedado al frente de la Falange en ausencia de José Antonio Primo de Rivera. Los militares tuvieron que intervenir y se procedió al arresto de los jefes de los más importantes departamentos falangistas: Moreno, jefe regional de Navarra; Garcerán, jefe regional de Castilla; Sancho Dávila, jefe de Andalucía, y Agustín Aznar, jefe de la milicia falangista. Un hombre murió aquel día, según las informaciones. Los falangistas detenidos estaban convencidos de que la aparente victoria escondía una derrota sin paliativos para la Falange.

Una semana después, el 28 de abril, fue a Manuel Hedilla, que se había encargado de todas las negociaciones con Franco (o, más probablemente, con Serrano Suñer), a quien le llegó el turno de rebelarse, porque, aunque había sido nombrado miembro de la junta política del nuevo partido, no podía estar de acuerdo con los demás nombramientos, que correspondían mayoritariamente a requetés y políticos católicos. Hedilla tenía la sensación de que le habían engañado y se atrevió a pedir cuentas a Franco. Este ordenó su arresto tras una aparatosa escena. El tribunal que se formó entonces para juzgarlo condenó a Hedilla a muerte y probablemente habría sido fusilado de no haber sido por la intercesión alemana.

Los nazis no habían olvidado que, poco antes, Hedilla había felicitado a Hitler por el cuarto aniversario del Tercer Reich expresándole sus mejores deseos de un futuro en el que «el destino nos una contra el enemigo común en Occidente» (no había tenido lugar aún el pacto germano-soviético). El

general (entonces aún coronel) Yagüe también estuvo detenido brevemente por expresar su oposición a la solución «reaccionaria». Y el 3 de mayo fueron arrestados todos los miembros del anterior Consejo Nacional de la Falange y todos los jefes de los diferentes «servicios» falangistas. Se dice que esas medidas se adoptaron a instancias de Serrano Suñer «para facilitar la absorción de las milicias por el Ejército».

Conseguido este objetivo, la mayoría de dirigentes de la Falange fueron puestos en libertad, pero Hedilla desapareció de la escena política: se le autorizó posteriormente a emigrar a América del Sur. Mientras tanto, la Falange original había quedado desmembrada, como frustradas habían quedado sus aspiraciones, y Franco había pasado a ser el jefe del partido totalitario.

La clave de la situación estaba así en manos de los militares y, virtualmente, en las del propio Franco. Una vez eliminadas las dificultades con el partido, se tomó la decisión de formar un Gobierno regular. Estaba previsto que el general Mola fuera su ministro de la Guerra y del Interior, y quizá también jefe del Gobierno mismo. El ala no falangista parecía así estar en alza. Sin embargo, el 7 de junio de 1937, precisamente el día fijado para la formación del nuevo Gobierno, Mola murió en un accidente de aviación. Con ello, desapareció la única figura política en el grupo de los generales y las posibilidades de los monárquicos quedaron más debilitadas si cabe.

Franco tenía el camino expedito ante sí. Pero, a sus espaldas, continuaba todo el viejo rencor y todo el conflicto entre unas fuerzas políticas encadenadas entre sí por una guerra que tenían que ganar juntas para poder sobrevivir por separado.

Tras la victoria, aquellas fuerzas volvieron a mostrarse con mayor violencia que nunca. Ahora han cristalizado en los dos únicos grupos que tuvieron algún tipo de relevancia política durante toda esta pugna: la fascista Falange y la politizada Iglesia católica de España.

Capítulo IV
LA CASTA

Gran Bretaña posiblemente está gobernada por una clase dirigente, pero en España mandaba una casta dirigente, que es algo muy distinto.

La casta que hasta hace poco gobernaba el Estado español, y que ahora lo gobierna de nuevo, procede de diferentes capas de la sociedad española: de la vieja aristocracia feudal, de familias de empresarios (aristócratas o no) y de la clase media alta y la clase media propiamente dicha. Todos esos grupos de la casta dirigente han luchado por el poder, no solo por motivos puramente materiales, sino también por una razón más sutil y puede que incluso más poderosa: para huir de una sensación de inferioridad propia de la España moderna y para mostrarse como legítimos merecedores de la superioridad social.

Esta casta incluye al cuerpo de oficiales, al clero de la Iglesia católica, a los funcionarios y a las profesiones científicas y liberales. Obviamente, las puertas de las universidades estaban cerradas a la gran masa del pueblo llano y, por consiguiente, la educación y la enseñanza —que estaban casi exclusivamente en manos de miembros de la casta e iban dirigidas a estudiantes de esa misma casta— seguían unos itinerarios estrechos y rígidos. Los conocimientos allí impartidos no eran universales, sino que se ajustaban estrictamente a las exigencias de la casta y, conforme a ellas, formaron las mentes y mentalidades de las generaciones que ahora han alcanzado la edad adulta.

Las academias militares concentraban su atención en las antiguas tradiciones de la infantería española, «la mejor del mundo», y de los grandes capitanes y los «conquistadores», así como en los esplendores militares de la historia nacional pasada: un esplendor que había sido arruinado, se decía allí, por las modernas corrientes del liberalismo.

En los seminarios españoles, por su parte, la teología católica era transformada en una teología nacional española, caracterizada por una filosofía propia, muy diferente en la rigidez de sus concepciones de los estudios religiosos en el resto del mundo. Por otra parte, la enseñanza en esos seminarios ponía, y pone, todo el acento en la grandeza y el esplendor de la Iglesia católica española durante la historia de la nación anterior al momento en que «las malditas corrientes foráneas del liberalismo» destruyeron ese esplendor y esa supremacía.

Los estudiantes de Derecho, de ciencias y de letras, se encontraban recluidos dentro de esas mismas barreras. Aparte del Derecho Español y, por supuesto, de su fuente original, el Derecho Romano, no parecía haber otro sistema jurídico que estudiar en el mundo. Los pocos profesores modernos que, en contadas ocasiones, lograban una cátedra en alguna universidad y se atrevían a hablar de la jurisdicción y la legislación que se enseñan y se aplican en otras partes del mundo eran tachados de meros «corruptores de las puras y prístinas fuentes del Derecho Español». Por su parte, la ciencia académica se había estancado en la Física y la Química del siglo pasado. En 1931, en la Escuela Central de Ingenieros de Madrid, se estudiaba la teoría del motor de combustión interna con los restos de un viejo automóvil —creo recordar que era un De Dion-Bouton del año 1908 o 1910— que había sido montado y desmontado millones de veces. Los estudiantes aprendían la mecánica de un motor mirándola en sus propios coches..., o simplemente no la aprendían. Aparte de unos estudios superficiales de los clásicos griegos y romanos, la literatura, tal como se enseñaba tradicionalmente en las universidades, se limitaba a la literatura española del Siglo de Oro, cuyo legado —según se decía— también habían echado a perder las corrientes del liberalismo y el naturalismo. Lo único que se enseñaba de Victor Hugo y Zola era que habían sido anatemizados: tal parecía que hubieran significado la perdición definitiva de la literatura mundial. Las traducciones completas de la obra de Shakespeare eran algo prácticamente desconocido en las universidades españolas; cuando yo estudiaba, incluso estaban prohibidas en las librerías porque su lenguaje se consideraba demasiado soez.

Desde comienzos del siglo actual no han sido pocos los ilustres pedagogos, estudiosos, científicos y escritores —algunos de ellos de fama mundial, como Giner de los Ríos, Miguel de Unamuno, Menéndez Pidal, Jiménez de Asúa, Ortega y Gasset, Ramón y Cajal— que han conseguido plazas oficiales en las universidades o han fundado escuelas oficiosas y han enseñado a sus estudiantes lo mejor y más avanzado del pensamiento y la ciencia contemporáneos. Crearon un núcleo de discípulos en los que han pervivido los más elevados valores intelectuales de España. Pero, en la práctica, todos esos grandes españoles trabajaron aislados y fueron blanco de los despiadados e incesantes ataques de las retorcidas mentes de la casta. De ahí que nunca lograran transformar realmente la educación ni la perspectiva de las nuevas generaciones.

En la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, la cátedra de Derecho Canónico estaba ocupada, cómo no, por un sacerdote católico; durante años, el catedrático de Derecho Civil fue un fanático católico tal que se le consideraba casi un cura; en aquel entonces, quienes impartían Derecho Político eran Julián Besteiro y Jiménez de Asúa, dos socialistas moderados. Las clases de estos dos profesores estaban abarrotadas de «estudiantes libres», no matriculados en la universidad, pero eran evitadas por los alumnos de la casta bajo el pretexto de que no era una asignatura obligatoria. Pero tanto el Derecho Canónico como el Civil sí lo eran, y las clases de aquellos dos docentes tradicionalistas estaban abarrotadas de jóvenes señoritos de la casta.

La gran masa de futuros funcionarios y abogados estudiaba en universidades de provincias, donde la enseñanza se mantenía, en general, inmune al espíritu modernizador y donde la vida social de la ciudad en cuestión contribuía a sofocar cualquier germen de rebelión intelectual.

De resultas de lo anterior, y a excepción de una minoría de rebeldes, la gran masa de los estudiantes españoles recibía sus títulos universitarios, sus diplomas de funcionarios o sus nombramientos militares desde el convencimiento de que España en su conjunto —y sus propias profesiones en particular— había caído en un estado de decadencia del que no cabía culpar sino a insanas influencias extranjeras, y de que la única defensa

frente a tal decadencia era bruñir el blasón del antiguo esplendor español y luchar por el reavivamiento de la vieja llama nacional para que volviera a ser algún día el faro que guiase a un mundo sin fe.

Se entiende así que cualquier joven teniente español recién salido de la academia hubiera aprendido a considerarse a sí mismo no un servidor del Estado, sino un «héroe potencial» a quien lo único que impedía ser tal héroe era el Estado mismo al que servía. A su juicio, los políticos de Madrid mandaban en el Ejército, y eso era intolerable. ¿Qué sabían ellos de las necesidades y de la misión histórica del soldado español? De ese modo, todo oficial español se convertía automáticamente en «enemigo potencial» del Estado.

Esta es la historia psicológica que se esconde no solo tras la rebelión del Ejército contra la República, sino también tras todo un siglo de «pronunciamientos», de golpes militares y de insurrecciones de todo tipo: contra el absolutismo de Fernando VII, contra el liberalismo discreto del reinado de Isabel II, contra la constitución moderadamente democrática de Alfonso XIII y, por último (y por lógica, y en forma de terrible estallido), contra la República, uno de cuyos postulados capitales era la renuncia a la guerra y la reducción de las fuerzas armadas a aquello que dictaran las necesidades interiores del país. Estos oficiales, héroes frustrados (cuando no héroes de una guerra perdida), anhelantes de una nueva oportunidad, se consideraron guardianes del «honor del Ejército».

Me refiero al honor de ese viejo soldado español al que Antonio Machado* caracterizó como alguien siempre dispuesto a

> […]
> negar que la batalla de Nancy se perdiera
> si el gran Duque de Alba ordenado la hubiera;
> negar su hija al rico indiano pretendiente,
>
> porque no es noble asaz Don Bela. Y, finalmente,
> invocar sus innúmeras proezas militares
> para pedirle algunos ducados a Olivares.

La historia del clero español que salía de los seminarios era muy similar, aunque con una importante diferencia: las filas de la Iglesia española estaban formadas por personas de las clases media y baja, y del campesinado pobre. No dejaba de ser sintomático del declive de la Iglesia que los hijos de las familias de clase media alta y aristocráticas se negaran a encerrarse a estudiar en sus seminarios. La inmensa mayoría de curas, pues, provenían de las clases más humildes y de menor nivel educativo. La carrera clerical les ofrecía una milagrosa posibilidad de escapar a la esclavitud de la tierra y convertirse en curas y, quién sabe, tal vez en obispos e incluso en cardenales. Miles de niños de diez u once años de edad eran reclutados cada año; sus mentes eran sometidas a un proceso de moldeado durante ocho o diez años de vida enclaustrada hasta que absorbían, no ya las enseñanzas canónicas, sino también la doctrina general de la casta, de la que pasarían a convertirse en miembros activos.

Según la historia nacional que allí aprendían, la Iglesia de España siempre ha sido el alma y el intelecto del Estado español; España debió toda su grandeza a la Iglesia. Sus sacerdotes no solo fueron padres espirituales, sino también guerreros siempre prestos a luchar en la Santa Cruzada, a salvar almas —a punta de espada si fuera necesario— y a sostener y reforzar el poderío de la nación, que equivalía a sostener el poderío de la Iglesia. Por desgracia, en los tiempos modernos ya no había infieles contra los que batallar en Orán, como hiciera el gran cardenal Cisneros, ni herejes a quienes quemar en la hoguera. La modernidad había destruido todas esas oportunidades bélicas. La Iglesia se sintió atacada entonces por una enfermedad intangible, el «liberalismo», que convertía a los hombres en librepensadores, los apartaba de la amantísima Madre Iglesia e incluso los hacía volverse contra ella. La Iglesia había perdido su derecho a los diezmos; tampoco tenía ya sus propios tribunales autónomos. Había perdido sus riquezas, sus «provincias enteras», sus donaciones de monarcas generosos. La clerecía recibía ahora un mísero estipendio del Estado en concepto de compensación por lo que el Estado había «robado» a la Iglesia; y ya no gozaba de inmunidad ante la ley laica.

A quienes se incorporaban al personal de esa Iglesia militante se les enseñaba a luchar, antes de nada, por la Iglesia española y, solo en segundo lugar, por la salvación de la humanidad; la idea era que si la Iglesia española era grande y fuerte, la humanidad tendría que someterse a ella, por lo que su salvación sería la consecuencia natural de esto último.

Cuando el clérigo joven recibía su ordenación, o bien estaba henchido de un belicoso misticismo, o bien se veía enfrentado a un problema insoluble: ¿qué otra cosa sabía hacer más que decir misa? Sus estudios canónicos de nada le servían para la brega cotidiana. Un cura renegado era un ser especialmente estigmatizado en España, alguien despojado de la esperanza de ganarse la vida. De manera que un joven así se resignaba a su destino o se convertía en un cínico. De ello resulta que el clero español esté compuesto por una gran mayoría de personas resignadas a su suerte, además de por dos minorías: la de los místicos que creen que están llamados a ayudar a la gran misión de restituirle su gloria a la Iglesia española y la de los cínicos que terminan dominando a las resignadas masas y manipulando a los místicos.

El resto de grupos de la casta dirigente de España, los funcionarios y los profesionales liberales, se agrupan a su vez (a modo de autodefensa) en torno al bloque de la Iglesia y al del Ejército. La minoría rebelde se ha encontrado siempre, incluso en la mejor época de la República, muy desamparada de cara a su subsistencia material si perseveraba en su rebeldía. Un médico perdía su clientela si no hacía ostentación de religiosidad y si no pertenecía a alguno de los grupos políticos de la casta. Lo mismo ocurría con los abogados, los ingenieros o los profesores universitarios. Un escritor español podía tener en su contra a todos los críticos de la prensa del país. Y si su obra excedía ciertos límites, chocaba con la oposición hasta de los púlpitos de las iglesias y, si se daba el caso, de los tribunales de justicia, que lo atacaban por difamación o por delitos contra la decencia pública (y donde era juzgado, además, por jueces y magistrados pertenecientes a la casta). Así pues, los rebeldes de la minoría se vieron forzados a buscar refugio en el pueblo llano e, implícita y simultáneamente, a defenderlo y a convertirse en líderes de este. Y eso es algo que la casta jamás les ha perdonado.

Los hombres más odiados por la derecha española no fueron los socialistas como Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista, ni Francisco Largo Caballero, poderoso secretario general del sindicato; estas dos figuras habían surgido de las filas de la clase obrera. No, los hombres más detestados eran Manuel Azaña, Jiménez de Asúa, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro y otros como ellos, que pertenecían a la casta y desertaron de ella.

Cada grupo de esta casta dirigente ha albergado su propio odio particular hacia sus miembros renegados o débiles, así como su ansia específica de recuperar el poder y su aspiración propia de gobernar como piensa que el país debería ser gobernado. En el fondo de esta avaricia de poder radica el arraigado complejo colectivo de inferioridad nacional frente a las potencias extranjeras, un complejo que, al mismo tiempo, también lo es de todos los individuos de la nación. La idea de la gloria perdida de España y el miedo de la casta dirigente a ser considerada como inferior se han transmitido incluso a la superficie de la mentalidad de los españoles de clase obrera, como siempre ocurre con la ideología de las castas dirigentes. Difícilmente encontraremos un español que no diga de alguna cosa española que es «la mejor y más grande del mundo», una frase de lo más reveladora.

Y aun así, la gran masa del pueblo llano de España —artesanos, obreros y, sobre todo, trabajadores de la tierra— no padece ese complejo de inferioridad de sus clases dirigentes. Esas personas eran —y continúan siendo— unos donnadies en la escala de poder. Pueden aspirar a serlo todo, pero no con la codiciosa ansiedad del rico que se ve bajado al mundo y llora por sus posesiones perdidas, sino con el deseo limpio de unos hombres que se proponen dar forma a su futuro sin sufrir el lastre del pasado. En realidad, ese es el secreto de la bondadosa dignidad del campesino español, una dignidad que nace de la conciencia, en su fuero interno, de saber que es un hombre entero.

Su contrapunto es la dignidad de hidalgo de los aristócratas españoles que están demasiado obsesionados con su grandeza irrecuperablemente perdida, y se muestran sensibles en exceso a cualquier ofensa que pueda poner su impotencia al descubierto. Sienten un odio salvaje contra la ola

creciente de democracia y tratan de someterla y recuperar su superioridad propia. Cuando los famosos periodistas Knickerbocker y Sefton Delmer informaban de la Guerra Civil desde el bando franquista durante los primeros meses de la contienda, coincidieron con un oficial aristócrata que les aseguró que los rebeldes del bando contrario pertenecían a una raza inferior de personas solo aptas para servir o, de no querer servir, para ser exterminadas. Aquel hombre era un caso típico.

Todas las divergentes aspiraciones de los grupos que forman la casta convergen, no obstante, en un único mito político que lo abarca todo y que, aun así, sirve a cada uno de ellos a su modo: un mito que funciona como soldadura de todos los grupos y, sin embargo, deja en cada uno la esperanza de satisfacer sus apetitos particulares sin interferir en los de los otros.

Como era lógico, el fascismo español ha desarrollado el mito hispánico, que es el vínculo entre las fuerzas rivales del Estado autoritario.

Capítulo V
EL MITO HISPÁNICO

«El mito —decía Malinowski— está íntimamente asociado con los más profundos deseos del hombre, con sus temores y sus esperanzas, con sus pasiones y sus sentimientos, pues valida el orden social, justifica el esquema social existente y abarca desde las expresiones puramente artísticas hasta el legalismo».

Cuando en julio de 1936 los señoritos de España se alzaron contra sus siervos de antaño, tuvieron que buscarse un mito, un modelo nacional que llenara de emoción, fe y autojustificación el vacío dejado por la ausencia total de un programa político concreto y que diera respuesta a las necesidades y las aspiraciones de una gran parte de la nación. Ellos no podían decir simplemente «volvamos a los viejos tiempos, los de antes de la República», porque era obvio que aquellos no habían sido buenos tiempos y porque incluso ellos mismos se habían sentido impotentes y frustrados entonces. Tampoco podían decir «construyamos una sociedad nueva, completamente diferente de la República y del viejo orden que la precedía», porque querían retomar precisamente las bases de la vieja sociedad, aunque revestidas de la parafernalia de la industria y la guerra modernas, y porque cualquier concepto de sociedad nueva implicaba socialismo de uno u otro signo. Querían tener la sensación de ser unos cruzados de lo mejor del orden antiguo, aunque renovado, ensalzado y actualizado. De ahí que tomaran su mito de la tradición y la historia españolas tal como se mantenían vivas en las enseñanzas escolares y eclesiásticas. España había sido grande —nadie podía negarlo— y luego había degenerado —nadie podía negar esto último tampoco— en perjuicio del país y de sus ciudadanos. España había sido grande durante su edad dorada particular, la de los reinados de los Reyes Católicos y sus herederos, Carlos V y Felipe II,

momento histórico en el que Cristóbal Colón, Cortés y Pizarro conquistaron nuevos mundos para ellos. Tenía que recuperar su posición en el mundo: ese era el fin que había llevado a los generales nacionales, al cardenal primado Gomá y a Juan March a unir fuerzas en la Guerra Civil decididos a encaminar a España de nuevo por la senda de la grandeza imperial.

Una vez ganada su batalla, tenían que justificar toda la sangre, los sacrificios y la destrucción, y tenían que justificar su orden social, presentándolos como elementos intrínsecos de la Gran Cruzada. Su mito creció y continúa creciendo. Sus rasgos principales son: cuando los españoles se convirtieron en una sola nación durante el reinado de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, expulsaron a los moros y llevaron consigo el espíritu hispánico y la fe católica hasta la otra orilla del Atlántico, hasta América. Carlos V y sus grandes capitanes habían construido aquel Imperio español en el que «nunca se ponía el sol» y habían hecho que el nombre de España fuera temido y respetado en todo el mundo. España se merecía aquella grandeza porque buscaba algo más que poder: estaba llevando a cabo una labor espiritual desde su condición de único país en la historia que se había sentido llamado a cumplir una misión universal. Los mejores hombres de la España imperial —sus caballeros y misioneros — conquistaron y civilizaron partes enormes del Nuevo Mundo. El bienestar del español individual estaba seguro, porque la grandeza de la nación y de su misión eran supremas.

El declive de España comenzó cuando se perdió la conciencia nacional y, con ella, el espíritu de misión universal. Los conflictos internos socavaron las fuerzas vitales del país. Ya no se construían barcos. El Ejército mermaba. La Administración escatimaba mezquinamente en gastos. Los terratenientes abandonaban y descuidaban sus propiedades, y permitían que penetraran «ideas extranjeras» en el país, con sus perjudiciales teorías. El país dilapidaba la herencia de la edad dorada del Imperio español y, entonces, llegaron el liberalismo y su aliado, el capitalismo, para asestar el golpe definitivo a lo que quedaba de aquella. La política se convirtió en un negocio lucrativo, se olvidaron las ambiciones nacionales, los intereses individuales rompieron el Estado, la anarquía campó desbocada. Una tras otra, se le habían ido arrebatando a España sus

posesiones americanas, que se habían ido declarando independientes. Cuando España estaba ya exhausta, libró sus últimas guerras y, finalmente, prisionera de sus conflictos internos y de los experimentos marxistas, se hundió en la degradación de la que Franco y la Falange habían venido a rescatarla.

Para recuperar el viejo poder bajo una forma renovada, España debía remontarse a las enseñanzas recogidas en el testamento de la gran Isabel la Católica, que exhortaba en él a sus sucesores y a la nación a no abandonar nunca Gibraltar, a expandir el imperio en África —baluarte frente a los infieles—, a conservar la unidad interna y a llevar adelante de forma intensificada la misión espiritual y cultural de España en América.

En su más simplificada versión, esta leyenda, tras la que no cabe duda que se trasluce un espléndido —y tergiversado— legado histórico, es hoy adoptada por la propaganda oficial española: «Que España fuera fuerte y grande hace cuatrocientos años y luego perdiera su fortaleza y su grandeza simplemente se debe a que su decadencia nacional ha sido aprovechada por otras potencias. Hoy España se siente fuerte de nuevo bajo el Caudillo. Ahora tiene el deber y el derecho de cumplir con el testamento de la reina Isabel por la ley o por la fuerza».

El 17 de julio de 1940, Franco pronunció un discurso en el que recordó el gran ejemplo de los Reyes Católicos y lo puso como aquel que debía seguir la nueva España. La reina Isabel, dijo, había dejado tres legados al país en su última voluntad y testamento: Gibraltar, la expansión en África y la unidad nacional. Tras su discurso, la prensa y la radio españolas emprendieron una encendida campaña de reivindicación de Gibraltar y del restablecimiento de la unidad del territorio español, una campaña cuyo ritmo vino fijado por el más destacado periodista de la Falange, Manuel Aznar, pero que se apagó en cuanto se vio que las manifestaciones estudiantiles convocadas para apoyarla en las principales ciudades castellanas habían congregado a un número discreto de participantes.

También los calculadísimos pasos dirigidos a incorporar Tánger al Marruecos español sin provocar una airada respuesta británica se envolvieron en la pantalla de humo del mito.

Estaba emergiendo el nuevo Imperio español. España estaba retomando la posición que le correspondía en el mundo. Estaba reivindicando su derecho natural, exigiendo su espacio vital en África en cumplimiento del testamento de los Reyes Católicos. Pero los herederos de los antiguos «conquistadores», de los grandes capitanes y los misioneros, todavía tenían ante sí la tarea de alcanzar aquella grandeza universal de la nación que, por sí sola, resolvería los problemas de los individuos. «Mitad monjes, mitad soldados», como los había descrito José Antonio Primo de Rivera, los jóvenes de la nueva España estaban dispuestos a sacrificarse por la nación y por su histórica misión. La voluntad unificadora y el impulso en pos de los grandes objetivos estaban simbolizados por el yugo y las flechas, antaño enseña de los Reyes Católicos, y ahora emblema de la Falange y del ascenso del Imperio hispánico.

Este es un mito que llevan años popularizando los propagandistas de la Falange y de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, así como los propios protagonistas del nuevo Estado. Presenta todas las características de un mito según la definición de Malinowski citada al comienzo de este capítulo. Está íntimamente asociado a los más profundos deseos de la casta dirigente española: hacer efectivo un poder perdido y mandar en el más amplio sentido de la palabra. Afecta a, y mueve, los temores, las esperanzas, las pasiones y los sentimientos de todos los grupos de la casta. Sacia los complejos de inferioridad y los anhelos de triunfo de los hijos de familias decadentes, de los jóvenes oficiales, de los jóvenes estudiantes ambiciosos y de quienes sueñan con ser, no los siervos, sino los amos de una Iglesia española victoriosa. Promete salvarlos de la desgracia actual en un nuevo y resplandeciente futuro. Atribuye la culpa de las lamentables miserias del presente a todos menos a la vieja y la nueva castas dirigentes, así como a las codiciosas potencias extranjeras (y a Inglaterra, la archienemiga del Imperio español, por encima de todas) y al liberalismo, la política de partidos y la democracia que pretendió erradicar las tradiciones hispánicas de la fe católica y la «caballerosidad». Invoca la imagen de los galeones regresando a España desde las colonias. Se inspira en las medio olvidadas, pero, aun así, persistentes predicaciones de las homilías y de las lecciones aprendidas en la escuela acerca de la grandeza perdida de España, y sus sufrimientos

presentes y reinos futuros. Presenta precisamente esa sonoridad mística que desafía al razonamiento desapasionado porque apela a emociones convencionales indefinidas y permite que el individuo se exalte a sí mismo al verse transportado y acompañado por la nación, al tiempo que se siente desamparado en soledad.

Con un mito similar, y parecidos precedentes de miseria, fracaso y ambiciones nacionales, el fascismo italiano y el nazismo alemán enamoraron a muy divergentes clases sociales con sus movimientos imperialistas respectivos. Pero ni en Italia ni en Alemania pudo el mito racial o nacional por sí solo hacer invisibles la pura brutalidad y el desvergonzado despotismo del nuevo sistema, ni ante los ojos de sus partidarios ni ante los de la mayoría indiferente de la población. En ambos países había ciertamente injusticias que reclamaban solución, y había una agitación social que amenazaba con derivar en cataclismo colectivo. El fascismo y el nazismo fusionaron su mito imperial con un mito social. La Gran Alemania o la Gran Italia serían capaces de conquistar su propio espacio vital solo si, gracias a los movimientos nazi o fascista, lograban en su interior la fuerza y la unión suficientes para que, al final, todos vivieran felices por siempre jamás (con su «coche del pueblo», su «radio del pueblo», etcétera).

El mito del Imperio hispánico también está soldado a un mito social. La unidad interior de España —¡mucho nos recuerda esto a la reina Isabel! — solo puede conseguirse, nos dicen, con un régimen como este por el que pagamos tan caro precio con la Guerra Civil: es decir, con un Estado español autoritario, totalitario, en el que los intereses de la ciudad y del campo, de los patronos y de los obreros, estén sincronizados y supeditados a los del Estado. Todos estos intereses de los individuos, las clases, los colectivos y las regiones deben abismarse en la causa de España, «Una, Grande y Libre».

La lucha de clases, dice el mito, fue un mal creado por el capitalismo liberal, y maliciosamente aprovechado por el marxismo y el anarquismo. La nueva España, sin embargo, ha puesto en práctica el espíritu de la fe cristiana implantando la justicia social y defendiéndola tanto de los ricos privilegiados egoístas como de la turbamulta rebelde. Patronos, trabajadores

y expertos técnicos deben colaborar en sindicatos inspirados en las viejas corporaciones gremiales y organizados conforme a una fusión (tan antinatural como práctica) de las líneas expuestas por los papas Pío IX y Pío XI en sus respectivas encíclicas *Rerum Novarum*[*] y *Quadragesimo Anno*, por Hitler en *Mein Kampf* y por Mussolini con su sistema corporativo, una fusión a la que se imprime un original sello español. La libre interacción de las fuerzas económicas es tan mala como las demandas socialistas unilaterales de la clase obrera. Un Estado corporativo, erigido sobre una sociedad nacional-sindicalista, resolverá todos los conflictos sociales inscribiéndolos en una vida nacional armoniosa. Los trabajadores del campo se organizarán en «hermandades», una denominación que, en sí misma, recuerda a las nobles organizaciones de gremios artesanales del periodo previo a Carlos V. Se educará a los niños en el nuevo espíritu de servicio digno al Estado. No se reprimirá la iniciativa privada, pero sí se restringirá en aquellos ámbitos en los que afecte al interés nacional. En realidad, si nos atenemos a la propaganda oficial, el león y el cordero podrán dormir juntos a partir de ahora.

Sin embargo, la *verdadera* Revolución Nacional-Sindicalista a la que correspondería llevar a la práctica todos esos objetivos en el terreno social no cumple precisamente con todos los requisitos del mito; no es aceptable por igual para cada uno de los grupos que participó en la creación de la España de Franco. Manifiesta una intervención y control estatales excesivos, y revela unos tintes demasiado anticapitalistas para el gusto de los grandes industriales y los banqueros, y demasiado igualitaristas para los paladines del feudalismo. Allí donde este plan social tan vagamente definido es transformado en realidad surgen la fricción y el conflicto. Pero, entonces, siempre es la otra parte del mito (la imperialista) la que acude al rescate. La «gran España» promete dar salida al espíritu emprendedor y ser la solución para unos problemas económicos irresolubles. El sueño del Imperio hispánico proyecta una luz de genuina «españolidad» sobre el raído modelo fascista de una sociedad controlada por el Estado. Puede que haya oposición entre los grupos que apoyan al actual régimen español a una u otra parte de los planes y los sistemas económicos propugnados por este, pero ninguno de ellos tiene nada que objetar a la campaña por recuperar

Gibraltar, ni a la incorporación de Tánger, ni a los planes de expansión en África, ni a los sueños del ascenso de España a la categoría de eje espiritual de Hispanoamérica.

«Todo español ha adquirido la convicción de que nuestra nación se sitúa en una categoría histórica propia; todo español se remite mentalmente a la antigua senda de la grandeza nacional», escribía *Pueblo*, órgano de prensa de los sindicatos falangistas, el 15 de febrero de 1941.

Estos sueños de un Imperio español, por fantásticos que puedan parecer a quienes son testigos de la debilidad de una España hambrienta, representarán de hecho un grave peligro en esta guerra de la democracia contra el fascismo si, además del apoyo del fascismo internacional, alcanzan a concitar el respaldo de un movimiento fascista de masas dentro de la propia España. El mito podría convertirse en una fuerza formidable si moviliza a masas de fanáticos creyentes.

¿Existen tales masas en España?

Capítulo VI
EL FASCISMO Y LAS MASAS EN ESPAÑA

España no posee actualmente ni un Estado ni un movimiento de masas que sean en puridad fascistas, pero es de vital importancia saber qué probabilidad existe de que llegue a poseerlos: vital no solo para España, sino también para la democracia británica en su lucha contra el nazismo y el fascismo.

Si las luchas intestinas en el seno de la casta que hoy dirige el país por la fuerza bruta concluyen con una victoria de uno u otro sector, el vencedor instituirá un aparato totalitario homogéneo. Pero el resultado inevitablemente consistirá en algún tipo de fascismo. Ninguna de las fuerzas rivales cree ya en un conservadurismo moderado. Ni siquiera la minoría «tradicionalista», cuyo objetivo ideal sería una monarquía absoluta y feudal. La «solución conservadora» para España existe únicamente en la imaginación de unos pocos políticos españoles aislados y en el pensamiento de ciertos círculos británicos donde se confunden los deseos con la realidad.

Pero, sea cual sea el bando que venza en la actual lucha interior en España, este deberá contar con el apoyo (aunque sea parcial) de las masas. Cualquiera puede afianzar su poder aplicando un régimen de ejecuciones, prisiones y campos de concentración, pero difícilmente podrá desarrollar política alguna si no está respaldado, como mínimo, por algunos sectores de la clase media, el campesinado o los obreros. Es un error pensar que, contra un movimiento fascista, la democracia siempre puede confiar en la gran mayoría republicana del pueblo. No cabe duda de que la mayoría del pueblo español se opuso al derrocamiento de la República democrática por una vía u otra: combatiéndolo u oponiéndole una resistencia pasiva. Pero esa

mayoría ha sido derrotada —que no conquistada: ¡eso nunca!— y cabe ahora sopesar todos los posibles factores psicológicos (entre los antiguos republicanos, incluso) que un fascismo español podría llegar a aprovechar.

La gran masa del pueblo español no está aún formada social ni políticamente, fundamentalmente porque España no es todavía un país industrializado. Me siento justificado, pues, para referirme a las masas o al «pueblo llano» sin necesidad de distinguir continuamente entre los trabajadores por cuenta ajena, los pequeños propietarios agrarios y la clase media.

Estas masas españolas sienten una arraigada desconfianza hacia los políticos y hacia los conflictos de la política. Si decimos la palabra «política», el español medio la entiende en un sentido muy parecido a aquel en el que la entienden muchos estadounidenses: es decir, como algo identificado con la intriga, la corrupción, la explotación y el dominio de unos «caciques». Basta con echar una ojeada a las experiencias del pueblo español durante los últimos cien años (o más) para comprenderlo.

Durante un siglo, el pueblo llano se sintió permanentemente defraudado y maltratado por los conservadores y los liberales, por los primeros (y todavía rudimentarios) republicanos y, antes de eso, por el absolutismo de Fernando VII, e incluso por su efímero momento de constitucionalismo hipócrita. Se sintió engañado por el reinado de Alfonso XIII (un monarca inicialmente aclamado como esperanza de la nación española) y, finalmente, se ha sentido abandonado por la democracia europea y la solidaridad socialista, últimas esperanzas a las que los españoles se habían aferrado en su lucha. En España, recordemos, las teorías socialistas habían sido adoptadas no solo por los obreros, sino también por muchos miembros de las clases altas.

Cuando se instauró la República española en 1931, lo hizo en forma de una república democrática moderna en la que todos los matices de opinión debían tener cabida. Las masas lo esperaban todo del nuevo régimen y, llevadas de una generosidad optimista desbordada, no rompieron ni un solo plato en venganza por años o, mejor dicho, siglos de opresión. El pueblo era consciente de que tendría que luchar en defensa de la República, pero hizo gala de una conmovedora fe en sí mismo y en otros. Dice un refrán español

que «el que la hace la paga». Algunos de nosotros, ante aquella llegada pacífica de la República, dijimos: «A lo peor, tendremos que pagar por lo que no hayamos hecho».

Cuando llegó el momento de defender la República, los «plebeyos» pusieron todo de su parte, pero fueron abandonados por todos. Las democracias europeas, encabezadas por Gran Bretaña y Francia, se inventaron la «no intervención». La Rusia soviética, patria del socialismo y, para muchos españoles, futuro amaneciente, ayudó ya desde un primer momento, pero a un muy elevado precio. El español medio tenía el serio convencimiento de que estaba defendiendo la democracia en el mundo contra el fascismo mundial. A él le parecía lógico y elemental que los países democráticos también lo entendieran así y le ayudaran. En vez de eso, entró en escena la no intervención. Ninguna explicación sobre sutilezas diplomáticas podía convencer a ese español de que aquello no era un acto tan suicida como desleal de sus camaradas de la gran masa de los pueblos británico y francés. Sí que llegaron camiones y aviones de Francia, así como barcos británicos, cargados de comida. Pero para los españoles corrientes aquello era lo natural —lo que debía ser— y les parecía absurdo que los gobernantes franceses e ingleses diesen por buena la palabra de alemanes e italianos, que les decían que no estaban interviniendo cuando, de hecho, aviones de Alemania e Italia estaban bombardeando localidades en España. La triste y trágica verdad es que el español corriente al que me refiero creía realmente que las democráticas Gran Bretaña y Francia eran países dispuestos a defender la democracia.

Cuando la Rusia soviética se declaró finalmente desligada de la farsa de la no intervención en vista de la flagrante participación alemana e italiana en la guerra, la alegría y la fe de las masas en España fue inenarrable: la Rusia soviética estaba de su lado. Su imagen de la Rusia soviética era en extremo simple: un país de un inmenso territorio gobernado por los trabajadores. Su entusiasmo se desbordó cuando vieron por fin que por los cielos de Madrid volaban aviones que no eran Junkers ni Capronis. Tras ello vendrían luego la reacción y la desilusión al ver que la ayuda realmente prestada no se correspondía con la idea de la Rusia soviética poderosa que anidaba en las mentes de los trabajadores españoles. Es

imposible convencer, por ejemplo, al sindicalista español medio de que la Rusia soviética no tenía obligación de ayudar a España hasta el límite de sus fuerzas, a riesgo de su propia seguridad nacional. Y lo es porque ese es el concepto que de la solidaridad se tiene en España. Los razonamientos diplomáticos podían estar bien para aquellos españoles que no pasaban de ser unos «demócratas burgueses», pero no para los otros muchos que eran unos socialistas y revolucionarios emocionales (y ni mucho menos me refiero únicamente a quienes eran miembros activos de un partido), que no podían comprender esas razones. Los socialistas sindicalistas se avergonzaban de la cautela con la que se habían manejado los partidos obreros y laboristas de la Segunda Internacional. Durante un tiempo, optaron por seguir la senda de los comunistas, pero, al término de la guerra, era evidente que los españoles se habían quedado solos. Pasaron por todos los estadios de la amargura hasta que, finalmente, para cientos de miles de ellos llegó el momento de la gran derrota y del humillante y vergonzoso «asilo» en Francia.

La única fe que les quedaba a esas masas españolas era la que les inspiraban los hombres de las Brigadas Internacionales que habían venido a luchar junto a ellos a título individual. Pero los españoles entendían que ese era el deber de todo antifascista extranjero; y para la mentalidad de un español, que alguien cumpla con su deber no es algo merecedor de gratitud, sino únicamente de respeto.

Haciendo constar este sentimiento de muchos de mis compatriotas, puede que esté causando extrañeza en muchos después de la abundante literatura heroica que se ha escrito en torno a las Brigadas Internacionales. Pero no puedo evitar constatarlo. Ese era el sentimiento que subyacía a las palabras de cortesía y bienvenida que recibió el primer Batallón Internacional cuando desfiló por la Gran Vía madrileña el día después de aquella terrible noche del 7 de noviembre de 1936, justo en la víspera de que entrara en la batalla del frente de Madrid. Y es que, en aquellas noches del 7 y el 8 de noviembre, cuando el ejército de Franco había llegado a las afueras de la ciudad, no habían sido las Brigadas Internacionales las que habían salvado Madrid, sino la propia masa popular, desorganizada, mal armada, espontánea. El pueblo de la asediada Madrid expresó con

aclamaciones y besos su bienvenida a sus camaradas extranjeros. Pero no los recibieron como salvadores, sino como hermanos llegados allí para defender a otros hermanos, para cumplir con su deber. Y puesto que esa es la mentalidad española, el sacrificio de tantos antifascistas del mundo no bastó para borrar la sensación de amargura y soledad que el resto del planeta había infundido en España.

La única gratitud incondicional que los españoles corrientes que defendieron la República en las playas, en los campos y en las calles sintieron hacia algún país, el único agradecimiento que se mantiene incólume y vivo todavía hoy, es la que se siente hacia México.

Al mismo tiempo, esta gente española sencilla sí se siente orgullosa de haber sostenido por sí sola su lucha: el suyo es como ese orgullo al que apeló Churchill en el momento más oscuro de Inglaterra. Pero sentirse orgullosa de sí misma le hace también sentirse más resentida por la deshonesta vileza de otros ante su situación.

Detectan tal vileza no solo en su particular experiencia con la política internacional, sino también en cómo se dirigió la guerra en el bando republicano. Lo que comenzó siendo un sólido movimiento contra el fascismo se vio pronto corroído por las luchas partidistas fratricidas entre grupos y entre individuos por las que al pobre Juan Español le tocó pagar el pato con su propia vida.

Al final, todo esto no hizo más que reavivar la tradicional filosofía del trabajador español: «Abajo la política, porque toda política es suciedad y ruina». La única opción que le quedaba era retirarse al desdeñoso y altivo silencio del viejo campesino castellano.

Muchos españoles permanecen todavía ahora —encerrados en su silencio, en los miserables campos de concentración de Francia, rascándose los piojos y tragándose el hambre— invictos. Muchos han cruzado el Atlántico, para seguir viviendo en silencio y, en muchos casos, en la miseria. Otros llenan las celdas de las cárceles de España, callados, hambrientos, devorados por los bichos, pero inconquistables.

¡Qué pocos han llegado hasta esta Inglaterra! No lo digo por halagar al país donde se pueden publicar libros como este, pero yo mismo he experimentado lo que es emigrar a Francia, tradicional país de refugio

donde, sin embargo, he pasado miserias y penurias. Habiendo recorrido ya todas las fases de la amargura del español corriente, cuando llegué a Inglaterra sentía una mezcla de aprensión y desencanto. Pero solo aquí he podido empezar a respirar de nuevo. Aquí un hombre puede por fin sentirse libre. Inglaterra está dirigida hoy por un hombre como Winston Churchill, que, como conservador que es, puede defender en política interior muchos postulados que van contra mis ideas, pero que, cuando menos, es un hombre. Por decirlo con toda franqueza: es un hombre con agallas. Puede que los españoles antepongamos la hombría descarnada a todo lo demás. Y tal vez tengamos la sensación de que Inglaterra nos dejó solos en nuestro propio momento trágico, pero al menos ahora, cuando ese momento le ha llegado a Inglaterra, el pueblo inglés se está mostrando tan firme y resuelto como lo fuimos los españoles de Madrid y Barcelona. Y no es fácil que un español reconozca esto: significa más de lo que un inglés se imagina. Significa que sentimos que la lucha de Inglaterra es la nuestra, incluso aunque los ingleses no sintieran en su día que nuestra lucha era la suya.

Pero dentro de España hay otros muchos hombres, de las bases republicanas mismas, que lograron escapar del desastre y llevan ahora una vida aparentemente normal, hombres a quienes acosa el miedo de ser despertados un día por la policía y arrebatados de su casa bajo alguna de aquellas acusaciones que se pueden imputar a cualquiera que no fuera un activo partidario de Franco. Son esas personas las que se hallan más vulnerables ahora a la propaganda falangista que busca lograr el control de las masas que se extienden más allá de las filas presentes del partido único. Para esas personas, integrarse en la Falange significaría librarse del miedo en el que ahora viven, y la propaganda falangista trata de atraerlas expresándose en términos de justicia social y de derechos de los pobres a fin de facilitarles una inmersión oportunista en el caso de que no quieran seguir viendo las cosas con claridad.

También son muchos los hombres a quienes la amargura por lo ocurrido los ha vuelto indiferentes: entre ellos están los escépticos, los hambrientos, los huidos que viven separados de sus familias y sus hogares. Son personas sin esperanza ni perspectivas de futuro; para ellas, ni siquiera la victoria de Inglaterra es promesa de un mejor porvenir. Quienes pueden

seguir los acontecimientos internacionales son conscientes de que Inglaterra debe concentrarse ahora en ganar la guerra y, por lo tanto, apoyará a Franco mientras el Gobierno franquista mantenga su precaria neutralidad actual. Eso significa que, bajo estas condiciones, lo más que podría hacer Inglaterra para ejercer su influencia sería favorecer una modificación política según el modelo de Portugal o el de una monarquía nominal, o quizás incluso abogar por una amnistía total.

Estas masas del pueblo español se sienten arrinconadas contra una pared. Llevan la terrible carga del aislamiento y la desesperanza, del hambre física y la miseria, y si nada hay que las libere de ese peso, no tendrán más salida que la desesperación suicida... o el fascismo, ya sea acogiéndolo con la más sumisa indiferencia o como una nueva ilusión. Y es ahí donde el incipiente fascismo español encuentra la materia prima con la que fabricar su expansión.

No podemos contraponer a esto la lealtad y la obstinación de los republicanos y los socialistas, porque estas cualidades no funcionan en los grupos psicológicos que he intentado describir aquí, o, al menos, no podrán funcionar en ellos mientras prevalezca ese aislamiento sin esperanza. Y es ahí donde entra en juego la suprema importancia de la lucha que libra ahora Inglaterra. Muchísimos españoles tienen fe en la victoria inglesa, que puede convertirse a su vez en una nueva fe en su propio futuro. Pero hace falta alimentar tal fe y, sobre todo, mejorar con respecto al pasado. Hay que convencer a esos españoles de que Inglaterra no lucha contra el nazismo alemán y el fascismo italiano solo porque, en este momento en particular, sean sus enemigos militares. Para ayudar a Inglaterra, Juan Español debe estar convencido de que Inglaterra lucha contra el fascismo en todo el mundo, contra toda forma de despotismo: que lucha por la democracia y por el derecho de todos los pueblos a autogobernarse.

Hasta aquí me he referido a los peligros de la infiltración fascista en la zona republicana, aquella parte de España que se mantuvo bajo el control del Gobierno de la República en julio de 1936. Pero buena parte de España estuvo en manos rebeldes desde el comienzo de la Guerra Civil, y, como es lógico, el estado de ánimo de su población es diferente. Allí conocieron el fascismo desde un ángulo distinto, del mismo modo que, para muchos, la

República en lucha significó no una Administración en funciones, sino una esperanza. Para el pueblo de Madrid, los fascistas españoles fueron un enemigo al que hubo que combatir durante dos años y medio desde las trincheras que bordeaban la ciudad, y que ahora actúa como un vencedor despiadado. La población de las provincias que no fueron tocadas directamente por la guerra no se siente derrotada, porque nunca tuvo oportunidad alguna de luchar. Esa población conoce el fascismo español como la fuerza que, en su caso, lleva ya casi cinco años en el poder.

Algunas provincias del norte de España estaban todavía tan sometidas al dominio del feudalismo que allí fue verdaderamente una mayoría de la población la que tomó partido por el bando de la rebelión. No hubo combates. Los pocos oponentes políticos que se negaron a rendirse fueron apartados por la vía más rápida y radical posible. En otras provincias, el Ejército, la Falange y los requetés consiguieron lanzar ataques sorpresa victoriosos porque el bando republicano carecía de armamento; lo único que hubo en tales casos fue una lucha heroica de unos pocos y una amedrentada sumisión de los demás. En ambos casos, la Administración rebelde comenzó a funcionar de inmediato. Tras una purga sangrienta, todos los funcionarios, empleados y trabajadores calificados de «enemigos del régimen» fueron relevados de sus puestos. Incluso aquellos no afectados directamente por esas medidas fueron testigos de los métodos de los nuevos amos. Pero aunque sufrieron las privaciones propias de una guerra, pudieron seguir abrigando la esperanza de que, en cuanto la contienda se acabara, el país recobraría su equilibrio, se formaría un Gobierno que corrigiera los errores y la vida volvería a ser normal.

Sin embargo, tras consumarse la victoria de los nacionales, los habitantes de las provincias que se habían visto menos afectadas por la guerra se dieron cuenta de cómo iban a comportarse sus victoriosos gobernantes ahora que las provincias «nacionales» habían dejado de ser su cuidada retaguardia. Se instaló así una apatía generalizada: entre quienes habían esperado hasta entonces que la República lograra liberarlos al final, pero también entre quienes habían esperado que los ideales por los que habían luchado en el bando del general Franco fueran respetados (sobre todo, en las provincias de Navarra y Álava, que apoyaron a la facción

carlista con miles de combatientes, así como en grandes zonas de las atrasadas pero muy religiosas provincias de Castilla la Vieja, como Salamanca *[sic]*, Zamora *[sic]*, Valladolid, Palencia o Burgos). Los carlistas y otros grupos monárquicos son hoy conscientes de que, con Franco, el monarquismo fue una mera ficción que actualmente solo está recogida en detalles como los uniformes y las insignias de los requetés, o en la entonación ocasional de la *Marcha Real* como himno nacional. Los clericales ven que la Iglesia, a pesar de su aumentada influencia, no gobierna el país a través de sus políticos, sino que quienes lo hacen son los pronazis. La desilusión está derivando en una apatía de la que tienden a derivar algunas de las peores dificultades con las que topa el Gobierno de Franco.

La zona agrícola de España, donde se producen los alimentos básicos del país (una zona que lleva bajo control nacional desde 1936), se está rezagando en sus niveles de producción debido a la desconfianza, la incomodidad y el resentimiento continuadamente crecientes de los campesinos, unos sentimientos que tienden a su vez a transformarse en una resistencia pasiva, sea esta consciente o no.

Esta visión del estado de ánimo presente de la gran masa de los españoles no solo es una interpretación mía, sino que también es la opinión de los propios falangistas. A través de su prensa y su radio, la Falange repite día tras día, y noche tras noche, que la guerra no se habrá acabado mientras no esté completa la Revolución Nacional, que el pueblo español pasa hambre, que el problema del desempleo es agobiante, que la producción agraria es insuficiente y que la producción industrial apenas si ha arrancado como tal. Y tras dibujar este panorama realista de la situación ante los ojos de la gente misma que lo está sufriendo, la Falange grita a los cuatro vientos la única y exclusiva solución que ofrece para solucionar el problema: concentrar el poder absoluto en manos, exclusivamente, de la propia Falange.

¿A cuántos puede convencer ya un llamamiento así?

Durante el desarrollo del fascismo italiano y del nazismo alemán se apreciaron fases parecidas: una minoría audaz arremetía contra los mecanismos políticos del país en un momento en que la nación se

encontraba en un estado de caos político y económico que la masa de su población sufría con fuerza. Un número muy considerable de personas, de extracciones sociales diversas, siguieron entonces a aquellos osados profetas que prometían un cambio radical, una revolución. Tanto el movimiento fascista italiano como el alemán pudieron llevar a cabo sus respectivos golpes de Estado contra el régimen existente en cada uno de sus países gracias al apoyo masivo organizado que lograron acumular.

La evolución del fascismo español siguió un proceso bastante diferente. Una coalición de todas las fuerzas reaccionarias y antidemocráticas del país (una mezcla de intereses y apetitos en conflicto e irreconciliables, desprovista de un programa de gobierno concreto, pues cada uno de sus grupos componentes —fascistas, monárquicos, católicos políticos y oficiales del Ejército— tenía el suyo, aunque ninguno de ellos estuviera apoyado por un movimiento de masas) intentó conseguir el poder mediante la fuerza militar y la ayuda extranjera. Ese movimiento, que, más que un movimiento, es una coalición, consiguió su objetivo, pero solo después de librar una salvaje Guerra Civil. Los variopintos rebeldes instauraron su Gobierno y se preguntaron: «¿Quién de nosotros está gobernando realmente?». No trataron de gobernar en coalición. Solo se pusieron de acuerdo en colocar a una figura representativa como jefe del Estado, una figura que distaba mucho de ser una síntesis viviente de todos esos diferentes grupos (porque Franco no es ningún monstruo de múltiples cabezas, y tampoco es un fascista anticlerical, un católico, un carlista, un alfonsino y un señor de la guerra encarnados en una misma persona). Con esta figura al frente, todos los grupos comenzaron a luchar entre sí por tener su cuota de poder y empezaron a lanzar llamamientos desesperados a aquellas masas de cuyo apoyo carecían tanto individual como colectivamente.

Pero, como ya han reemplazado el anterior sistema republicano por una especie de régimen nuevo creado por ellos mismos, no están en disposición de recurrir convincentemente al llamamiento lanzado en su día por los fascistas y los nazis a las masas para liderarlas contra unos regímenes a los que hacían responsables de todas sus desgracias. Tienen

que guardar las apariencias y loar la victoria, pese a que esta no haya resultado ser una victoria completa para ninguno de ellos. Solo pueden agitar oscuras e indefinidas amenazas contra falsos amigos.

En el momento actual, hay periódicos españoles de signo católico, falangista o monárquico, y hay emisoras de radio de afinidad falangista o católica (no conozco ninguna que sea carlista o monárquica), y existe también una red de emisoras oficiales de Franco de tendencia más o menos falangista.

En apariencia, los falangistas fascistas puros de la vieja guardia están en alza, pero los católicos reaccionarios también están bien preparados para la lucha. Estos católicos conservan una gran influencia en el ámbito de la educación española tradicional. La vieja guardia de la Falange, aunque acepta el catolicismo como religión oficial nacional y profesa su adhesión a la idea de la misión católica de España, es favorable a separar las funciones del Estado y las de la Iglesia, sobre todo en lo tocante a las escuelas. Esto acerca un poco a los falangistas a esa gran masa de españoles que están en contra de la intervención de la Iglesia en los asuntos del Estado. El otro sector de la población española, el que continúa inmerso en un ambiente feudal, recela del modernismo de la Falange y se hace eco de las doctrinas políticas de los católicos. La doctrina de la Falange, por su parte, cala más hondo entre aquellas personas desesperadas y desorientadas que empiezan ahora a creer que, tal vez, y después de todo, los falangistas conseguirían llevar su plan revolucionario a la práctica si se les dejara gobernar con un poder total.

Así pues, la lucha interna por el alma de las masas en la España totalitaria se reduce en realidad a los dos grandes bandos que forman la Iglesia «política» española y la Falange (la minoría monárquica ya no cuenta como fuerza genuina), y, aun así, ninguno de los dos tiene a su alcance un triunfo total en esa contienda. La Falange tiene partidarios en el seno mismo de la Iglesia, y la Iglesia se ha infiltrado a su vez en la Falange. Cada una de ellas intriga dentro de la otra por hacerse con el poder, y ambas están tan entremezcladas que parece imposible que ninguna pueda dar un paso adelante por su cuenta sin que enseguida salgan falangistas proclamando su catolicismo, o portavoces de la Iglesia declarándose a favor

de la Falange. El pueblo llano es un espectador pasivo de todo ello, desconocedor de qué papel desempeñar, y tras él está el núcleo duro de los republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas y autonomistas vascos y catalanes, que detestan a ambos bandos.

Mientras tanto, hay algo que cada vez está más claro: con tantos grupos e intereses en conflicto, tantos apetitos frustrados, tanto odio, rencor y fracaso, ningún régimen autoritario en España puede evitar prolongar el actual reinado del terror policial y la opresión sin dejar espacio para la «moderación», pues, de otro modo, él mismo se vendría abajo. Esto hace que el ciclo vicioso se renueve una vez más. Saber que quienquiera que conquiste finalmente el poder no podrá ejercerlo si no es por la fuerza bruta priva a ambas corrientes contendientes del apoyo de las masas. Y los gobernantes actuales pierden partidarios porque nadie sabe quién detenta el poder exactamente ni quién va a detentarlo. ¿La Falange? ¿La Iglesia? ¿Los monárquicos? ¿El Ejército directamente?

Lo único de lo que el español de a pie, indiferente a esa lucha, tiene conocimiento seguro es de su propia corrosiva miseria, y de que, para aliviarla, debe hacer un saludo a los oficiales, rezar el rosario (muchos rosarios) y tener un carnet de afiliado de la Falange. Sin esos tres prerrequisitos, no puede tener ni el plato de lentejas que le dispensan en los comedores de caridad del Auxilio Social. Ese mismo español toma en sus manos su plato de lentejas, que come voraz, y luego exclama para sus adentros: «Iros al cuerno, ¡todos vosotros!».

En el fondo, está dispuesto a seguir a quienquiera que afronte el problema y prometa gobernar España con mano firme.

¿Decidirán los falangistas —como Falange propiamente dicha— actuar abiertamente sin la Iglesia contra los políticos católicos? ¿Se atreverán los políticos católicos a instituir un Estado autoritario católico contra la Falange?

Diversos peligros se interponen en el camino de cualquiera de esas dos soluciones. Alemania protege y apoya a la Falange, y Alemania ocupa posiciones clave en el país; la Falange podría erigirse en líder de la enorme masa de personas que se sienten resentidas con la Iglesia política. Pero también la Iglesia podría asumir el liderazgo de todos los que odian a la

Falange. Lo de no olvidar y no perdonar es algo consustancial al carácter español tal como está actualmente moldeado, y en cada uno de los dos casos, la consecuencia de una lucha abierta por el poder sería una nueva ola de muerte y masacres impulsada, bien por el clero y los fanáticos, bien por los falangistas.

Estos dos gemelos siameses de la reacción en España no pueden separarse ni pueden arrastrar juntos a las masas consigo. No pueden librar al país de la miseria de su «nuevo orden viejo». Lo más que pueden intentar es transformar el mito de la España imperial en una realidad que les daría un mayor poder.

Capítulo VII
GIBRALTAR Y MARRUECOS

La primera piedra con la que se pretende comenzar a levantar el edificio futuro del nuevo Imperio hispánico es Gibraltar.

La devolución de Gibraltar a España es, claro está, un tema ya muy viejo. Durante la anterior guerra [mundial], desempeñó un papel que no se puede considerar irrelevante. La propaganda alemana en España lanzó entonces una campaña antiinglesa a través de *Tribuna*, un periódico de muy cuestionada reputación que se mantuvo precariamente con vida gracias a las subvenciones ocasionales concedidas por los llamados «fondos de reptiles» del Ministerio del Interior. El director de *Tribuna,* Cánovas Cervantes, era un viejo periodista, mitad chantajista, mitad parásito, que tan dispuesto estaba a dar coba a quien le pagara por ello como a escarnecer a quien no lo hiciera. *Tribuna* se presentó de la noche a la mañana como un medio partidario de Alemania, y Cánovas Cervantes realizaba visitas regulares a la embajada germana para recoger sobres de billetes que sumaban 1.000 pesetas —su tarifa mensual— y, en ocasiones, incluso más. En aquel momento, 1.000 pesetas equivalían a unas 30 libras esterlinas y representaban una cantidad astronómica para un periodista español. Los gastos del periódico se pagaban a partir de esa misma fuente. El rotativo no tardó en volverse popular entre el público en España, en parte por su recurso a un lenguaje truculento y unas ilustraciones impactantes, y en parte también porque el país estaba dividido en dos bandos diferenciados —el de los germanófilos y el de los francófilos— que estaban ávidos de noticias sobre la guerra.

El propio Cánovas Cervantes o tal vez sus mecenas decidieron convertir Gibraltar en el foco de atención de su campaña. Convencieron a Vázquez de Mella, un historiador de reconocida cultura y buena oratoria,

para que hablara en un gran encuentro sobre los derechos de España sobre Gibraltar, donde infundió un entusiasmado patriotismo en sus oyentes. Al término del encuentro, su público marchó en manifestación hasta la Puerta del Sol, corazón y centro de Madrid, y allí la situación degeneró en una lucha sin cuartel. No me cabe duda de que Vázquez de Mella era un hombre que actuaba de buena fe. Era un viejo carlista, católico ferviente, un erudito y prácticamente un desconocido más allá de cierto círculo limitado de personas. Fue simplemente utilizado por los agentes alemanes, que organizaron el encuentro para él, le hicieron disfrutar de aquella efímera fama y, a continuación, lo abandonaron. Falleció unos años después en la miseria. Pero su famoso discurso dejó una huella permanente. La propaganda germana lo hizo circular por toda España impreso en panfletos. Vázquez de Mella fue utilizado como un juguete de la política de potencias alemana de entonces en no menor medida en que los carlistas actuales han sido convertidos en instrumentos y carne de cañón del nazismo; y fue abandonado de igual modo que lo han sido los requetés del presente, entre una actitud de lástima y de agresivo desprecio a partes iguales.

Obviamente, ni un discurso así en medio de una guerra como aquella ni la ofensiva propagandística de un periodicucho habrían bastado por sí solos para impulsar una «campaña por Gibraltar» con algo de repercusión de no haber sido porque despertaron un eco hasta entonces dormido en la mente de casi todos los españoles.

Gibraltar siempre había sido un tema favorito entre un amplísimo sector de maestros de escuela y profesores universitarios en España en el que quienes vestían los hábitos eclesiásticos eran mayoría. Para los muchachos de mi generación, es decir, aquellos que fuimos al colegio y al instituto entre 1905 y 1915, los dos capítulos dedicados a Francia y a Inglaterra nos parecían los más fascinantes de la historia de España y Europa. Tal como se nos enseñaron las guerras de España contra Napoleón, era como si unos fabulosos héroes españoles hubieran derrotado por sí solos al vencedor de Marengo y Austerlitz. Nuestros maestros de Historia daban rienda suelta a su resentimiento contra Francia, el país de Voltaire y de los Derechos del Hombre. Nos contaban con todo lujo de detalles que la

Francia que había sido vencida por los españoles era atea y revolucionaria, y que era muy peligroso para un buen español y un buen católico dejarse influir por las tendencias modernas de más allá de los Pirineos.

La historia relativa a Inglaterra era muy similar. Lo poco que aprendí en la escuela sobre los ingleses y su historia estaba distorsionado y falseado. Recuerdo que una vez, inspirado por las novelas de Victor Hugo, hice orgulloso una exposición sobre la batalla de Waterloo en una clase de Historia. Cuando me atreví a decir que los ingleses habían derrotado a Napoleón, el maestro me cortó de inmediato: Napoleón había sido derrotado por los españoles en 1808, sentenció, y los ingleses solo tuvieron que luchar contra una potencia que ya estaba muerta y acabada, y por eso no les supuso especial problema vencerla. Y acompañó aquella tesis de una descripción épica de la guerra de la Independencia en España. Con la indignación propia de un niño a quien le habían arruinado el final de su relato, exclamé:

> —¡Pero si los ingleses enviaron a Wellington a España!
>
> —¡Wellington! ¿Wellington? ¿Quién era Wellington? Un aristócrata inglés que se dio una vida de comodidades en Portugal, mientras en España luchaban hasta los niños pequeños; un hombre que, tras la guerra, viajó por nuestro país para averiguar cómo los españoles habíamos ganado aquellas batallas nuestras y para aprender una lección que mucho necesitaba aprender.

Tampoco querría pasar por alto otro incidente de mis años de colegio, porque pone de manifiesto ese ambiente psicológico español en el que tan fácilmente pudo florecer una campaña antiinglesa y favorable a una ofensiva por Gibraltar. Cuando Alfonso XIII se casó con la princesa inglesa María Victoria Eugenia de Battenberg, todos los colegiales tuvimos que aprendernos los complicados apellidos extranjeros de nuestra nueva reina. Un día, cuando me tocó recitarlos ante aquel mismo maestro de Historia, añadí las palabras: «Inglesa por nacimiento y princesa de la Casa Real de Inglaterra». El cura me interrumpió con tono afable para decirme: «Por la gracia de Dios, ya no es inglesa, sino española. Y, además, ha renunciado a su religión y se ha convertido en miembro de la Santa Iglesia de Roma, así que ahora es ya doblemente española». Tras aquello, nos contó la fantástica

—aunque muy extendida— historia de que el rey Eduardo VII la había despojado de sus privilegios reales por haberse casado con un católico y haber adoptado la fe de su marido.

Con ese antagonismo hacia Francia e Inglaterra como telón de fondo, la cuestión de Gibraltar vino a adquirir el carácter de un *leitmotiv*. Siempre que se presentaba la ocasión, nos contaban cómo Inglaterra le había robado Gibraltar a España. Mi generación se había empapado tan a fondo de esa idea que, en 1914, los partidarios jóvenes de los Aliados siempre nos sentíamos avergonzados cuando los germanófilos mencionaban lo de Gibraltar para atacarnos, y solo podíamos responderles, sin mucha convicción, alegando que la de Gibraltar era una historia de hacía dos siglos y que no tenía mucho sentido traerla de vuelta en ese momento. Pero éramos agriamente conscientes de que nuestros antagonistas nos habían vencido en aquel asalto.

Si me estoy extendiendo en múltiples detalles sobre esta cuestión es porque, en la actualidad, esa tradición cultural y psicológica sirve nuevamente de importante telón de fondo para la propaganda fascista-imperialista y alemana en España. Los españoles políticamente más refinados de la izquierda citaban Gibraltar más como un ejemplo del inescrupuloso regateo político practicado por la casta dirigente española que como una acusación contra Inglaterra, aunque ninguno de ellos negaba que Gibraltar era parte consustancial del territorio español. Puede que muchos pensáramos que un Gibraltar en manos de una España débil y dependiente sería peor para el país mismo, y que Gibraltar en manos de una España fascista fuerte sería fatal para más países todavía. Desde luego, los jornaleros y obreros de España no soñaban con alterar sus propias vidas privadas sacrificándose a la causa de «recuperar» Gibraltar, y los gitanos que viven del contrabando entre Gibraltar y Cádiz tienen su propia opinión al respecto. Uno de ellos me dijo una vez: «Mire. Lo de que si es español o no, sí, el Peñón es español. Pero Dios nos libre de que un día se vayan de aquí los *"misters"*. ¿A qué nos dedicaríamos, pobres de nosotros, si se ellos se fueran?».

Pero la casta y, en particular, los oficiales de las fuerzas armadas españolas opinan algo muy distinto. Cuando hice el servicio con los zapadores en Ceuta, una vez me entretuve observando por un telémetro cómo la gente, al otro lado del estrecho, subía y bajaba las empinadas calles de Gibraltar. De pronto, mi capitán, que estaba de pie justo a mi lado, exclamó:

> Solo doce mil metros en línea recta y nosotros aquí, tan impotentes. [...] Sabe usted que yo de predicador no tengo ni un pelo, pero no puedo callarme que Gibraltar es una verdadera vergüenza. Usted sabe qué cañones tenemos aquí, en Ceuta. Son más viejos que usted o que yo. Inglaterra no nos permite fortificar la plaza ni instalar cañones modernos. Krupp, sin embargo, nos los instalaría gratis.

Inmediatamente después del discurso del 17 de julio de 1940, en el que Franco hizo referencia a Gibraltar como una herencia irrenunciable legada a los españoles por la reina Isabel la Católica, se desató la propaganda falangista. En ella se elogió al Caudillo por ser el primer jefe del Estado español en muchos años con la grandeza suficiente como para hablar abiertamente de Gibraltar, tema que hasta entonces había sido una llaga sin cerrar en la mente de todos los españoles. El hecho de que Franco se pronunciara públicamente fue interpretado como una señal de que, llegado el momento, sería él quien acabaría recuperando el Peñón para España. La propaganda falangista no dejaba lugar a la duda de que ese sería uno de los elementos resultantes de la instauración del «nuevo orden» de Hitler y de la desintegración del Imperio británico (que no la consecuencia de unas negociaciones amistosas).

Esta interpretación nunca fue negada a nivel oficial.

Toda esa campaña por Gibraltar llevaba poco tiempo en marcha cuando, de pronto, otra vino a ocupar su lugar: me refiero a la campaña por un imperio africano para España. Desde el otoño de 1940 y hasta la primavera de 1941, apenas persistió mención alguna de la cuestión gibraltareña en la propaganda española, no porque estuviera olvidada, sino, más bien, porque la devolución de Gibraltar se daba ya por asegurada. También se trataba como un hecho consumado, por cierto, en la propaganda alemana e italiana dirigida a España, una propaganda destinada a preparar el terreno para un ataque contra Gibraltar.

El telón de fondo de esta otra campaña —la campaña por un imperio español marroquí o, mejor dicho, africano— es más complejo, y más contradictorio también.

Cuando Tánger fue ocupada por tropas marroquíes españolas y se procedió a disolver su Administración internacional y a incorporarla al Marruecos español en contravención directa de todos los tratados internacionales —y todo ello sin provocar más que una débil protesta de una de las otras potencias signatarias—, el éxito de aquel golpe de mano reafirmó a los imperialistas españoles en sus extravagantes aspiraciones.

No es preciso entrar más a fondo en la cuestión del trato injusto que las grandes potencias dispensaron en África tanto a la España monárquica como a la republicana. España fue utilizada como un peón en el tablero africano en el que Francia, Inglaterra y Alemania jugaban su partida. Este aspecto de la cuestión nos ha sido machaconamente recordado a los españoles hasta tal punto que ninguno de nosotros, si no está provisto de la suficiente actitud crítica, es capaz ya de apreciar el flagrante detalle de que nuestra propia casta dirigente no fue ninguna víctima, sin parte ni culpa alguna en todo aquel juego. La propaganda de la Falange retomó el hilo del argumento según el cual, tomando Tánger por la fuerza, España solo estaba haciendo valer su derecho legítimo, y que solamente de ese modo podía interpretarse también el hecho de que reclamase el espacio vital en el norte de África que por justicia le correspondía.

El 3 de diciembre de 1940, en el diario *Arriba* (órgano de partido de la Falange) apareció un artículo titulado «España y África» cuyo autor se expresaba, más o menos, en los siguientes términos:

> Desde el día en que los españoles pisaron por vez primera la costa del estrecho, Gibraltar ha sido un imperativo categórico en su historia. Mientras el heroico Ejército de España se agotaba en infructuosas batallas, los tratados internacionales reducían pedazo a pedazo el espacio que al país le correspondía en la orilla opuesta del estrecho. Ahora, al fin, la liquidación del régimen antiespañol instaurado en su día en Tánger, ese Gibraltar africano que nos fue arrebatado por la vil diplomacia, ha roto con una política de dócil sumisión. Por derecho histórico, África es la prolongación natural de nuestro país. Nuestra misión en el mundo comienza en esas tierras vecinas.

«Tánger pertenece a nuestra propia órbita geográfica, pero también a la órbita de nuestra historia y nuestro derecho nacional», escribió el actual ministro de Exteriores español, Ramón Serrano Suñer, en un artículo programático publicado por el órgano de prensa de los estudiantes de la Falange, *Haz*, el 1 de enero de 1941. («Derecho natural» es el término que Serrano Suñer ha reintroducido en lugar del relativamente desgastado *Lebensraum)*. Destacados falangistas han reivindicado reiteradamente la totalidad del Marruecos francés, la mayor parte de Argelia y, en ocasiones, incluso Gabón (en el África Ecuatorial Francesa) como parte de ese espacio vital de España.

Cierto es que Marruecos era desde hacía generaciones el espacio vital de la casta dirigente de España, pero no es menos verdad que también era el espacio «letal» para el pueblo llano español.

Los Tratados de Algeciras y Madrid otorgaron a España el Protectorado del Marruecos septentrional. Todos esos incontables «héroes desocupados» de los que he hablado antes acudieron allí en masa con la esperanza de conseguir condecoraciones, ascensos y despojos varios. Tampoco los especuladores quisieron perdérselo. El conde de Romanones, un astuto estadista conservador moderado, puso bajo su control las minas del Rif y llegó a estar al borde del conflicto con los hermanos Mannesmann, industriales alemanes que habían echado el lazo también a la riqueza mineral aún no explotada de aquella zona. Los alemanes empujaron a las tribus rifeñas a la rebelión. En 1909, en un intento de aplastar a los rebeldes, el general Marina encabezó una campaña profusa en derrotas, «héroes» y bajas. Fue a raíz de esta cuando estalló en Barcelona la llamada Semana Trágica, en la que una revuelta del pueblo llano fue aplastada por las autoridades con una violencia tal que despertó la indignación de la opinión pública europea. En Madrid, unas mujeres se arrojaron delante de la locomotora de un tren con tropas destinadas a Marruecos.

Pero, entretanto, el famoso Juan March se había convertido ya en un gran contrabandista de tabaco para el Ejército y, con el tiempo, se haría multimillonario. Durante la guerra de Marruecos, unas determinadas industrias españolas muy concretas disfrutaron de un periodo de prosperidad particular: los talleres de Tarrasa y Sabadell producían mantas y

artículos de cuero para los equipos de los soldados; las fábricas de armas de Toledo, Trubia y Sevilla trabajaban a pleno rendimiento y daban empleo a todos los oficiales que aún estaban sin ocupar; las factorías de conservas vendían al Ejército en Marruecos millones de latas de sardinas defectuosas que quedaban de los tiempos de la guerra de Cuba. Marruecos continuó siendo un terreno de caza propicio para esos múltiples intereses particulares de 1904 a 1925.

Durante todo ese tiempo, el odio y el miedo a todo lo que Marruecos y sus guerras representaban fue carcomiendo las almas de los habitantes de España. Cada año, miles de jóvenes eran sacados de sus casas y familias y llevados a África. Allí iban los más pobres e indefensos. Al principio existía la opción de que un hombre pudiera librarse del servicio militar pagando 1.500 pesetas; más tarde, además de pagando esa suma de dinero, los reclutas podían librarse también de la obligación de ir a Marruecos si «compraban» un sustituto por 500 pesetas. Pero para los soldados sin posibles, Marruecos era un matadero en el que las enfermedades resultaban un enemigo más mortal que los tiradores moros. Todos los que podían se fugaban rumbo a América, o desertaban en pequeños barcos pesqueros con destino a Argel y a Orán. La juventud española huyó por millares de su país para escapar de Marruecos, convencida de que aquel asunto no iba con ella. Mientras tanto, los oficiales jóvenes que no eran excepcionalmente ambiciosos u honorables dedicaban sus años de servicio en Marruecos a participar en un sistema colectivo de corruptelas, algo bastante explicable si se tiene en cuenta que, por ejemplo, los de graduación más baja ganaban unas 167 pesetas (algo así como 5 libras) al mes.

Allá por 1920, tanto el interés material en Marruecos de aquellos especuladores y políticos españoles como el hosco resquemor causado en el pueblo español por la continua y, para este, absurda aventura colonial habían alcanzado nuevas cotas. Había que alimentar y equipar a un Ejército de unos 100.000 hombres: los contratos militares eran más importantes que nunca para las empresas e industrias españolas, pues las suculentas ganancias generadas por la neutralidad durante la Gran Guerra habían desaparecido al finalizar esta, lo que había acarreado, a su vez, una grave crisis en una economía inflada artificialmente como era la española en aquel

momento. Los contratos, sin embargo, tenían que pasar por muchas manos en los ministerios y en las diversas armas del Ejército; los suministros, a su vez, tenían que superar las pertinentes comprobaciones de toda una bandada de suboficiales y oficiales en el propio Marruecos. En un país pobre y sin perspectivas de progreso como España, entre personas pertenecientes a un aparato obsoleto y, por consiguiente, parasitario era inevitable que la corrupción campara desenfrenada.

Solo con mis propias experiencias personales podría llenar un libro entero de pequeñas y grandes anécdotas sobre la podredumbre interior del Ejército español en Marruecos entre 1920 y 1924. Uno de los casos más famosos —que desembocó en un auténtico escándalo público— fue el del Comisariado de Larache, que repartía mensualmente un millón de pesetas entre sus oficiales. Los soldados que libraban la peligrosa guerra de guerrillas contra los caudillos rebeldes en las montañas del Atlas tenían que sobrevivir con las alubias con moho y gusanos que les suministraba el Comisariado. Si contaban con munición, solía ser (las más de las veces) la equivocada; tenían que dormir sin mantas en medio del crudo frío de Xauen; y, sin embargo, los contratos de abastecimiento se habían tramitado y pagado, y los suministros concordaban con las correspondientes órdenes de encargo... sobre el papel, claro.

Yo mismo fui testigo de uno de esos tratos comerciales. Cuando el escándalo de la falta de mantas para las tropas que combatían en las montañas de Xauen alcanzó tales dimensiones que resultaba imposible seguir ignorándolo sin más, se firmó un contrato con una empresa catalana. Llegaron entonces mantas nuevas al Comisariado en Ceuta. Cada unidad tenía que entregar sus propias mantas viejas e inservibles para cambiarlas por exactamente el mismo número de nuevas. (En teoría, cada unidad estaba equipada con el número correcto de mantas, por lo que se entendía que las que faltaban habían sido descartadas por demasiado raídas o deshechas). En los cuarteles, había soldados rasos encargados de cortar todas las mantas viejas en cuatro pedazos [simulando mantas desgastadas]. A cambio de cada uno de esos juegos de cuatro, el Comisariado enviaba a los cuarteles una manta nueva y dinero en efectivo por el valor de otra; esta suma se repartía entre los oficiales de alto o bajo rango que allí estuvieran

«en el ajo». El propio Comisariado se quedaba, a su vez, con el dinero del valor de la supuesta tercera manta, y el de la cuarta se enviaba al fabricante como prima de incentivo. Solo por mi regimiento, el Comisariado se embolsó el importe correspondiente al precio de 2.000 mantas nuevas entregadas y repartidas, cuando el inventario real era de 500, pero no tuvo problemas para mostrar al interventor encargado del control de los materiales de desecho 2.000 «mantas viejas» como prueba de que habían sido intercambiadas por otras 2.000 nuevas. Y nuestra contabilidad regimental estaba en regla, igual que lo estaba la del Comisariado: en ambas figuraban 500 mantas. Esa era la España del reinado de Alfonso XIII.

Mientras florecían los oficiales y contratistas corruptos, y mientras el resto de oficiales y hombres soportaban el frío, las privaciones y el peligro, los caudillos moros disfrutaban también de su particular prosperidad. En el transcurso de las campañas, muchos de ellos se dejaban sobornar y equipar y, luego, se cambiaban de bando. Después de todo, tanto los comerciantes de armamentos de España (y de Francia también) como cierta calaña de políticos y militares estaban interesados en la continuación de aquella interminable guerra. La situación llegó a su punto crítico cuando, debido a la negligencia, la frivolidad y la incompetencia colosales del mando militar español, Abd el-Krim logró infligir una aplastante derrota al Ejército hispánico en 1921.

Ahí el escándalo fue tal, y la cifra de bajas tan descomunal, que las Cortes, obligadas por la opinión pública, se vieron forzadas a incoar una investigación sobre la cuestión de Marruecos en su conjunto; de ahí que el rey Alfonso XIII, notoriamente involucrado él mismo en demasiadas de aquellas desagradables inmoralidades, optara entonces por dar carta blanca al general Miguel Primo de Rivera. La pacificación definitiva de Marruecos durante la dictadura de este último supuso, en cualquier caso, que el Protectorado dejase de ser terreno abonado para la explotación crematística y vía de escape para la casta militar. Todos los elementos sórdidos que habían hallado salida en Marruecos fluyeron de vuelta hacia la política interna española justo en un momento en que el antagonismo popular hacia el sistema que había propiciado los escándalos de Marruecos estaba bordeando su punto álgido. El propio Primo de Rivera murió amargado en

su exilio en París, no tanto porque lo hubiera expulsado del país la entonces incipiente democracia española como por haber quedado señalado como el culpable de haber privado de sus negocios marroquíes a los peores y más poderosos elementos de su propia casta.

La nueva República se encontró con un Marruecos pacificado y en unas condiciones que hacían que solo precisara de una guarnición (y no de un Ejército entero) para mantener allí el orden. Ya no se necesitaba todo aquel formidable aparato de generales y oficiales españoles. Manuel Azaña ofreció un retiro extraordinario sin pérdida de sueldo a todos aquellos oficiales que lo solicitaran de forma voluntaria. Al mismo tiempo, se retiraron muchas de las subvenciones que se pagaban a los caudillos tribales moros. La República se deshizo de algunos de sus órganos administrativos en Marruecos. Tras los contratistas y los oficiales, les llegó el turno a los funcionarios y a los jefes feudales nativos. La nueva República se granjeó así miles de influyentes enemigos.

«Solo» la inmensa mayoría del pueblo español, para el que Marruecos había sido una pesadilla, estuvo contenta con aquella decisión.

No es de extrañar que Marruecos se convirtiera en terreno abonado para las intrigas contra la República, sobre todo, cuando los Gobiernos reaccionarios que subieron posteriormente al poder decidieron destinar a varios generales conspiradores a puestos clave en el Protectorado y en las islas Canarias.

La rebelión de 1936 estuvo especialmente bien preparada en Marruecos, donde los generales que estaban a la cabeza del movimiento conocían hasta el último palmo del territorio: todos los pueblos de las montañas, todas las tiendas. Sabían a cuáles de los caudillos moros había que pagar con divisas, con honores o con promesas políticas. Tal fue su éxito que consiguieron convertir el Marruecos español en su trampolín de salida para la conquista de la España republicana, y en el centro de reclutamiento de sus tropas de choque: el Tercio y los «regulares» moros. A los caudillos de las tribus montañosas se les tentó con las perspectivas de pillaje y acción bélica que aquella ofensiva les abría, y estos decidieron enviar a sus hombres bajo el mando de Franco al otro lado del estrecho. Incluso varios caudillos de la zona francesa hicieron lo propio, lo que

motivó que las autoridades galas se vieran obligadas a exigir que el reclutamiento de Franco procediera, cuando menos, de un modo más discreto.

Las relaciones militares entre los generales nacionales y los caudillos tribales moros entre 1936 y 1939 han adquirido actualmente una renovada importancia en relación con la guerra en África y el Mediterráneo. El general Franco contó con el concurso de mercenarios moros en 1936 que lucharon bajo su bandera a partir de entonces porque los intereses de la casta feudal de España y los de la casta feudal de Marruecos coincidieron, no solo en el plano material, sino también en el social y el político.

Aparte de las tribus salvajes de las montañas, el Marruecos español tenía su propia casta superior nativa en Tetuán y Tánger. Tetuán es el centro intelectual tradicional de Marruecos. En algunas de sus casas blancas residen desde hace siglos familias de la más pura sangre mora que viven de las rentas de la tierra al tiempo que estudian religión, ciencia, filosofía y leyes. Tetuán es el cerebro del mundo islámico en el África noroccidental, pero, en el momento presente, su esplendor de antaño está un tanto apagado por la falta de dinero y las pocas perspectivas que ofrece el futuro. En esa antigua ciudad amurallada de musulmanes cultos, en la que pocos forasteros han penetrado, perviven aún ansias de tres cosas: ganas de dinero, anhelo de poder y honores y, entre algunos idealistas moros, un deseo limpio y noble de retorno de la vieja gloria de la cultura musulmana.

Los políticos de Tetuán obtuvieron una serie de importantes privilegios a cambio de la ayuda prestada a los nacionales durante la Guerra Civil española. Se les otorgó autonomía administrativa en las comunidades islámicas. Las autoridades españolas también respetaron los derechos feudales de los caudillos tribales y los derechos administrativos y educativos de los jueces, visires y mulás moros. Es muy posible que estos se sintieran amenazados entonces por los políticos antifeudales y anticlericales de la República. Y eso podría explicar por qué las unidades moras del Ejército nacional no tuvieron reparo en conjugar el fervor islámico de una «guerra santa» contra los infieles «rojos» con la lealtad a una «cruzada cristiana».

Ahora que la guerra terminó en España, y que una nueva gran guerra a escala europea ha destruido el prestigio de la República francesa en la zona marroquí colindante con la española, los aliados moros de Franco ven la posibilidad de impulsar un imperialismo propio, ligado al imperialismo de la nueva España. Recuerdan que la casta española y su propia casta mora ya han sido capaces de colaborar en mutuo beneficio en el pasado. Ahora su ambición apunta más lejos aún: hacia un Imperio marroquí.

La España falangista considera la totalidad de Marruecos una parte de su espacio vital. Los notables moros del Marruecos español, por su parte, sueñan con un sultanato marroquí reunificado en el que ellos manden sin obstáculos en las comunidades islámicas bajo la protección de España tras haber expulsado a los usurpadores franceses y a la corte «afrancesada» del actual sultán en Fez. Su guía espiritual y líder potencial es el califa, el príncipe Muley Hasán.

El califa no es ninguna figura sacada de una reedición de *Las mil y una noches*. La palabra significa «regente» o «adjunto», y en este caso, es el título del adjunto al sultán marroquí en el Protectorado español de Marruecos. Según los Tratados de Algeciras y de Madrid, el sultán delegó permanentemente todos sus poderes —en lo que a la zona española respecta — en un califa que a él le corresponde seleccionar entre un par de candidatos propuestos por España, y a quien no puede revocar si no es a instancias del Gobierno español. Francia construyó una eficiente Administración en Marruecos, y el sultán quedó reducido a poco más que una figura decorativa, aun cuando era (y sigue siendo) nominalmente el gobernante espiritual y secular de su Imperio. Pero, a efectos nominales también, en la zona española el califa tiene reconocido un estatus parecido como gobernante y nunca ha quedado reducido a un estatus tan decorativo como su señor y jefe supremo, debido a que los dirigentes españoles lo necesitaban.

El actual sultán de Marruecos reside en Fez y, desde allí, ha proclamado su lealtad al Gobierno de Vichy. Está encerrado en su corte, sin contacto con sus súbditos, y está privado ahora, además, de la protección de una Francia fuerte. Su segundo, el califa, un gobernante independiente y

miembro también de una de las familias jerifianas que tienen derecho a reclamarse descendientes del Profeta, es libre de ir donde le plazca, en Tetuán, en Tánger... o en España.

¿Qué pensarán los súbditos del Imperio marroquí cuando ven, en una zona, a un sultán impotente que ha sido instaurado allí por una potencia ahora derrotada y, en la otra, a un califa, un príncipe de la sangre del Profeta, que es amigo de un país victorioso (España) y, a través de este, amigo también de aquellos (los nazis) que han derrotado a los amigos del sultán? ¿Qué habrán pensado, en marzo de 1941, al ver que el magistrado jefe y representante del sultán en Tánger era expulsado de un día para otro, que su residencia oficial se convertía en las oficinas del consulado alemán, y un pachá del califa era instaurado en su cargo por las autoridades españolas? El prestigio y el valor importan mucho para los árabes y los moros, y, además, existe una curiosa afinidad racial entre moros y españoles.

Así que estos son, en el momento presente, los elementos principales del juego político en Marruecos: el deseo y la necesidad de los gobernantes españoles de dejar atrás las patentes contradicciones de su régimen por medio de un éxito imperialista en África; su secreto temor de que, con ello, despierten el profundo malestar que en el pueblo español todavía produce la aventura marroquí; la necesidad de mantener a España fuera de toda intervención bélica activa que difícilmente podría afrontar en sus condiciones presentes; el riesgo de chocar con la política alemana ahora que Berlín busca una conciliación con la Francia de Vichy y el general Weygand [máximo delegado del Gobierno de Vichy para el norte de África]; y, por último, el hecho de que la única salida a este atolladero sería apoyar al creciente movimiento nacionalista marroquí preparando al califa para que sea el nuevo pretendiente al sultanato (o, como mínimo, el regente de un sultán decorativo) y preparando también a España para el papel de Gran Potencia Protectora del África noroccidental.

Hay leña suficiente para una peligrosa conflagración, y los imperialistas españoles han hecho lo suyo por acercarle la yesca. Así, en el diario *Arriba* del 6 de noviembre de 1940, podía leerse: «El Imperio

marroquí, tanto tiempo dividido por los intereses de Inglaterra y Francia, recuperará pronto —puede que antes de lo esperado— su prístina unidad bajo el liderazgo de Franco, ¡General de África y Caudillo de España!».

Capítulo VIII
HISPANOAMÉRICA

Cuando el embajador extraordinario de Chile en España presentó sus credenciales el 20 de febrero de 1941, Franco dio réplica al discurso de cortesía pronunciado por el nuevo enviado diplomático refiriéndose al nuevo significado del concepto Hispanidad: el mundo hispánico es uno e indivisible, y está formado en proporciones iguales por España y por los Estados libres, independientes y soberanos de Hispanoamérica.

España debe volver a ser el eje espiritual, cultural y económico del mundo hispánico —entiéndase los Estados latinoamericanos—, dicen los políticos de la nueva España.

Cuando Serrano Suñer viajo a Berlín y Roma en otoño de 1940, una de las pocas afirmaciones que se recogían simultáneamente en las propagandas española, italiana y alemana era que América Latina estaba destinada a ser la esfera de interés de España en el «nuevo orden».

«Solo queremos un imperio espiritual en América», decían los propagandistas españoles. Sin embargo, el 7 de junio de 1940, el diario *Informaciones* de Madrid confesaba lo siguiente: «Inevitablemente, nuestro Imperio tiene una significación territorial. Reclamamos las tierras descubiertas y conquistadas por nuestros conquistadores, y bautizadas por nuestros misioneros con españolísimos nombres imposibles de pronunciar para los piratas: tierras que pronto tendrán el honor de ser restituidas a nuestro Imperio».

Cuando un grupo de nacionalistas argentinos reivindicaron públicamente que las islas Malvinas pertenecían a Argentina por derecho, no solo la propaganda nazi, sino también la falangista, hizo suya la cuestión: una antigua posesión hispánica había sido robada por Inglaterra y debía regresar tarde o temprano al seno de la Hispanidad. Cuando se habló

de incorporar a Cuba como el número cuarenta y nueve de los Estados Unidos de América, la Falange aludió a la «nostalgia de España» que había en la isla caribeña. Tampoco han faltado los misioneros españoles que se han dedicado a ensalzar las tradiciones hispánicas de las islas Filipinas. Las negociaciones entre las repúblicas de la América hispanohablante y Estados Unidos sobre la cesión de bases militares y el acuerdo de medidas de defensa común suscitaron una airada reacción en España; se advertía entonces a las naciones «hijas» de la Madre Patria de que no cometieran un crimen contra la Hispanidad sucumbiendo a la plutocracia yanqui. Los grupos de la Falange Exterior —equivalente a la organización de los nazis en el extranjero— han promovido activamente campañas «antiyanquis» y «prohispánicas» en los países latinoamericanos. La Falange Exterior se ha reorganizado desde que Serrano Suñer asumió el Ministerio español de Exteriores, y ahora forma parte del aparato diplomático oficioso de la nueva España. De hecho, la Falange Exterior actúa abiertamente como una «quinta columna» en el sentido original de la expresión: un brazo al servicio de la España nacional incrustado en entornos democráticos.

América Latina es un medio continente con una inmensa riqueza de materias primas por explotar. Son muchos los hombres de negocios e inversores alemanes, británicos y estadounidenses perfectamente conscientes de ello. Ninguno consideraba antes que esa propaganda prohispánica fuese un factor a tener mínimamente en cuenta. Sin embargo, el mito fantástico del nuevo Imperio español comienza ahora a convertirse en una realidad política en ese subcontinente, y en una amenaza política para la acción exterior de las democracias anglosajonas.

Las fuerzas impulsoras desde el lado español son evidentes. Los hombres de la vieja casta nunca pudieron desprenderse de cierto sentimiento de rencor y humillación por las derrotas militares de España en América, por la emancipación de las repúblicas hispanoamericanas de la tutela política de España y por el hecho de que estas lograran crear una vida intelectual propia. Pero, sobre todo, les ofende el hecho de que América prosperara mientras España se perpetuaba en la pobreza. En boca de esos

hombres, el lema de España como la Madre Patria de América Latina viene a ser un ejercicio de autoafirmación y de reivindicación de una riqueza perdida.

Para el pueblo llano de España, América —tanto la del norte como la del sur— significaba (y significa) una cosa completamente distinta: libertad, y una esperanza de prosperidad razonable. Los españoles llevan ya muchas generaciones emigrando al otro lado del Atlántico (desde que las primeras repúblicas americanas cortaron su lazo de dependencia de España) en busca de una vida libre de hambre crónica y de asfixiante opresión feudal. El hecho de que España tenga una densidad de población tan baja para su territorio y su capacidad productiva se explica a partes casi iguales por esa emigración incesante hacia América y por la fabulosamente elevada tasa de mortalidad infantil, y ambas se explican a su vez por el hambre, la ignorancia y la indefensión masivas como causas de base.

La casta quiere una Hispanoamérica dominada por una España de la casta; el pueblo llano quiere una América libre a la que pueda huir de la España de la casta.

Pero la casta, y no el pueblo llano, es la que manda hoy en España. Ha revivido antiguas ambiciones para superar sus actuales tribulaciones, y ha pervertido el noble ideal de una cultura hispánica universal para reducirla a un lema imperialista. Pero las expresiones pomposas y vacías —y los gestos grandilocuentes— del «Consejo de la Hispanidad» instituido por Serrano Suñer están ahora respaldadas por unos sólidos intereses.

En primer lugar, está el interés de la poderosa Iglesia española, con todos los misioneros y organizaciones afiliadas que tiene desplegados en América Latina. La Iglesia española cubre con un manto de espiritualidad la propaganda sobre la hispanidad: España llevó en su día la fe y la civilización a América, y ahora que vuelve a ser fuente original del verdadero espíritu religioso español, una unión más estrecha entre ella y sus patrias hijas en América ayudará a defender estas tierras del espíritu materialista del Norte, e incluso a reconquistar ese Norte para la fe verdadera. No deja de ser una realidad, tan curiosa como pertinente para lo que aquí se explica, que la Iglesia de España jamás perdió su imperio en

América porque nunca ha dejado de abastecer a las Iglesias nacionales de los Estados latinoamericanos de sacerdotes y maestros nacidos en España para todos los puestos clave de las mismas.

En segundo lugar, la Alemania nazi, con su red económica particular —tan amplia como estrechamente entretejida— y con sus grupos de «nacionales» alemanes admirablemente bien organizados en la América Central y del Sur, es consciente de las posibilidades que un fascismo hispánico extendido le brindaría para agrupar los países sudamericanos exportadores de materias primas bajo la hegemonía de una España falangista como valiosísimo complemento de los países industriales europeos que ya se hallan bajo el yugo germano. Pero Alemania también se da cuenta del valor propagandístico de un movimiento hispánico en su lucha contra la democracia estadounidense. Las organizaciones alemanas de los países sudamericanos colaboran con organizaciones de la Falange, aunque dejando que sean los españoles quienes se encarguen de la labor más visible. Es muy posible que los propios sueños de poder mundial de Hitler coincidan con las más extravagantes aspiraciones de los imperialistas españoles: el Sacro Imperio Romano Germánico de Carlos V incluía tanto a España como a Alemania como Estados soberanos separados, pero unidos por «un monarca, un Imperio y una espada», como un español de entonces, Hernando de Acuña, escribió.

Que nadie se llame a engaño: no creo que estos sueños imperialistas españoles sean peligrosos en su forma actual. Pero sí pueden llegar a serlo porque los intentos dirigidos a llevarlos a la práctica, o incluso a infiltrarlos como ideas en la vida política de América del Sur, incidirán en la estrategia política y militar en la actual guerra de la democracia contra el fascismo. Pueden ser peligrosos porque dan pie a que se forme el núcleo de un fascismo hispanoamericano que, de entrada, reforzaría al fascismo español y, con el tiempo, también al fascismo internacional. Y, a decir verdad, en los países hispanoamericanos mismos, las condiciones son ahora mismo propicias para los movimientos fascistas.

Tres corrientes nacionales de inmigrantes han influido más que ninguna otra en la vida de las repúblicas latinoamericanas: la de los españoles, la de los italianos y la de los alemanes. Los españoles y, en

menor medida, los italianos colonizaron la tierra; los más capaces se convirtieron en los grandes terratenientes —los «estancieros»— y de sus filas surgieron los grandes reyes del ganado y los legendarios barones del trigo. La vieja casta feudal española siguió viviendo en las ciudades y las «haciendas», con una influencia material disminuida, aunque todavía considerable en el plano social. La mayoría de los inmigrantes alemanes se instalaron en ciudades y fundaron talleres, tiendas y pequeñas fábricas. A principios del actual siglo, se extendió por la próspera América Latina la primera gran crisis agraria debida a que Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Rusia comenzaron a competir con éxito con el ganado y el cereal sudamericano en el mercado mundial. La Gran Guerra de 1914-1918 detuvo la catástrofe económica que se avecinaba, pero eso solo sirvió para que el colapso final de 1929-1930 fuese aún más devastador.

Muchos de los terratenientes más avispados habían previsto el golpe y se habían mudado de las pampas a las ciudades, donde invirtieron sus colosales fortunas. Sus hijos eran ya «caballeros» que estudiaban y se sacaban un título en la universidad y luego seguían viviendo del capital de sus padres. Aquellos jóvenes señoritos, sin oficio pero no sin dinero, y titulados además en Derecho o en Ingeniería, optaban invariablemente por la salida profesional más obvia: la política. En la actualidad, los hijos de los inmigrantes españoles más afortunados son los diputados, los directores y los altos funcionarios de las repúblicas sudamericanas, pero, en la mayoría de los casos, su fortuna familiar ya ha desaparecido. La agricultura industrial orientada a la exportación atraviesa ahora su peor crisis porque se han perdido los mercados internacionales, y porque la creación de industrias secundarias locales de cierta importancia se ha vuelto prácticamente imposible debido a la ausencia de un mercado nacional. Cada vez son más las personas que viven del presupuesto público de unos Estados que recaudan volúmenes menguantes de ingresos, o que subsisten gracias a subsidios más o menos disimulados que pagan empresarios y banqueros extranjeros.

Y, mientras tanto, los descendientes de inmigrantes que residen en las ciudades y no han sido tan afortunados se encuentran ahora con dificultades para conseguir empleo o para conservar sus puestos de trabajo. Se sienten

soliviantados por su desgracia y muchos de aquellos que no terminan convertidos en rebeldes sociales de la izquierda o la derecha tienden a hacerse gánsteres o pistoleros.

Pues, bien, he ahí, reunidos, los ingredientes clásicos de un fascismo militante. Muy pocos de los peores reaccionarios sudamericanos, por no decir ninguno, estarían dispuestos a renunciar a la libertad de su país y someterse a la dominación española. Pero otra cosa muy distinta es pensar que no van a colaborar con España como «naciones libres, independientes y soberanas» contra el «capitalismo yanqui» aliándose con los alemanes locales —a quienes ya tienen por unos buenos socios comerciales— en contra del «populacho» inferior de indios y mestizos que están invadiendo su propio terreno político.

Entre esos indios y mestizos de los Estados sudamericanos se distinguen, a su vez, dos grupos: aquellos que han adquirido una formación y una posición social que les permite tener un papel propio en la vida pública, y aquellos otros que continúan llevando una vida tribal, de servidumbre feudal, y que están marcados por el estigma de ser considerados unos seres inferiores. En México, el primero de esos dos grupos ha conquistado una considerable influencia y lucha por educar al otro. En todas aquellas repúblicas, la gran masa de población india o con orígenes indios está abriéndose paso lenta pero inexorablemente en la sociedad. Los mejores y más influyentes de ellos se sienten furibundamente contrariados si alguien insinúa que los Estados latinoamericanos son españoles, pues esa es una idea que combaten con radical fiereza. Son orgullosamente conscientes de sus propios orígenes raciales y se esfuerzan por conseguir una democracia política y cultural autóctona junto a aquellos descendientes de inmigrantes europeos que también creen en el desarrollo separado y original de sus países americanos. De ahí que las fuerzas constructoras de las repúblicas latinoamericanas deban resistirse, en pura defensa propia, al falangismo hispánico como a cualquier otro fascismo racial.

Y pese a ello, las masas indias centroamericanas y sudamericanas, sometidas todavía a la ignorancia y a un sistema secular de señores y sacerdotes feudales, podrían dejarse influir de nuevo (como se ha visto en

los recientes conflictos confesionales en México) por un movimiento fascista de apariencia religiosa, que es la que suele adoptar el movimiento hispánico.

Así pues, el mito hispánico, que no parecía más que el sueño que los apurados dirigentes actuales de España tenían de ver cumplido un deseo, podría convertirse en una realidad política propiciada por las críticas condiciones sociales y económicas que imperan en los propios países latinoamericanos, y por una deliberada política en ese sentido impulsada por los nazis en América. La Hispanidad continúa siendo poca cosa más que una palabra grandilocuente, igual que el Imperio hispánico poco más es que una ensoñación fantástica todavía, y los imperialistas de la Falange no constituyen sino una minoría dentro de la España totalitaria. Pero ¿no nos ha enseñado el ascenso del nacionalsocialismo que debemos tomarnos en serio esos ingredientes antes de que ellos mismos nos obliguen a hacerlo?

Capítulo IX
¿Y LA IZQUIERDA ESPAÑOLA?

A cualquier inglés le resultará fácil ver la importancia estratégica de España en una guerra europea. La existencia misma de Gibraltar evidencia que los estadistas y los militares ingleses llevan siendo conscientes de ello desde hace generaciones. Es fácil ver que, para la actual campaña mediterránea de Inglaterra, fue fundamental mantener la no beligerancia de España. Estos factores estratégicos, unidos a una despreocupada ignorancia de las condiciones y la psicología españolas, explican —que no justifican— la ceguera deliberada y perseverante de la prensa y las autoridades británicas ante todos los giros y maniobras de la política internacional de la España de Franco.

Obviamente, la cuestión española es un esqueleto en el armario; hay mucho silencio y secretismo sobre el tema en este país. Quienes creen que, en el fondo de su corazón, Franco, como buen «caballero cristiano», está del lado de Inglaterra en su lucha contra la pagana Alemania nazi, juzgan bochornoso que el Gobierno republicano (la «Chusma Roja») fuese el oficialmente reconocido por el Gobierno del señor Chamberlain durante tanto tiempo. Habrían preferido que hubiera hecho un gesto de buena voluntad [con el régimen franquista], como acallar todas las voces que se pronunciaban a favor de la España republicana, o expulsar a destacados estadistas republicanos de su asilo en Inglaterra. Otros, que se daban cuenta de que la caída de la España republicana privaba a Gran Bretaña de un aliado de la máxima importancia, se sentían avergonzados (y con razón) de aquella increíble política británica que permitió que Alemania e Italia afianzaran su posición en la Península, pero, pese a ello, continúan

aferrándose a la esperanza de que, dentro del régimen de Franco, haya suficientes elementos contrarios al Eje ansiosos por ser tratados con la cortesía y el halago más exquisitos.

La esperanza que subyacía tanto a la postura que en este país mantienen los *tories* más intransigentes como a la de aquellos demócratas más inclinados a transigir era que todas esas masas republicanas derrotadas, abandonadas a su suerte, hambrientas, oprimidas y perseguidas, continuarían funcionando como un ancla de emergencia que frenaría a sus superiores para que no emprendieran ninguna aventura bélica en el mismo bando que Alemania.

La amarga ironía de la historia es que sí había algo de verdad en esta tan primitiva como engreída esperanza: el aliado silencioso ha estado siempre ahí y fue su existencia la que forzó al generalísimo Franco a comportarse como lo hizo, lo que le valió elogios en columnas del *Times,* el *Daily Telegraph*, el *Tablet*, el *Catholic Herald* y hasta el *News Chronicle*.

Cuando la masa de población obrera abarrotó la inmensa Puerta del Sol de Madrid a primera hora del 19 de julio de 1936, el día siguiente al estallido de la insurrección militar, el solo peso de su furiosa determinación obligó al recién formado Gobierno de asustados apaciguadores de clase media a dimitir y dejar paso a un Gobierno popular mejor preparado para la defensa de la República frente a las fuerzas reaccionarias y fascistas. Cuando, esa misma noche, se dispararon los primeros tiros desde las ventanas del Cuartel de la Montaña de Madrid, miles y miles de personas corrientes de toda condición acudieron en masa a la gran explanada de delante del adusto edificio-fortaleza. Aquellas masas, sin líderes, sin más armas que dos pequeños cañones de campaña, algunas pistolas y muchas navajas medio oxidadas, se abrieron paso a través de los macizos portalones del cuartel con el solo peso físico de su presión multitudinaria, aunque muchos cientos de ellos murieran allí abatidos por el fuego de ametralladora.

La noche del 7 de noviembre de 1936, cuando la ciudad de Madrid —sin Gobierno, sin armas y sin ejército en ese momento— se encontraba a merced de las bien armadas divisiones de choque nacionales de Franco, el

simple ímpetu de la masa alzada salvó la capital y contuvo la invasión hasta que los primeros batallones de las Brigadas Internacionales entraron en combate dos días después.

En ninguna de esas dos ocasiones fue capaz ninguno de los partidos políticos de la izquierda de asumir el liderazgo de la masa. Y pese a ello, las personas que formaban el núcleo duro de aquellas informes multitudes sin líder fueron (y, a mi juicio, todavía lo son) los elementos más importantes y más constructivos de la izquierda española, del movimiento obrero español y del Estado español del futuro.

Ese núcleo estaba formado principalmente por sindicalistas activos. Algunos de ellos eran de ideología anarquista (algunos pertenecían a la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, el sindicato anarquista), mientras que otros estaban afiliados al Partido Comunista, que, no obstante, era entonces una formación relativamente pequeña; muchos más aún pertenecían al Partido Socialista, sobre todo a su ala izquierda, y la gran mayoría eran simplemente antifascistas y socialistas de corazón. Más adelante, durante el transcurso de la guerra, esos sindicalistas militantes, esos organizadores de ramas y delegados de fábricas, talleres y grupos de trabajadores agrarios, se convirtieron en los oficiales y líderes de los destacamentos de las milicias, los directores y gerentes de las factorías de las industrias de guerra, los organizadores de los órganos administrativos locales y provinciales. Y más adelante aún, fueron la columna vertebral del Ejército y la policía republicanos, los funcionarios de los cuerpos de la defensa nacional.

Hubo un tiempo en el cual muchos de ellos se declararon comunistas porque pensaban que el Partido Comunista era el más volcado y decidido en el esfuerzo de guerra, porque se sentían profundamente molestos con la aquiescencia de los partidos laboristas y socialistas occidentales, con su trágica farsa de la «no intervención», y porque creían que España tendría suficiente con la ayuda de la Rusia soviética. Más tarde, cuando los representantes tanto de la UGT (la Unión General de Trabajadores, equivalente en España del TUC [el Congreso de Sindicatos británico]) como de la anarquista CNT abandonaron el Gobierno, y cuando los partidos políticos de la izquierda bajo la presidencia del doctor Negrín organizaron

una maquinaria de guerra más eficiente, pero también más dictatorial y burocrática, esos mismos españoles anónimos continuaron luchando y trabajando, algunos de ellos con incondicional devoción por el nuevo mando, otros aun desde la desconfianza y el recelo. Se sintieron desconcertados y, muchos, desorientados durante la fase final de aquella trágica guerra; un buen número de ellos la tomaron con los políticos comunistas, por los que sentían una desconfianza creciente. Y aun así, aunque fuera desde la amargura, siguieron trabajando en sus puestos hasta el final.

La mayoría de quienes han escrito sobre la España republicana están convencidos de la importancia aplastante que han tenido las organizaciones de izquierda; muchos piensan que, para bien o para mal, el Partido Comunista de España encarnó el espíritu y el ímpetu central de la lucha. Personalmente, creo que el enorme número de sindicalistas militantes, más o menos vagamente anarquistas o socialistas, recelosos de la política y de los políticos, reacios a cualquier clase de burocracia, han sido —y todavía lo son— la élite potencial de la izquierda española.

De sus filas surgieron los hombres y las mujeres que realmente organizaron la defensa, la producción, la educación y el ocio con iniciativa e independencia: los suboficiales de la democracia española.

Dieron muestras de todos los defectos inevitablemente heredados por una sociedad semifeudal como la española. Fueron románticos, violentos, crédulos y suspicaces. Los obreros cualificados estaban convencidos acerca del futuro social que se les abría por delante y, de paso, también de la acción colectiva que estaban llevando a cabo para hacerlo realidad, pero eran minoría en un país como España, que jamás había sido moldeado por la Revolución industrial, y en el que los pequeños talleres y los artesanos continuaban siendo más predominantes que las factorías industriales. La gran masa de los trabajadores no cualificados, los estibadores y los peones, con su historia de servidumbre de la tierra, estaban convencidísimos, más bien, de que el conjunto del aparato del Estado siempre estaría en su contra, fuera cual fuese el partido político en el poder. Cuando [durante la guerra] ellos mismos se convirtieron en la maquinaria del Estado, siguieron siendo rebeldes y, en muchos casos, fueron mejores líderes locales gracias a ello.

Pero todas esas personas eran republicanos y demócratas, aunque no porque fueran miembros de unos grupos políticos claramente definidos con esos nombres. Su «democratismo» tenía más que ver con los órganos locales cooperativos y autogestionados que con los parlamentos y los partidos. Estaban dispuestos a darlo todo por su realidad soñada, y demasiados entregaron incluso su vida por ello. Pero también fueron capaces de llevar a cabo una acción social asombrosamente creativa y constructiva.

Los intelectuales de izquierda españoles, que tan exagerada y, en muchos casos, inmerecida publicidad recibieron en este país, apenas han conseguido integrarse hasta el momento —ni en España ni entre los emigrados— en ese núcleo del movimiento democrático y socialista de masas español. Muchos de ellos eran unos rebeldes ensimismados y egocéntricos que sentían no poco desprecio por los anodinos sindicalistas, pero a quienes no les resultó difícil abrazar la causa del comunismo según ellos lo entendían, porque este les proporcionaba un marco de referencia intelectual... y una tribuna. El fantástico auge de la educación entre las masas republicanas fue, en mi opinión, mejor entendido y canalizado por los anarquistas en Cataluña y por los funcionarios de las organizaciones de las juventudes socialistas y de los sindicatos que por la «Alianza de Intelectuales Antifascistas» y sus espectaculares actividades pseudomarxistas.

En cierto sentido, esto es una suerte para el futuro de la izquierda española. Los fascistas y reaccionarios victoriosos no se han andado con miramientos ante los méritos de los intelectuales progresistas para perseguirlos con especial saña. Estos ahora están muertos o presos o exiliados. Ya lo dijo Millán-Astray, antiguo jefe de Franco en la Legión en Marruecos: «¡Muera la inteligencia!». Pero si mi diagnóstico es correcto, el núcleo vivo de las fuerzas democráticas españolas en el interior del país no ha sido destruido. Y es ahí, entre aquellos y aquellas a quienes he llamado los suboficiales de la democracia española, donde se están forjando los futuros líderes del pueblo de España.

Un porcentaje ciertamente terrible de trabajadores cualificados, sindicalistas militantes y dirigentes socialistas o anarquistas locales han muerto en combate o han sido asesinados tras la victoria de Franco. Un gran

número de ellos siguen pudriéndose todavía en algún rincón de Francia o se encuentran repartidos por México. Un grupo reducido —aunque importante — de trabajadores políticos, entre ellos algunos de los mejores organizadores de los peones agrícolas, viven (si podemos llamarlo así) en Orán, en el Marruecos francés *[sic]*[1]. Muchísimos continúan vivos en penales y campos de concentración españoles, pues formaban una élite demasiado numerosa como para ser masacrada sin más. Tras las alambradas y los muros de las prisiones, esos hombres continúan siendo lo que eran, siguen esperando que su liberación llegue, no por la vía de una amnistía que sería una farsa, sino por la de la caída del régimen franquista, y toda esa presión incesante del encarcelamiento y de la sombra de la muerte los va haciendo más duros, más conscientes y más independientes.

Pero todavía hay muchísimos más que no están recluidos y que viven repartidos por toda la geografía española. No se dejaron notar tanto durante la guerra porque eran los menos concienciados políticamente de los organizadores de la defensa republicana. O porque apenas estaban empezando a participar en la vida pública. Ahora el Estado totalitario está completando su educación. No existen organizaciones clandestinas muy extendidas y unidas, pero sí hay una generación espontánea —muy amplia bajo la superficie— que mueve a la Falange a impulsar una demagogia social más temeraria. Muy probablemente, los hombres como estos de quienes estoy hablando sienten ahora más desconfianza hacia los partidos políticos que nunca, pero probablemente aceptarían la ayuda de cualquier grupo antifascista, antifranquista. Pero las experiencias de su guerra perdida y su ahora doloroso conocimiento íntimo del fascismo los encaminan a convertirse en algo así como los elementos de una nueva forma de movimiento popular, el núcleo de una democracia social en la que los viejos principios del anarquismo y las doctrinas nuevas del comunismo queden subsumidos en el deseo extremo de una libertad social cooperativa.

Todavía no hay teorías políticas ni líderes que den una forma consciente permanente a este vago nuevo comienzo que se adivina bajo la superficie del Estado totalitario. Pero su germen está ahí, vivo y en crecimiento. Su fantasma ronda a los gobernantes actuales mientras

entablan su particular regateo con Hitler para acordar el lugar correspondiente al Imperio hispánico en el «nuevo orden» y el precio del servilismo español.

Capítulo X
EL DESTINO DE UNA ESPAÑA LIBRE

Con declaración oficial de los objetivos de la guerra o sin ella, este conflicto bélico del Imperio británico contra la Gran Alemania e Italia es una guerra de la libertad contra el despotismo, de la democracia contra el totalitarismo, del socialismo futuro contra el fascismo presente. Los frentes están determinados por más fuerzas que los propagandistas de Goebbels o del Ministerio de Información, o que los diplomáticos de la Wilhelmstrasse o de Whitehall. Es ridículo que Goebbels afirme que la Alemania nazi es la aliada del pueblo de Noruega contra sus explotadores. E igualmente ridículo resulta que haya voces en Gran Bretaña que digan que el general Franco debería alegrarse de una victoria británica porque esta lo liberaría de la intrusión del Eje en su país. El régimen de Franco forma parte del Orden fascista y cada uno de sus exponentes es sobradamente consciente de ello como para no temer una victoria inglesa.

La destrucción del fascismo italiano y alemán significará el final del régimen totalitario, autoritario o fascista en España. Este es un hecho tan palmario que incluso quienes abogaban por la amistad entre Gran Bretaña y la España de Franco tuvieron que esforzarse mucho para presentar a la más cruel —aunque más incompetente también— de las tres dictaduras como un «régimen moderado» y como «lo más adecuado» para el contexto peculiar de la Península.

Sin embargo, en estas páginas he intentado mostrar que el general Franco, un excelente estratega muy probablemente reacio a embarcarse en aventuras imposibles, no es un líder político, sino un órgano ejecutivo de la vieja casta dirigente de España. He tratado de poner de manifiesto que esta vieja casta dirigente está internamente dividida y es incapaz de resolver los

problemas de España, y por ello está siguiendo en estos momentos la estela que le va señalando la organización fascista (de inspiración alemana) Falange, con su mito del Imperio hispánico.

El fascismo no ha conquistado el poder total en España, pero marca el ritmo, domina los torpes esfuerzos de reconstrucción social y económica y suministra una «dinámica» ideología imperialista. Existe cierta oposición entre las clases altas tanto a los experimentos económicos como a esos nuevos amos. Pero esta oposición no es suficientemente fuerte y no pasa de ser un freno poco fiable. A los capitalistas, hombres de negocios y profesionales les preocupa la marcha de los acontecimientos; algunos buscan incluso en Inglaterra (no en la Inglaterra democrática, sino en la Inglaterra de la City y de *sir* Samuel Hoare [embajador británico en Madrid de 1940 a 1944]) ayuda contra los «bolcheviques de la derecha». Pero esos hombres jamás han tenido una influencia fuerte y directa en la política española salvo a través de los retorcidos canales de los caciques políticos y las intrigas de partido; el capitalismo español está más débil ahora que nunca, y la clase media no tiene más centros organizativos que la propia Falange y la Iglesia.

La Iglesia política en España no es, desde luego, una gran amiga del fascismo total, ya que todo fascismo monopoliza la autoridad suprema en asuntos ideológicos que la Iglesia pretende para sí. Por otra parte, la Iglesia política española se arriesgaría a perderlo todo si se produjera un derrocamiento del régimen autoritario. La libertad de pensamiento y de culto, que en Inglaterra beneficia a la minoría católica, significaría en España que, como mínimo, una gran mayoría de la población se separaría de la Iglesia católica mientras esta no acometiera reformas internas. Significaría lo que significó durante los primeros y los últimos años de la República: que la Iglesia española perdería su control sobre el Estado, la sociedad y los grandes negocios, que tendría que despolitizarse a la fuerza, y que tendría que dejar de identificarse con el César.

A los católicos para quienes su religión es una cuestión de conciencia podría parecerles muy bien que así fuera. La masa de españoles que cree fervientemente en su Dios y que ansían curas que sean auténticos sacerdotes, y no políticos, explotadores o espías, no tendrían ya que

descargar violentamente su desesperanza contra la piedra y la madera de sus templos, ni contra los servidores espirituales de sus «patronos». Pero la tradición política de la Iglesia se resiste a morir y la Iglesia española está lastrada por su propio mito.

El alto clero español ha demostrado ya con sus actos y sus declaraciones, tanto antes, como durante, y como después de la guerra española, que se identifica con quienes prometieron fundar una nueva España imperial. Hasta la fecha, la Iglesia ha sido beneficiada con tantas ventajas por el régimen totalitario —las órdenes religiosas tienen ahora derecho a reabrir escuelas, los jesuitas tienen derecho legal a gestionar directamente negocios económicos para los que antes tenían que valerse de testaferros y los dignatarios eclesiásticos gozan de la oportunidad de colaborar con el Gobierno en el campo de la educación y para elaborar legislación— que está obligada a seguir respaldando el sistema franquista aunque este continúe avanzando por la vía del totalitarismo fascista. La Iglesia católica española teme más al liberalismo que al fascismo, porque el primero supone la libertad de pensamiento del individuo. Y esa libertad no tiene cabida en la nueva España. Haría añicos el régimen. La censura sobre los libros y la educación se ajusta bien al espíritu de la Inquisición. ¿Cómo podría una Iglesia así aliarse con Inglaterra o estar siquiera a favor de una victoria inglesa mientras Inglaterra esté objetivamente —y según la doctrina de la propia Iglesia española— a favor del pernicioso liberalismo, «engendrador del colectivismo y el comunismo»?

El espíritu del fascismo y del nazismo es menos ajeno al clero español que el espíritu de la Inglaterra moderna. A fin de cuentas, la Iglesia española militante acumula una larga tradición de colaboración con el absolutismo y el despotismo; tiene, además, el alentador ejemplo de Italia, donde el fascismo anticlerical de los primeros años pasó a abrirse a una fusión de intereses con la Iglesia italiana en beneficio mutuo.

Tampoco asusta a la Iglesia católica española una alianza con el nazismo, por mucho que el Tercer Reich esté [ahora] en buenos términos con la Unión Soviética. Cualquiera que haya estudiado un poco la prensa y la radio españolas durante este último año habrá detectado múltiples casos de ataques contra el liberalismo y la democracia a cargo de voces o de

plumas clericales, y también muchos de ensalzamiento de la floreciente vida de los católicos en Alemania, pero *ninguno* de crítica contra la filosofía pagana de los nazis, ni de ataque a Alemania por su pacto con Rusia. Ya puede el Vaticano advertir a los católicos españoles de que no se hagan ilusiones con (ni se dejen llevar por falsas descripciones de) la situación del catolicismo en Alemania, que será en vano. La propaganda española —una mezcla de puro falangismo y de catolicismo político— continúa manteniendo con firmeza que el Eje representa el espíritu de la alianza entre el «nuevo orden» y el cristianismo contra la plutocrática-liberal-herética Inglaterra.

El clero católico dirigente podrá teñir y moderar hasta cierto punto la versión española del fascismo, pero en ningún caso se convertirá en aliado de antifascismo alguno, ni en una piedra en el camino del ascenso del Tercer Fascismo. Aquellos otros católicos españoles que estaban (y están) en rebeldía contra la clerecía política, y de los que son ejemplo paradigmático los curas vascos —verdaderos amigos y padres de sus parroquianos—, se alinean de un modo natural con el bando inglés, porque también para ellos significaría la victoria de Inglaterra una liberación con respecto al medievalismo fascista. Pero ellos no pertenecen a la Iglesia victoriosa y carecen de poder en el momento actual.

Tal vez haya algunos círculos en Gran Bretaña que jugueteen con la idea de promover un fascismo católico «moderado» en España, pero en ningún caso pueden pretender hacernos creer —con un mínimo grado de veracidad— que con ello se estaría cultivando un aliado potencial de los británicos. Muy al contrario: llevados de sus propios prejuicios sociales, quienes optaran por esa estrategia estarían potenciando un régimen que, en último término, podría resultar ser una amenaza mayor para las democracias anglosajonas que un fascismo español puro. Un fascismo católico en España seguiría una expansión que lo llevaría necesariamente a desarrollar un movimiento hispánico imperialista en Sudamérica, coordinado inevitablemente con la política nazi y contrario a las influencias norteamericanas e inglesas.

Del mismo modo que Hitler, en su discurso del 25 de febrero de 1941, anunció grandes gestas para la primavera de 1941, también la Falange comenzó, más o menos por las mismas fechas, a hablar de banderas españolas victoriosamente desplegadas en primavera, y ondeantes de nuevo sobre países «donde no habían ondeado en siglos». A cualquier español se le hace evidente que esta es una referencia al litoral africano que se extiende al este del Marruecos español: es decir, una alusión a la Argelia francesa y, sobre todo, a Orán, ciudad que el cardenal Jiménez de Cisneros conquistó al frente de una fuerza expedicionaria en 1509. Todavía no está claro, en el momento de escribir estas líneas, si España realmente emprenderá esa aventura africana durante esta primavera y este verano, ya sea directamente, en apoyo de un Movimiento Nacionalista Moro contrario a Francia (y valiéndose del pretexto de restablecer la ley y el orden ante un presunto vacío de poder dejado por las autoridades francesas) o como una maniobra paralela a una ofensiva de Alemania sobre Gibraltar. Dependerá de los cálculos estratégicos del Estado Mayor alemán, de las maniobras en la batalla del Atlántico y en el mundo árabe. No dependerá, desde luego, de los deseos personales de Franco ni de las intrigas internas de la casta dirigente española. Eligieron su rumbo y ahora son prisioneros de este. En abundantes discursos pronunciados por destacados falangistas y, en particular, en uno del ministro de Exteriores español del 2 de mayo, aniversario del primer levantamiento contra Napoleón en 1808, se propugna la necesidad y la inevitabilidad de la guerra en general, y la voluntad de España de «cumplir su destino histórico» en particular.

Conviene aclarar, en vista de que mucha gente en este país se ha hecho ilusiones en ese sentido, que las victorias africanas de Inglaterra sobre Italia poco han contribuido a aminorar el peligro de una intervención española o, mejor dicho, de una colaboración activa con los alemanes. Entre los españoles, en general, se han tenido tradicionalmente en muy mal concepto las cualidades guerreras de los italianos. Ni siquiera la valentía de los antifascistas italianos en Guadalajara hizo mella en esa actitud: las divisiones del bando contrario eran italianas también. Los generales españoles, e incluso los fascistas de España, han dado siempre por sentado que Italia no es capaz de librar sus propias batallas por sí sola. Entre los

falangistas se ha recibido de un modo más bien favorable esa noticia de la caída de Italia del rango de gran potencia, porque así la España imperial estará llamada a desempeñar un papel más importante (y más acorde a su merecimiento) en el «nuevo orden».

La mayoría de la casta está convencida de que el Imperio británico es una plutocracia afeminada a punto de desmoronarse. Tal vez nada haya contribuido más a afianzar esa idea que el hecho de que Gran Bretaña concediera un préstamo comparativamente pequeño en un momento en que nadie podía decir ya que la oficialidad española estuviera ocultando sus simpatías por la causa del Eje. Ese gesto fue inevitablemente interpretado por los fascistas españoles como una señal de debilidad suprema y de torpe desesperación, y fue tomado por los demócratas españoles como muestra de un fatal error de juicio. En realidad, los miembros de la casta española están tan lejos de ser conscientes de la inagotable fortaleza combativa del pueblo británico como los miembros de la casta británica lo están de ser conscientes de lo vacuas que son sus concepciones sobre España.

Por estos motivos, la España de la Falange debe ser tenida por una amenaza grave contra el frente democrático y contra los intereses británicos, tanto si entra en la guerra como si solo funciona como vehículo de los planes del nazismo en África y América. Con el presente régimen, no hay una tercera posibilidad.

Sería inútil creer que las presiones de Estados Unidos o el aumento de la ayuda estadounidense a Inglaterra cambiarían la actitud de los gobernantes españoles o, siquiera, la de sus seguidores. A los españoles se les enseña en la escuela que los yanquis tienen dinero, pero no son soldados; las historias del heroísmo español en la guerra de Cuba —más vale «honra sin barcos que barcos sin honra»— impregnan el conjunto de su perspectiva. En cuanto a la riqueza estadounidense en materias primas, el español medio tiende a subestimarla. No tiene una visión geográfica ni económica de las dimensiones de los recursos americanos. Piensa en términos de la riqueza mineral española; cree que España posee más cobre y hierro que Estados Unidos porque las explotaciones de mineral de hierro de Bilbao y las minas de cobre de Río Tinto son «las más ricas del mundo». Además, a quienes están influidos por el mito hispánico de la Falange les

sería muy fácil creer que los Estados hispanoamericanos, poseedores de legendarias minas (la mayoría de ellas explotadas ahora de forma directa o indirecta por alemanes), se opondrían a los yanquis y se aliarían con España y los países amigos de esta. Los círculos de industriales y financieros acomodados que sí están en mejor disposición de calibrar los recursos de Estados Unidos y del Imperio británico, y que se sienten suficientemente molestos con el radicalismo fascista del actual régimen como para intrigar contra él, carecen de relevancia, aun cuando estuvieran entre las fuerzas que contribuyeron a la instauración de este régimen. Lo que sí influye en los dirigentes de España, así como en los principales aspirantes a gobernarla (los falangistas militantes), es el ejemplo de la enorme maquinaria de Hitler, con su potencia humana y material construida y mantenida sin dinero al modo en que este es concebido desde la ortodoxia de Wall Street y de Threadneedle Street.

Pero si fundar esperanza alguna en las corrientes probritánicas y antialemanas internas del actual régimen español y sus clases dirigentes es como construir castillos en el aire, el que sí está allí todavía es el aliado silencioso y olvidado: el pueblo llano de España. Esas gentes corrientes fueron los conejillos de Indias de los métodos de la guerra total durante casi tres trágicos años. Fueron ellas las que dieron a las democracias un trienio para preparar su defensa, y ninguna culpa se les puede achacar de que estas no hayan sabido aprovechar ese tiempo regalado. Ellos, los hombres y mujeres del pueblo llano español, han sido un freno a la incorporación activa de la España totalitaria al Eje y a su línea del frente. No les falta razón a los fascistas españoles cuando alardean de que fueron ellos quienes libraron y vencieron la primera batalla en la guerra del orden fascista contra el orden democrático; pero no menos cierto es que el pueblo español libró la primera gran batalla contra el fascismo, y que fue derrotado, pero nunca conquistado.

Inglaterra ha perdido un tiempo precioso para la movilización de sus aliados —sus únicos aliados de verdad— en España. Jamás he creído que Inglaterra debió haber provocado una guerra con España ni que se debió haber anticipado a Alemania enviando una fuerza expedicionaria a España, pues un acto así podría haber unido temporalmente a una gran masa de la

población española contra el intruso extranjero. Esto es algo que quiero dejar muy claro. Pero las probabilidades de convencer a los actuales gobernantes españoles de que deberían tener la sensatez a largo plazo de no enfrentarse a Gran Bretaña habrían sido mucho mayores si la diplomacia británica les hubiera demostrado que Londres ya había visto sus cartas y estaba preparado para jugar sus propios triunfos sobre la mesa porque sabía que tenía amigos en los barrios obreros, los pueblos... y las prisiones de España.

Un cambio en el lenguaje diplomático, aunque importante desde un punto de vista psicológico, no alcanzaría más que a solucionar cuestiones menores de la relación del día a día. Pero sí es cierto que habría ayudado a contrarrestar la propaganda germana, a disminuir la belicosa complacencia de la Falange y a demostrar la fortaleza básica de Inglaterra. Habría propiciado que el resentimiento y la desconfianza en la mente de los españoles republicanos fueran menores de lo que lo han sido con la lisonjería sistemática dedicada a Franco y a su régimen por *sir* Samuel Hoare. Pero todo esto es historia pasada, tanto como lo es la «neutralidad» española.

El problema actual es el de cómo ganarse la colaboración de los muchos millones de españoles que están deseando cifrar sus esperanzas en la victoria de Gran Bretaña siempre y cuando tengan garantías de que esta los liberará de su propia servidumbre. Sería un error fatal seguir ignorando a esas masas. También lo sería suponer que se levantarán contra los alemanes al instante. De todos modos, el fascismo español es débil, y aun si la maquinaria de guerra de Alemania termina introduciéndose en España, aquel seguirá siendo el eslabón más débil en la cadena de los países fascistas. La masa española odia la posibilidad de una guerra librada por unos motivos que le son ajenos, y por eso debería de llegar a odiar también a todos aquellos que defienden una guerra así: a los nazis, a los fascistas y a sus propios falangistas. Al final, este odio se hará incontenible. Pero sería imposible vincular esa gran fuerza potencial con la propia lucha de Inglaterra si todos esos españoles tuvieran la sensación de que los ingleses solo se acuerdan de ellos como último recurso, solo cuando las cosas ya se han torcido seriamente.

Para movilizar la fuerza latente del pueblo llano de España, ese que no ha sido (ni podrá ser) conquistado por el despotismo y el fascismo, Inglaterra tendrá que dejar muy claro que es realmente defensora de la libertad y la autodeterminación de *todos* los pueblos. Tendrá que demostrar a los españoles que no quiere imponerles ningún régimen en particular, ni apoyar ningún sistema que los españoles mismos rechacen.

Conozco a un nutrido sector de personas influyentes en Inglaterra que, ya sea en secreto, ya sea abiertamente, recelan de las alternativas al régimen de Franco, pues, a su juicio, estas solo podrían pasar por el comunismo o la anarquía. No son pocas las que estiman que una monarquía constitucional, respaldada por capital británico, sería la solución correcta.

Se comenta a menudo que los españoles somos un pueblo de honda naturaleza monárquica, un tópico que constituye una falacia peor que aquella otra según la cual todos los españoles somos católicos devotos o anarquistas furibundos. Lo que es un hecho histórico es que la monarquía constitucional no tiene arraigo alguno en España; los monárquicos españoles son, prácticamente sin excepción, unos feudalistas nostálgicos de una monarquía absoluta en la que ellos puedan ejercer el poder.

Confieso que estoy personalmente de acuerdo con don Julio Álvarez del Vayo, quien escribió en su más reciente libro, subtitulado *Lucha por la libertad*, que «entre Franco y un rey, un rey; pero en unas elecciones libres, ni Franco ni rey. Una república tendría hoy más votos que en 1931, cuando las elecciones municipales obligaron a don Alfonso a abandonar».

Una restauración de la monarquía en España no podría ser más que una situación de transición, en el mejor de los casos: un periodo de conflicto interno que inevitablemente desembocaría en una república o en una vuelta al fascismo. Por lo tanto, no tiene hueco en un nuevo plan para Europa. Pero ¿no hay más alternativa a ella que aquello a lo que muchos gustan de llamar anarquía o bolchevismo?

He hablado poco de la izquierda española en estas páginas, principalmente porque la realidad a la que nos enfrentamos hoy es la de la derecha española, pero también porque creo que las viejas maneras de la

izquierda española son ya, en muchos sentidos, cosa del pasado, y que sus nuevas formas se desarrollarán a partir de las condiciones psicológicas y sociales del momento actual, y no del pasado.

Varios son los tipos de constitución que podemos imaginarnos como sucesora de la caída del totalitarismo español, pero a mí me parece trivial especular al respecto. La cuestión, más bien, es si existen unas fuerzas democráticas constructivas en España bajo la ceñida tapadera de terror e hipocresía que cubre el país. La cuestión, también, es si es posible liberar esas fuerzas para que colaboren con la democracia británica. Yo sí creo que existen y que podemos liberarlas. ¿Dónde? En una España libre.

Una España libre y democrática tendría que alejarse del modelo francés de república parlamentaria, con su sinfín de partidos, su ingente burocracia y su rígida organización administrativa. Tendría que fundamentarse en las fuerzas de acción colectiva espontánea y administración comunal que constituyeron el núcleo central de la fuerza de la defensa republicana y de la defensa de Madrid. Tendría que mostrarse generosa para trazar una línea de separación con la historia pasada, pero también firme en la destrucción de los bastiones de la casta y dura en el tratamiento de cualquier intento de sabotaje. Tendría que aprender cómo el Partido Comunista perdió su influencia entre las masas de la España republicana en cuanto se le identificó con el aparato burocrático de la vieja escuela. Tendría que aprender cómo los anarquistas fueron unos espléndidos administradores y organizadores a pequeña escala, en comunidades reducidas, fieles en realidad a la vieja tradición de autoadministración local. Tendría que reinstaurar y completar la autonomía cultural y administrativa de Cataluña, el País Vasco y Galicia. Tendría que renunciar resueltamente a toda aventura colonial y poner todo ese empeño en la colonización interior del territorio español desatendido, y de los no menos olvidados seres humanos de España.

Yo creo personalmente que una España democrática tendría que renunciar a su Protectorado sobre Marruecos, pero reclamar su derecho de soberanía sobre Gibraltar para luego cedérsela en arriendo a Inglaterra como base.

Las tareas de la reconstrucción, la reforma agraria y la Revolución industrial son tan abrumadoramente gigantescas que en ellas tendrán que ocuparse la mayor parte de las fuerzas de los españoles durante más de una generación, y requerirán de la ayuda material del capital extranjero. Pero harán que España se convierta en un país rico y en paz, y que sus habitantes sean dueños de su propio destino. Irán agotando paulatinamente el pozo de la violencia colectiva desesperada. Librarán a mi país del mito del imperio perdido y las glorias pasadas, y lo traerán a la realidad de una vida clara y fuerte.

Una España así se encontraría con un imperio regalado.

Los intelectuales árabes, hombres libres y de ideas modernas, se solidarizarían con esa España, como ya lo hicieron en tiempos de la República y antes incluso, llevados del ánimo de revivir la vieja cultura hispano-islámica en contacto con nuestros mejores intelectuales. Asimismo, las creativas fuerzas espirituales y materiales de Hispanoamérica se alinearían de nuevo con lo que, en tiempos, se llamó «el meridiano de Madrid» dentro de un intercambio libre con la vida intelectual de España. Ya en la actualidad, el fascismo y el fanatismo religioso españoles se ven impotentes para destruir la gran labor de la intelectualidad española libre de los viejos y los nuevos tiempos, simplemente porque las editoriales de Sudamérica están reeditando los libros que ellos trituran y desmenuzan en territorio español.

Una España libre sería el centro de este imperio basado en la colaboración libre y espontánea, y sería también un miembro de una comunidad internacional de naciones libres.

Pero tal vez, al exponer este ideal de futuro, me esté dejando arrastrar por un utopismo ingenuo, aunque no tanto en lo relativo a los españoles libres como en lo que respecta a muchos políticos británicos que probablemente se llevarían las manos a la cabeza, horrorizados ante esa perspectiva.

La posibilidad de alinear unas fuerzas latentes tan formidables como esas con la lucha de Inglaterra por su propia libertad sí precisaría seguramente de un requisito previo: que la propia Gran Bretaña avance en su libertad desprendiéndose del peso muerto de todos aquellos que

propiciaron que entrara en esta guerra manifiestamente mal preparada para el combate y que todavía hacen que progrese hoy a ritmo premioso porque les da menos miedo perder la guerra que quedar derrotados socialmente cuando llegue la victoria.

Sin embargo, esta guerra nos impulsa inexorablemente a todos hacia una libertad constructiva, seamos ingleses o españoles. Y cuanto más sean las genuinas fuerzas democráticas y socialistas de Inglaterra las que ocupen los puestos clave de la línea de fuego, como sería lógico que los ocuparan en una guerra contra el fascismo como esta, más activos aliados encontrarán entre los españoles libres.

ESPAÑA EN EL MUNDO DE LA POSGUERRA

Informe elaborado por Ilsa y Arturo Barea para un
comité de la Oficina Internacional Fabiana

Nota: Este panfleto, como todas las publicaciones de la Sociedad Fabiana, no representa la opinión colectiva de la Sociedad, sino solamente la de las personas que lo han elaborado. La responsabilidad de la Sociedad Fabiana se limita a aprobar las publicaciones que edita por representar hechos y opiniones dignos de consideración dentro del movimiento laborista.

Agosto de 1945

MENSAJE DEL LABORISMO BRITÁNICO A ESPAÑA

El comunicado siguiente fue emitido por el Consejo Nacional del Partido Laborista el 28 de junio de 1944*:

> El Consejo Nacional Laborista ve con recelo las recientes «amables palabras» con las que el primer ministro [el señor Churchill] se ha referido al Gobierno español. Desmarcándose de esos comentarios, [el Consejo] quiere traer a la memoria aquellos trágicos años en los que el pueblo español estuvo sumido en una sangrienta lucha por la defensa de sus derechos y libertades constitucionales contra unos militares rebeldes liderados por el general Franco, quien, con la ayuda de los dictadores alemán e italiano, devolvió al pueblo español a una situación de servidumbre física, intelectual y política.
>
> Guernica fue el primer experimento de la Luftwaffe en el bombardeo aéreo de poblaciones civiles. Tras haber probado sus armas contra los cuerpos y las almas del pueblo español, Mussolini y Hitler procedieron a conquistar nuevos mundos mediante la devastación y la esclavización de Europa. Mussolini ha sido aplastado y repudiado hasta la ignominia por su propio pueblo. Los ejércitos de liberación están ahora estrechando el cerco desde el este, el oeste y el sur en pos de la liberación de Europa y la destrucción de la maquinaria militar germana. En tan propicios tiempos, el movimiento laborista británico envía sus fraternales saludos a sus amigos en España y expresa la firme esperanza de que el heroísmo de los republicanos españoles se vea pronto premiado por un gran acto de autoliberación democrática que consolide a España como pacífico miembro de la comunidad de pueblos libres y fortalezca los lazos y la amistad en paz y prosperidad entre los pueblos español y británico.

INTRODUCCIÓN
HACIA UNA POLÍTICA BRITÁNICA PARA ESPAÑA

Muy pocos de nosotros no coincidiríamos en afirmar que el historial del régimen del general Franco en España es tan negativo que lo mejor sería que desapareciera lo antes posible. Habrá quienes digan que nuestra posición es tan precaria que nada podemos hacer al respecto. Más aún serán aquellos que, aunque deseosos de que se haga algo, no estén seguros de qué puede hacerse ni de quién debería hacerlo.

Una España en la que imperara un régimen autoritario opresor durante los dos o tres trascendentales años de establecimiento de la paz en la Europa occidental supondría un potencial foco para el reagrupamiento de las fuerzas de la reacción y un semillero de temores y sospechas entre los Aliados. Sus repercusiones difícilmente se limitarían a Europa. La América del Sur y Central no puede mantenerse aislada de la evolución de los acontecimientos en España y una dictadura triunfal en territorio español sería un acicate para otras dictaduras menores (aunque no menos indeseables) al otro lado del Atlántico sur. Además, Franco y sus seguidores en España no están en absoluto dispuestos a contentarse con un papel meramente pasivo. Hoy podemos empezar ya a apreciar cuál será la pauta del papel que tratará de desempeñar España en el mundo de la posguerra. En España, la prensa y la radio están tratando de abonar el terreno para un resurgimiento en otros países de Europa de las perniciosas ideas que los Aliados están luchando por erradicar; se espera con entusiasmo la guerra entre Rusia y las potencias occidentales; se da cobijo a colaboracionistas europeos a quienes se recibe como héroes. Y la España autoritaria será una base más activa (que no menos) para nuevos partidos nazis, para especuladores que traten de pescar en aguas revueltas, para maniobras

diplomáticas dirigidas a causar disensiones en cuestiones de la máxima importancia para el resto del mundo. En este periodo de construcción de la paz en el que entramos, el precio que tendríamos que pagar por algo así podría ser terrible, aun valorándolo solamente en términos del efecto directo que tendría sobre nosotros mismos. A él habría que sumar el que se pagaría por permitir que continuaran los sufrimientos del pueblo español y por imponer una frontera —la de los Pirineos— al ámbito de la libertad por la que luchamos.

¿Cuál debería ser, pues, nuestra política relativa a España? El 10 de abril del año pasado, el señor Cordell Hull, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, declaró que los Aliados estaban convencidos de que «no puede llegarse a compromiso alguno con el fascismo y el nazismo. Deben desaparecer de todo el mundo». Los Aliados, añadió, estaban de acuerdo en que

> […] aun después de la derrota del enemigo no habrá seguridad si nuestra victoria no se aprovecha para destruir esos sistemas hasta en sus cimientos. Las acciones que deben emprenderse para lograr tales fines —decía él— deben ser acciones acordadas. [...] Es importante para los intereses de nuestra nación fomentar la implantación en Europa de unos Gobiernos populares fuertes y de progreso [...] comprometidos con la mejora del bienestar social del conjunto de la población [...]. Gobiernos que se sumen a un esfuerzo común de las naciones para la creación de las condiciones de una paz duradera.

No sería lógico ni estaría justificado que se hiciera una excepción con España, la primera víctima del Eje en Europa. Un régimen democrático sano en España sería beneficioso para todas las potencias: para el propio país; para Francia, justo al otro lado de los Pirineos; para Estados Unidos y los países latinoamericanos; para Rusia (contra cuyos ejércitos envió Franco la División Azul). Las diversas potencias no tienen unos intereses enfrentados a propósito de España. La sola posición geográfica del país hace que resulte irracional que se puedan tener en torno a él suspicacias mutuas del calibre de las que se tienen en la Europa del este. De hecho, difícilmente podría elegirse mejor punto de partida que España para progresar por la senda de una política común y de progreso. España, pues, debería estar en el orden del día cuando los dirigentes aliados se reúnan para trabajar en una política consensuada y en la creación del clima

propicio para el «gran acto de autoliberación» que, como bien expresa en su manifiesto de junio de 1944, el propio Consejo Nacional del Partido Laborista británico aguarda con ilusión: ese acto que permita apartar a Franco y sentar los cimientos de un régimen democrático en España.

La experiencia nos ha enseñado que los regímenes fascistas, por el hecho mismo de descansar sobre la fuerza, ni cambian su carácter fundamental ni se diluyen sin más. Cuando el pueblo español dé los pasos necesarios para librarse del opresor régimen de Franco, debería poder contar con la comprensión y el apoyo del mundo exterior. La primera condición esencial es que Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Rusia tengan una política común a propósito de un Gobierno alternativo para España. Nada sería peor que la posibilidad de que cada gran potencia respaldara a diferentes grupos de españoles. Tal cosa retrasaría más aún la solución de los problemas de España y desmoralizaría a las fuerzas opositoras españolas tanto de dentro como de fuera del país.

Al término de la Guerra Civil, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se mostraron escandalosamente impacientes por retirar su reconocimiento al Gobierno republicano español y otorgárselo al Gobierno «nacional» del general Franco, que había conquistado el poder por la sola fuerza de las armas (y, lo que es peor aún, con la ayuda de Hitler y Mussolini). Desde la retirada final del Ejército republicano español por la frontera de Francia y desde que la flor y nata de la vida intelectual, administrativa, educativa y política de España se viera forzada a partir hacia el exilio y a dispersarse por muchos países del viejo mundo y del nuevo, solo los Gobiernos de la URSS, México y unas pocas repúblicas latinoamericanas más, además de —desde su liberación— Francia, han hecho algo por animar o ayudar a los españoles en el extranjero a salvar las inevitables diferencias que surgen a raíz de la derrota y el exilio. Dentro de España, quienes se oponen al régimen de Franco llevan seis años subyugados por la fuerza, desarmados, condenados a la prisión y la muerte como pena por organizarse como oposición o siquiera por resistirse de forma individual. Ningún estímulo ni ayuda se les ha brindado para que organicen una oposición al régimen.

Ahora los Gobiernos aliados estarían sin duda encantados de tener un Gobierno más respetable con el que tratar en España. Gran Bretaña, que tiene la difícil tarea de alentar y contribuir al crecimiento de la democracia en el continente, tiene un interés muy especial en ver instaurado en España un Gobierno constitucional, progresista, estable y amigo. Culpar de la no solución de ese dilema a la ineficacia de la oposición interior en España o a las divisiones entre los exiliados no es la respuesta. El Gobierno británico debería tomar la iniciativa de animar a los españoles a dotarse de un Gobierno alternativo que reemplace al de Franco.

¿En qué bases debería fundamentarse ese Gobierno? En primer lugar, los intentos del régimen de Franco y de sus valedores actuales o previos de presentarlo como si estuviera evolucionando hacia la democracia deberían considerarse como lo que son: meras maniobras para salvarlo. En segundo lugar, no debería alentarse la causa de la restauración monárquica ni la posibilidad de una regencia. La última vez que el pueblo español tuvo la oportunidad de elegir en libertad, eligió una república, y hasta que pueda votar libremente de nuevo sobre esa cuestión, el régimen de España debe continuar siendo republicano. En tercer lugar, los republicanos españoles deberían contar con las garantías suficientes de que, cuando hayan alcanzado un acuerdo consensuando y hayan instituido un órgano encargado de allanar el terreno para el restablecimiento de un gobierno popular en España, contarán con el reconocimiento de los Gobiernos aliados. El apoyo —expresado públicamente y unido— de las grandes potencias a la formación de un Gobierno provisional para España animaría a los españoles en el exilio a formar un frente común; ya han aproximado posturas para un acuerdo gracias a la actitud favorable de los franceses, los rusos y algunas repúblicas latinoamericanas, y a las recientes oportunidades brindadas a diversos dirigentes republicanos de viajar e intercambiar impresiones en Francia, San Francisco y México.

Cuando los republicanos españoles establezcan un órgano que los represente, este debería ser reconocido como Gobierno provisional hasta el restablecimiento de un sistema de gobierno constitucional y popular en territorio español, a condición de que (a) cuente con una amplia base de apoyo, (b) propugne un programa democrático constructivo, (c) ofrezca

garantías de que españoles de trayectoria intachable, miembros de la oposición interior en España, participarán en el Gobierno provisional cuando este se instaure en suelo patrio y (d) garantice también la celebración de elecciones libres y con sufragio universal y voto secreto en un plazo de tiempo determinado. Estas condiciones servirían para tranquilizar a aquellos de los actuales opositores del interior que puedan tener la sensación de que los españoles del extranjero han perdido el contacto con la situación y la opinión existente dentro de España, y para influir en quienes dudan sobre si oponerse al régimen de Franco porque piensan que cuenta con el apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos.

La ambigüedad de la política británica (y estadounidense) ha sido un factor importante para el mantenimiento de Franco en el poder. Ha desanimado a nuestros amigos, ha fortalecido la moral de nuestros enemigos y ha confundido a la opinión pública, tanto dentro como fuera de este país. Ahora que ni la debilidad militar ni la necesidad estratégica pueden esgrimirse como excusas de la mencionada ambigüedad, no puede haber ya ningún motivo válido para no hacer que la política de este Gobierno esté en mayor sintonía con el sentir popular, ni para ocultar a la opinión pública la verdad sobre las relaciones con España y sobre las condiciones que se viven dentro de aquel país. Las «amables palabras» dedicadas por el señor Churchill a España el 24 de mayo de 1944, y las múltiples evasivas ante las preguntas planteadas en la Cámara de los Comunes parecen dirigidas, en el mejor de los supuestos, a guardar las apariencias de los responsables de nuestra política. Si el asesoramiento y la información de que dispone el Gobierno son inadecuados, tal vez se deba a que los puestos de la embajada británica en Madrid y en otras localidades españolas han sido dados a quienes están más cualificados —por tradición y simpatías— para tratar con las jerarquías oficiales y los círculos influyentes que para contactar con —o comprender a— la gran masa del pueblo español, hostil al actual régimen.

La situación interna de España y, también, su posición en el terreno general de las relaciones internacionales no deberían estar supeditadas a la política de la lucha de poder entre las potencias, sino que deberían ser contempladas como una parte más de la reorganización fundamental de la

paz y el progreso mundiales. Así quedó reconocido de forma implícita en San Francisco, cuando la conferencia allí reunida aprobó por aclamación una declaración presentada por México para la exclusión de la nueva organización mundial de todos aquellos Gobiernos llegados al poder en sus países con ayuda militar del Eje. Quedó claro en aquel debate que esa declaración iba dirigida contra la España de Franco, y el delegado francés recalcó que, cuando se restablezca un régimen democrático, España será acogida como miembro de pleno derecho. Es de suma importancia que el Gobierno británico (ni ningún otro) no ponga en riesgo esa potencial evolución de la situación negociando sobre temas concretos con el presente Gobierno español. Las potencias democráticas deberían abstenerse tanto de buscar más favores de Franco como de concedérselos a su régimen. Las relaciones comerciales, por ejemplo, deberían circunscribirse a unos límites estrechos y convencionales por el momento. Bajo ninguna circunstancia deberían británicos ni estadounidenses dejarse manipular en sus relaciones económicas (o de cualquier otro tipo) con España hasta acabar enfrentados, como ocurrió el año pasado, cuando el Gobierno español aprovechó las divergencias surgidas entre ellos a raíz de unas negociaciones sobre wolframio y petróleo.

En cuanto a la entrega a los Gobiernos aliados de colaboracionistas como Laval y Degrelle, a Madrid se le ha permitido utilizar unas tácticas dilatorias que han tenido un efecto perjudicial en el prestigio de las democracias. El caso de Laval ha exasperado hasta tal punto a la opinión pública francesa —ya de por sí hostil a la España franquista— que, el 26 de mayo, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Consultiva francesa instó al Gobierno galo a proponer una acción conjunta de los Aliados para invitar a Franco a dimitir y dejar paso a un nuevo Gobierno español democrático. Un posicionamiento común y decidido en esta cuestión podría resultar eficaz; unas instancias internacionales divididas, sin embargo, no ayudarán más que a endurecer la obstinación de Franco. Tampoco sobre la cuestión de la zona internacional de Tánger, ocupada por tropas de Franco cuando los Aliados estaban demasiado débiles para impedirlo, debería haber negociación alguna con el actual Gobierno español. A Franco debería ordenársele la retirada de sus tropas para que

Tánger recupere su estatus previo a la guerra. Cualquiera de los cambios aconsejables en el régimen internacional [de dicha ciudad] debería aguardar a la constitución de un Gobierno representativo en España con el que los Aliados —incluida Francia— pudieran negociar libremente.

Pero los Aliados no deberían actuar solamente allí donde sus propios intereses particulares estén afectados; deberían hacerlo también teniendo en mente el bien de los españoles. No sería en absoluto recomendable que tanto el británico como otros Gobiernos continuaran perdonando la completa ausencia de libertades políticas y civiles en España. Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y, en mucha mayor medida aún, Francia, México y otras repúblicas latinoamericanas han dado asilo a exiliados españoles. Miles de ellos han servido en las fuerzas aliadas y han prestado valiosos servicios en las industrias de guerra, en medicina, en ciencia, etcétera. Estas personas no pueden regresar actualmente a España, por mucho que Franco diga que está «deseoso» de tenerlos de vuelta siempre que no hayan cometido «crímenes», porque es obvio que no pueden fiarse de la palabra del dictador. La cuestión de las libertades civiles y políticas en España debería estar entre los temas prioritarios del orden del día cuando se reúnan los líderes aliados y debería ser objeto de una iniciativa conjunta. Esta podría concretarse en una comunicación al Gobierno español notificándole el deseo de los Aliados de enviar a España una comisión internacional encargada de informar sobre las condiciones allí existentes y de inspeccionar las prisiones, los batallones de trabajos forzados y los campos de concentración.

Si se adoptara esta línea en la política relativa a España, es evidente que sería imposible mantener relaciones diplomáticas con Madrid durante mucho tiempo más. Esa también debería ser otra de las medidas del orden del día de los dirigentes aliados cuando se reúnan, a fin de que tomen una decisión conjunta a propósito de qué cuestiones y en qué fase deberían romper relaciones con el actual régimen español aquellos países que todavía las mantienen (Gran Bretaña y Estados Unidos entre ellos).

Por último, el Gobierno británico y otros Gobiernos aliados deberían ofrecer garantías de que, cuando se instituya un Gobierno provisional reconocido en suelo español, este podrá contar con el suficiente apoyo

moral y material, así como, si así lo desea, ayuda internacional para construir el aparato gubernativo, supervisar elecciones y mantener el orden. Para que la democracia tenga la oportunidad de desarrollarse en España es importante que la siempre dificultosa transición de un sistema de gobierno totalitario a otro popular y representativo sea lo más tranquila posible. «Debe reinar el orden para evitar el caos —declaró el señor Cordell Hull el año pasado—, pero ese orden debe conseguirse de un modo que dé libertad total de actuación a aquellos hombres y mujeres que miren hacia el futuro, hombres y mujeres que pongan fin al fascismo y sus actividades, y que creen las instituciones para un modo de vida libre y democrático».

España es la causa instrumental que sentará precedente para la Europa occidental. Una política común, coherente y democrática para el caso español infundirá nuevos ánimos en todos aquellos que quieren ver establecida en toda Europa una democracia política y económica fundada sobre unos cimientos firmes. Un Gobierno británico laborista respaldado por una opinión pública bien informada estaría en situación de sostener una política de ese tipo. El movimiento laborista británico está comprometido con la causa de la restauración de una república española libre, y al movimiento laborista —como a todos aquellos que comparten su fe en los principios progresistas— le compete la tarea de procurar que, sin mayor demora, se aplique una política constructiva con respecto a España.

En resumen, la política [exterior] británica debería ir dirigida —en la teoría y en la praxis— a procurar lo siguiente:

1. España debe estar en el orden del día de las reuniones entre los líderes aliados.

2. Debería acordarse una política común sobre las relaciones con el actual régimen. Dicha política debería abarcar las relaciones comerciales, la entrega de colaboracionistas y criminales de guerra y la imposición de medidas para evitar que España sea usada como base de futuras intrigas nazis o para la penetración de la industria y la ocultación de activos de alemanes en territorio español. Debería llegarse al acuerdo de no negociar con el actual régimen ninguna cuestión concreta, ni siquiera la de Tánger.

3. La cuestión de las libertades civiles y políticas en España debería ser objeto de una iniciativa conjunta de los Gobiernos aliados. Una de las primeras medidas en ese sentido podría ser la de comunicar al régimen de Franco la intención de enviar a España una comisión internacional para que informe de las condiciones allí existentes e inspeccione prisiones, batallones de trabajos forzados y campos de concentración.

4. Debería alcanzarse una decisión conjunta en cuanto a los temas y el momento o fase en que aquellos países que (como Gran Bretaña y Estados Unidos) todavía mantienen relaciones diplomáticas plenas con el actual régimen español deben romper con él.

5. Las grandes potencias deberían declarar públicamente que:

(a) Desean que haya en España un régimen democrático presidido por un Gobierno constitucional elegido por sufragio libre, universal y secreto.

(b) Hasta que se instaure un régimen democrático, España no será admitida en la nueva organización mundial ni en foros de debate internacionales.

(c) Ningún intento de Franco y de los defensores actuales (o anteriores) de su régimen de presentar a este como si estuviera evolucionando hacia la democracia engañará a los Aliados ni cambiará su determinación de cara a excluir de la nueva organización mundial o de los debates internacionales a todo Gobierno que no sea el de una España democrática.

(d) El restablecimiento de la monarquía o la instauración de una regencia sin que el pueblo español haya expresado su opinión al respecto en unas elecciones libres no recibirá ningún apoyo de ninguna de las grandes potencias, ni afectará a la actitud de estas respecto a la participación de España en la organización mundial o en los debates internacionales.

(e) Se darán todas las facilidades a los republicanos españoles para establecer un órgano de amplia base que se encargue de allanar el terreno para un regreso a un sistema de gobierno constitucional y popular en España. Este órgano será reconocido por los Gobiernos aliados como un Gobierno provisional para España hasta la instauración de un Gobierno representativo en suelo español, siempre y cuando (i) tenga una base de

apoyo amplia, (ii) propugne un programa democrático constructivo, (iii) dé garantías de que españoles de intachable trayectoria, miembros de la oposición interior en España, participarán en el Gobierno provisional que se instaure en suelo español y (iv) garantice la celebración de elecciones libres con sufragio universal y secreto dentro de un plazo de tiempo determinado.

(f) Ese Gobierno provisional, instalado ya en suelo español, podrá contar con el apoyo moral y económico de las potencias y, si así lo desea, recibirá ayuda internacional para la construcción del aparato gubernativo del país y para la supervisión de las elecciones.

El siguiente estudio de la situación en España ha sido elaborado para un comité de la Oficina Internacional Fabiana por Ilsa y Arturo Barea. Explica el contexto y los antecedentes esenciales para entender la necesidad urgente de aplicar una política común y constructiva con respecto a España, tanto en interés del pueblo español mismo como en el del progreso y la seguridad en el mundo de la posguerra.

Oficina Internacional Fabiana,
11, Dartmouth Street, Londres, S.W.1.
27 de julio de 1945

ESPAÑA EN EL MUNDO DE LA POSGUERRA

Cuando el señor Churchill hizo un repaso general de la situación de la guerra ante la Cámara de los Comunes el 18 de enero de 1945, puso a España en su lugar —desde su propio punto de vista— al agruparla con Italia:

> Permítanme que les diga, clara y terminantemente, que no existe ninguna combinación política en Europa o, para el caso, en cualquier otra parte del mundo en la que necesitemos a Italia como socio; no necesitamos a Italia más de lo que podamos necesitar a España, simplemente porque no tenemos proyecto alguno que vaya a precisar del apoyo de potencias como esas.

Tal como está formulada, he ahí una afirmación definitiva e irreversible en el terreno de la política, los proyectos o las combinaciones políticas de las potencias europeas. Pero, aunque esa declaración relegaba al limbo del que nunca deberían salir las aspiraciones del general Franco de convertirse en uno de los negociadores de la paz mundial, no terminaba con el problema español que Gran Bretaña, junto con los demás pueblos implicados en la paz futura, tendrá que afrontar.

Mientras exista, esa España de hoy, la España falangista o fascista, constituye un peligro potencial para los Estados democráticos y los pueblos antifascistas del mundo. La España actual no solo es un régimen fascista y totalitario, sino que, además, y por citar al vizconde de Templewood *(sir* Samuel Hoare, quien, como embajador británico ante el general Franco, ha tenido sobrada oportunidad de estudiarlo), ha estado en manos de la Gestapo y continúa en manos de personal formado por la Gestapo. ¿Puede algún primer ministro británico asegurar que ese hecho no va a tener consecuencias en algún momento para su propio país?

Tal parecería que existe una respuesta oficiosa muy simple a esa pregunta, según la cual el régimen totalitario del general Franco y su Falange no sobrevivirá mucho tiempo al inicio de la paz, porque la nueva

organización mundial no tendrá cabida para los de su género. Las diversas negociaciones más o menos abiertas dirigidas a propiciar un cambio de régimen en España sin que estalle una nueva guerra civil se tratan en la prensa mundial como si el general Franco fuera ya un cadáver político que no es consciente de serlo. Pero el peligro inherente a que no se resuelva el problema español no se limita a la persona del general Franco ni, tan siquiera, a la Falange, sino que está estrechamente ligado a la estructura social, política y económica de España, y entrelazado con la forma económica de los mundos de la preguerra y la posguerra, y debe ser reconocido y tratado como tal.

ALEMANIA EN ESPAÑA

El aspecto de toda esta cuestión sobre el que más se sitúa el foco de la atención pública es la probabilidad de que la España falangista se convierta en un enorme punto de encuentro de refugiados nazis, y trampolín para sus actividades futuras. Si este peligro evidente y muy real, con sus propias implicaciones para América Latina, se circunscribiera a la red de la Gestapo a la que se refería *lord* Templewood como potencial organización receptora, y si se pudiera conjurar mediante presiones diplomáticas o, incluso, con un cambio de los dirigentes oficiales de España, estaríamos ante un problema relativamente sencillo. Pero ya en un aspecto de la más apremiante importancia como este podemos apreciar que existen unas raíces más profundas, y que las causas y los resultados no pueden separarse del panorama complejo general que ahora está de moda ignorar (según la conveniencia) y que fue el que condujo a los graves problemas internos de España y a la Guerra Civil.

La invasión alemana en España no es ni mucho menos reciente; no la iniciaron los nazis, sino los padres de sus patrocinadores financieros y políticos hacia el final del siglo pasado. La política alemana de infiltración comercial y financiera en España comenzó tras la muerte de Alfonso XII, padre del último rey, cuando ejercía la regencia del país una mujer, una princesa habsburguesa, y la Administración estaba en manos de pequeños grupos políticos muy necesitados de financiación y patrocinadores. El

avance de la influencia alemana se vio ayudado por factores psicológicos que hacían que dichos grupos y las clases de las que habían surgido fueran desaforadamente antibritánicos.

España había recibido una lluvia de capital británico cuando el país estaba todavía convaleciente de las secuelas de una serie de guerras civiles, y de la pérdida de sus colonias más ricas. En esa situación financiera de extrema dificultad, ese capital británico había construido y emprendido nuevos proyectos y había conquistado influencia política gracias a su participación en la ruinosa vida económica española. Pero no usó esa influencia para otro propósito que para salvaguardar los intereses de los accionistas, intereses que no parecían ser otros que perpetuar la baratura de la mano de obra local: es decir, perpetuar una situación que hacía de España algo muy parecido a una «colonia».

Las empresas extranjeras se aprovecharon de los salarios de hambre que se pagaban por todo el país, y de la protección de la Guardia Civil, siempre presta a reprimir cualquier señal de agitación. Pero los empresarios e ingenieros ingleses residentes en España se recluyeron en sus clubes y sus colonias, aislados de la población española autóctona, los «nativos», a excepción de aquellos miembros de la nobleza que podían procurarles formas más refinadas de entretenimiento, como la caza. Sus salarios podían ser hasta diez veces mayores que los de sus colegas y homólogos españoles, en correspondencia con los niveles de renta y de vida de sus países respectivos. Como consecuencia, no era tanto la población de clase obrera como la de clase media y alta la que sentía animadversión hacia los británicos con los que convivían. Los mineros de Huelva que trabajaban para Río Tinto, o los mineros de Bilbao que trabajaban también en empresas de capital británico, estaban bastante satisfechos con sus empleos —a pesar de los salarios bajos y de los ocasionales choques con la Guardia Civil, que actuaba en calidad de protectora de los dueños extranjeros—, porque, en sus propias localidades, los salarios generales eran todavía más bajos, el empleo, estacional y precario, y los guardias civiles se empleaban aún más a menudo con las culatas de sus fusiles. Pero los pequeños capitalistas e industriales en ciernes españoles —no había ninguna gran industria ni ningún gran capital autóctono español todavía— se volvieron en contra de

los capitalistas invasores con envidia, una rivalidad impotente y eslóganes primorosamente patrióticos; el Ejército español, doliéndose aún de las heridas del fracaso de las guerras coloniales y humillado por las bajas retribuciones, odiaba al triunfante imperio «mercantil» extranjero; el clero español estaba implicado en la guerra de guerrillas económica de los banqueros españoles contra el capital británico, pues la clerecía misma controlaba un amplio e influyente sector de la banca española y detestaba a Inglaterra como país del liberalismo y el librepensamiento que la Iglesia católica condenaba como archienemigos suyos: los más peligrosos desde el racionalismo francés.

La camarilla que rodeaba al trono español en los años inmediatamente previos a 1900 procedía de las filas de los dignatarios eclesiásticos, la aristocracia y la casta militar, personas con ambiciones frustradas, incapaces de ajustarse al hecho de que España se hubiera caído de su estatus de gran potencia, resentidos todos ellos con la fuerte influencia inglesa en los asuntos económicos españoles que otorgaba al Gobierno británico una posición inexpugnable en cuestiones relativas a la política externa e interna de España. La reina Cristina era una Habsburgo; el jefe de su Casa Real había sellado una alianza con el emperador alemán. El comercio y la industria germanos se estaban expandiendo con rapidez, y los agentes de las empresas alemanas abordaban el mercado español con prudencia y discreción, sin causar aprensiones como las que suscitaban sus competidores de otros países. A las clases propietarias españolas y a la casta militar les resultó entonces más fácil expresar su resentimiento antibritánico y su desagrado por la anticlerical República Francesa mostrando su admiración por el Imperio alemán, y remarcando los vínculos espirituales, por así llamarlos, entre sus dos países «imperiales», opuestos a los burgueses y saciados imperios coloniales. Además, lo que se enseñaba en las escuelas, las academias militares y los seminarios de España encajaba bien en esas renovadas rivalidades económicas y rencores políticos.

LA INFILTRACIÓN INDUSTRIAL ALEMANA

No tardaron las fábricas del Estado español en adquirir y utilizar patentes de Krupp, ni el Ejército español en obtener sus provisiones de Essen. Sin embargo, el hecho de que los astilleros españoles estuvieran controlados por Vickers-Armstrong impedía que se desanudara el ligamen de la Armada con empresas británicas para sus suministros de equipo y material. La consecuencia de esto último fue el abandono sistemático de que fue objeto la Armada española por parte del Gobierno de la época. Este no hizo nada por evitar el deterioro de aquella, reducida a un escaso número de buques desfasados, y semejante política —incomprensible en un país abierto a dos mares— se tradujo en el cierre del Colegio Naval. Esta clausura, por cierto, bloqueó el acceso a la carrera naval para un joven de una familia instruida en las tradiciones de la Armada y contribuyó en no poca medida a moldear su mentalidad: ese joven era Francisco Franco Bahamonde.

Cuando el Imperio alemán intentó establecerse en el norte de África, la afluencia de alemanes a España se intensificó. Los tratados internacionales de Madrid y Algeciras, que, bajo el liderazgo inglés, dibujaron los mapas del reparto de poder en el Mediterráneo y el África septentrional, no hicieron más que agudizar el resentimiento de las clases dirigentes españolas contra Inglaterra y Francia. Los galos se quedaron con la mejor parte del Protectorado de Marruecos, y Tánger fue extirpada del territorio asignado a España y puesta bajo Administración internacional. Inglaterra impuso además una serie de salvaguardas militares sobre el territorio español para favorecer sus intereses en Gibraltar, como si la sola presencia de la bandera británica en suelo peninsular no fuera provocación suficiente para los frustrados imperialistas españoles.

En represalia, España abrió las fronteras de su Protectorado marroquí a diversos prospectores alemanes, incluidos algunos que pretendían (sin apenas disimularlo) actuar contra la zona del Protectorado francés. En la Península misma, las industrias de pequeña escala instaladas con capital español precisaban de maquinaria y técnicos: muchos fueron, precisamente, los técnicos que vinieron entre los inmigrantes germanos llegados a España en aquellos años y también fueron varias las empresas alemanas que suministraron maquinaria después de que sus expertos hubieran explorado

el mercado. Aquella infiltración prosiguió a lo largo de los años siguientes. Junto con los ingenieros y los empresarios alemanes, también llegaron de aquel país profesores. El penoso estado de la formación técnica en España —parejo al de la educación española en general— y la debilidad de la industria autóctona hicieron que fueran muy bienvenidos. Les resultó sencillo ocupar puestos clave en un país que no había vivido todavía su Revolución industrial.

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS Y EL CAPITAL ALEMÁN

Los expertos técnicos procedentes de Alemania ayudaban al establecimiento de empresas genuinamente españolas. Pero allí donde las perspectivas comerciales de la industria autóctona en cuestión eran halagüeñas, esta —circunscrita de entrada a un mercado local o provincial — era puesta bajo el control de la compañía alemana que le había proporcionado la maquinaria, o del grupo industrial alemán que establecía en la zona a una de sus filiales ya consolidadas para que pusiera en marcha una nueva planta de producción a mayor escala. En cualquier caso, siempre se incorporaba a uno o varios pequeños industriales o especuladores españoles para que le imprimieran su sello de autenticidad hispana.

Fue mediante esa forma de proceder como Siemens fue absorbiendo progresivamente una gran parte del sector eléctrico español, que, en sus fases iniciales, había sido creado por capitalistas autóctonos en ciernes que se embarcaban en la aventura de abastecer de luz eléctrica a los pueblos aislados de España. De manera similar, la Rheinische Stahlwerke invadió el sector ferroviario español, y Orenstein y Koppel hicieron lo propio con la producción de maquinaria minera. Las grandes compañías químicas alemanas, que posteriormente se fusionarían para formar la IG Farberindustrie, introdujeron sus tinturas y procesos en Barcelona e hicieron que la industria textil catalana se volviera dependiente de ellas. También la compañía alemana de producción y explotación de gases industriales estableció así su control sobre la metalurgia española.

En el periodo de entreguerras, las siguientes compañías y empresas «puramente españolas» —por nombrar simplemente algunas de las más importantes— estaban bajo completo control alemán:

— Industria Química y Lluch, S. A., de Barcelona, subordinada a IG Farben.
— Carde y Escoriaza, de Zaragoza, vinculada a Reichsbahn-Gesellschaft.
— Forjas de Alcalá, y también Forjas de Buelma, pertenecientes al grupo de Rheinische Stahlwerke.
— Cobres Electrolíticos de Córdoba, gestionada por el consorcio alemán del cobre, un detalle de cuya importancia pudimos darnos plenamente cuenta durante la actual guerra.

Estos eran —y son— algunos de los baluartes de la industria pesada alemana en España, bien parapetados tras su fachada impecablemente española.

Tal vez venga bien citar aquí un ejemplo tomado del final de la última guerra que evidencia —como si de un pronóstico de los acontecimientos que cabría esperar al final de la presente guerra se tratara— la utilidad que un capital alemán interesado en evadir el control de los vencedores dio a la red económica germana en España. En 1918, año del armisticio, la Deutsch-Ueberseeische Elektrizitaetsgesellschaft controlaba una parte considerable de la energía eléctrica en Brasil y Argentina. En Brasil, sus activos fueron confiscados y transferidos a los Aliados. En Argentina, la compañía alemana había traspasado a tiempo sus derechos a un consorcio formado por españoles (y, por lo tanto, neutrales en la contienda); cuando los representantes franceses instaron a que se procediera a embargar también las centrales eléctricas de esa empresa en Argentina, el Gobierno de Buenos Aires —supuestamente respaldado por Gran Bretaña— alegó que los dueños alemanes habían sido sustituidos ya por unos españoles impecablemente neutrales.

El 22 de julio de 1919, la Compañía Hispano-Americana de Electricidad, también llamada CHADE, se constituyó conforme a la legislación española en una notaría de Madrid con un capital social de 120 millones de pesetas; esta asumió del consorcio español los derechos sobre los activos en Argentina de la empresa germana previa. El poderoso financiero y político catalán Cambó, exministro español de Hacienda, intervino en el acuerdo que se llevó a cabo a través de varios grandes bancos españoles. El hombre que dirigió aquella reorganización fue Daniel Heinemann, conocido promotor de la Société Internationale d'Énergie Hydro-Électrique (SIDRO)[1] y principal cerebro del grupo internacional SOFINA (Société Financière de Transports et d'Enterprises Industrielles). Cuando se formó la CHADE en 1919, todos los miembros de su consejo de administración —presidido por el marqués de Comillas— eran españoles. En la junta general correspondiente al ejercicio financiero de 1934, la última celebrada antes del periodo de la Guerra Civil, veintitrés de los cuarenta y cinco miembros del consejo de la CHADE ya no lo eran[2].

A juzgar por el papel desempeñado por esta compañía en la transferencia de capital de España a América Latina, precisamente en un momento en que los capitalistas españoles (y de otros países) se mostraban particularmente nerviosos por la ascendente política económica y social de la República, cabe suponer que no se ha escrito aún el capítulo final de su historia como vehículo para el traspaso de capital internacional. Y su éxito en tal empresa al término de la anterior guerra podría muy bien servirnos de ejemplo: a modo de advertencia, si se entiende bien, o, en todo caso, como un útil precedente.

LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DE PATENTES

La expansión de la industria alemana en España, algo que era ya un hecho consumado cuando los nazis llegaron al poder, se vio muy favorecida por la legislación española sobre patentes. La inteligencia con la que los industriales alemanes —y, en años posteriores, los políticos nazis que actuaron por medio de aquellos— utilizaron esa legislación hace que esta merezca especial análisis, sobre todo, porque podría desempeñar una

función parecida en futuras maniobras desplegadas bajo la apariencia de movimientos políticos exclusivamente españoles que, en el fondo, correspondieran al ámbito de la lucha de poder entre las grandes potencias a través del capital internacionalizado.

La actual ley de patentes [la Ley de Propiedad Industrial] española no experimentó modificaciones sustanciales cuando fue reformada [mediante real decreto-ley] durante la dictadura de Primo de Rivera; cuesta saber si sus disposiciones más absurdas fueron introducidas de forma deliberada o si simplemente delataban la falta de expertos en un país que todavía no había vivido su propia Revolución industrial. Estos son sus aspectos destacados:

— El Estado español concede una patente con independencia de si es viable en la práctica o de si es verdaderamente novedosa: basta con que la solicitud haya sido registrada y se hayan pagado las tasas correspondientes.
— El dueño de una patente tiene derecho a denunciar a quien la infrinja en aplicación del código penal: a instancias del denunciante, pues, el juez competente debe emitir una interpelación que ordene el paro inmediato de la producción que se esté realizando mediante el proceso en cuestión y que declare el embargo de los bienes ya fabricados con él, al tiempo que el presunto infractor y/o el fabricante tienen que comparecer en el juzgado.

Tomadas en conjunto, estas dos características de la ley convierten las patentes en un arma económica especialmente formidable. Un caso concreto ilustrará mejor el alcance de la misma:

A finales de los años veinte, Ford envió un avión militar a un aeródromo de Sevilla para que fuera probado allí por expertos del Ejército con vistas a la firma de un gran contrato militar. La empresa que competía con Ford era Junkers. Esta denunció entonces que una de las patentes que tenía registradas en España había sido violada por aquel producto de Ford y puso la maquinaria judicial en marcha. Cuando el aparato de Ford llegó a la base aérea de Tablada, fue confiscado y precintado por orden del juez. Para

hacer frente a la acusación y a las posibles consecuencias de esta, Ford interpuso a su vez una demanda para solicitar la nulidad de la patente de Junkers. Comenzó así un proceso civil para dilucidar en los tribunales un problema técnico muy complejo que se centraba en el sistema de voladizo con el que las alas tanto del modelo de Ford como del de Junkers iban montadas por debajo del fuselaje.

Pasaban los meses y el avión seguía parado y precintado en Tablada; se obtuvieron los pertinentes informes técnicos de los ingenieros españoles; diversos documentos debidamente legalizados y traducidos fueron preparados y enviados tanto desde Estados Unidos como desde Alemania; la causa prosiguió su lento curso por los diversos estadios del procedimiento judicial. El contrato del Ejército fue a parar a una empresa británica. Y, al final, las dos potencias industriales, Ford y Junkers, firmaron un acuerdo de compromiso válido para el mercado español: se reconocía la validez de la patente de Junkers (la demanda judicial no llegó nunca más allá) y se estipulaba que Junkers cobraría derechos por las futuras ventas de aviones de ese tipo particular que Ford realizara en España. En general, puede decirse que fue a Junkers a la que le cupo la victoria, pues había hecho toda una demostración de su fuerza en territorio español. Además, el contrato del Ejército con la empresa inglesa terminó por extinguirse. Diez años después, durante la Guerra Civil española (y después de esta), serían expertos de Junkers quienes equiparían y organizarían la fuerza aérea de Franco.

Pues bien, de todas las patentes registradas en España, es Alemania la que acumula un mayor número, contando también aquellas registradas por auténticos españoles. Los industriales alemanes mismos sacaron tan sistemático partido de la legislación española sobre patentes que sometieron bajo su influencia toda la producción industrial española existente a fin de controlar tanto el mercado potencial como el actual de importaciones industriales y, al mismo tiempo, bloquear las vías para un desarrollo orgánico de la industrialización propia de España. Muchas de las patentes alemanas solicitadas en España carecían de valor en sí mismas, pero resultaban muy valiosas para sus propietarios porque les servían para amenazar con esa clase de órdenes judiciales: las empresas españolas,

comparativamente débiles, no se atrevían nunca a librar unas batallas judiciales tan prolongadas y costosas como aquellas, para las que carecían de recursos, por muy evidente que fuera la razón que les asistiera en el caso.

EL CAPITAL EXTRANJERO Y LA REPÚBLICA ESPAÑOLA

Cuando se instauró la Segunda República —es decir, dos años antes de que Hitler llegara al poder en Alemania—, la red financiera e industrial alemana en España estaba ya tupidamente trenzada y, aun así, se antojaba menos notoria, menos provocadora a ojos de la ciudadanía, que algunos monopolios de propiedad británica o norteamericana. Los intereses de los capitalistas extranjeros y españoles parecieron correr parejos durante los años que siguieron: diríase que su afán común era oponerse a la tendencia al izquierdismo, a la subida de los salarios, a una reforma agraria que (en último término) habría contribuido a incrementar el precio y el estatus de la mano de obra, y a una política económica nacional más orientada hacia el bien del colectivo y menos hacia el de la empresa privada. De ahí que el débil capital español, los fuertes grupos internacionales que habían invertido dinero en España y la organización industrial alemana —gestionada, recordemos, por personas que habían decidido respaldar y financiar el movimiento fascista de Hitler— estuvieran dispuestos a apoyar a cualquier grupo en España que les pareciera especialmente favorable a sus puntos de vista. Solo en Cataluña y los territorios vascos, algunos círculos industriales, más modernizados en cuanto a su organización y sus necesidades, reconocían las posibilidades del mercado nacional y respaldaban medidas sociales progresistas.

Los cinco años escasos de paz externa que se le concedieron a la Segunda República —de febrero *[sic]* de 1931 a julio de 1936— coincidieron con la preparación sistemática del fascismo más agresivo de Europa —el nacionalsocialismo alemán— para su posterior lucha por la supremacía. Las fuerzas progresistas en el sistema español de partidos se fueron agrupando en torno a un programa de reforma, más que de revolución; las fuerzas reaccionarias, sin embargo, competían por ocupar posiciones desde las que combatir aquello que veían como cambios

amenazadores en el reparto del poder social y económico; la masa del pueblo llano pasó sucesivamente por un ciclo de ingenua esperanza, amarga desilusión y violenta reacción, seguido de un reavivamiento de la esperanza y un estallido de energía; los inversores extranjeros (los no alemanes) apoyaban a los elementos conservadores moderados: «Los verdaderos españoles son leales de corazón a su Rey y su Fe; simplemente, están siendo engañados por una minoría de ruidosos agitadores rojos y ¡necesitan algo de mano firme!». Pero, entre tanto, los puestos de avanzada de la industria alemana y el excelente Servicio de Inteligencia germano, instalados ambos ya desde antes de la Gran Guerra, fueron convertidos en engranajes de la maquinaria nazi conocida por el nombre de Organización de los Alemanes en el Extranjero. La colonia germana en España, con mucho la mayor de todas las colonias extranjeras, pasó a ser también la mejor organizada por intervención de la rama exterior del Frente Alemán del Trabajo y por medio asimismo de las organizaciones deportivas, a las que los empleados de empresas alemanas tenían que afiliarse obligatoriamente si querían asegurarse un puesto de trabajo permanente y un buen regreso a su país.

Durante aquellos años, los agentes nacionalsocialistas en España también realizaron pruebas y cribas entre los grupos políticos de la derecha española y fortalecieron de paso su control sobre todos ellos, si bien, al final, terminaron seleccionando a la Falange como instrumento más adecuado para el golpe de Estado que se avecinaba.

Indudablemente, ni el nacionalsocialismo alemán ni el fascismo italiano podrían haber intervenido de forma tan directa y contundente en la Guerra Civil si los homólogos franceses, británicos y estadounidenses de los industriales alemanes con intereses en España no hubieran usado su influencia en sus propios Gobiernos nacionales respectivos con tanta facilidad y eficacia. Pero fueron las clases acomodadas y los grupos reaccionarios de la propia España los que les concedieron la oportunidad, y son esas clases y grupos los que, de momento, han instaurado su predominancia en España merced a su lealtad al fascismo extranjero. Es de ellas de las que debemos realizar un más pormenorizado examen si queremos analizar bien el presente y el futuro de España.

EL CAPITALISMO ESPAÑOL

Nos llamaríamos a engaño si habláramos del capitalismo español como si fuera equiparable a los de, por ejemplo, Gran Bretaña, Alemania o Francia. La industria española —la autóctona— dista mucho de haber alcanzado la escala y el grado de organización de las grandes empresas modernas. Los bancos españoles no son los típicos del «capital financiero», sino que sus actividades se limitan más bien a prestar y descontar dinero, con muy escasas y esporádicas incursiones en la capitalización industrial. En España, a las empresas nuevas les resulta más fácil despertar el interés del capital extranjero que el del español, lo que acarrea consecuencias como las ya señaladas aquí. El español acaudalado es, por norma, de todo menos aventurero en lo que a invertir su dinero respecta. Solo en el País Vasco y en Cataluña encontramos núcleos de capitalismo moderno. Las grandes fortunas españolas continúan siendo las de los grandes terratenientes, miembros de la nobleza la mayoría de ellos, aunque también hay algunas acumuladas por unos pocos especuladores audaces, como Juan March. El «hombre rico» del campo español suele ser un prestamista, no un industrial.

Pero, además de en fortunas de particulares, hay también una riqueza considerable en manos de diversas órdenes religiosas que, tras haber perdido en su día sus tierras por las leyes de secularización decretadas cien años atrás, asentaron sus nuevos cimientos económicos en una multitud de pequeñas inversiones. Los jesuitas controlan desde hace años algunos de los bancos más importantes a través de sus propios hombres de paja (el más famoso de los cuales es Ruiz Senén) y las grandes sumas que en ellos tienen depositadas; de idéntico modo han conseguido controlar algunos de los servicios públicos y algunas de las empresas industriales[3]. No obstante, de importancia equivalente a la de su participación en estas relativamente pocas compañías de gran escala es el control que tales comunidades religiosas ejercen sobre incontables empresas comerciales de menor nivel, dedicadas a labores que van desde la fabricación tradicional de dulces y caramelos hasta la de perfumes y jabones. Este tipo de actividad empresarial está muy alejada de los niveles del capitalismo industrial

moderno, pero representa una combinación muy notable de propiedad, activos e influencia en un país pobre, sin industria, donde predominan los pequeños talleres y empresarios.

Esta peculiar estructura del «capital» español ha tenido una serie de consecuencias sociales y políticas profundas. Inevitablemente, el progreso tecnológico y la formación técnica y general de los ingenieros y los trabajadores cualificados requerida por la industria moderna son solo reconocidos como necesarios por unos pocos industriales en Cataluña y el norte de España, y por algún que otro individuo a quien, por ello mismo, se le cuelga popularmente la etiqueta de excéntrico. Cataluña y el norte de España, o, para ser más precisos, Barcelona y Bilbao, son las dos únicas zonas del país en las que existe un liberalismo burgués, con grupos políticos favorables a una Administración, una educación y unas finanzas públicas modernas. En el resto del país, las clases acaudaladas derivan sus activos y sus privilegios —no siempre combinados, ni mucho menos, con una riqueza real— de las instituciones de la España «tradicional», preindustrial: la propiedad feudal de la tierra, la Iglesia y el Ejército.

LA CLASE TERRATENIENTE

La fortaleza económica y el poder social de los grandes terratenientes se basan en la conservación de sus latifundios y de las condiciones existentes para la mano de obra. La falta de desarrollo industrial del país les permite mantener su posición en la sociedad sin necesidad de perseverar en ninguna iniciativa dirigida a conseguir una explotación más intensiva de sus tierras. Esos terratenientes pudieron seguir siendo relativamente ricos y absolutamente influyentes sin necesidad de invertir sus rentas en sus haciendas, mientras los trabajadores del campo españoles aceptaban salarios de hambre y carecían de oportunidades e incentivos para convertirse en obreros industriales. Cuando el Gobierno republicano elaboró un proyecto de reforma agraria —un proyecto menguado y deficiente, amén de revelador de una notoria ausencia de conocimientos expertos, pero que, aun así, prometía créditos, maquinaria y planificación agrícolas muy necesarios desde hace tiempo, así como la emancipación de los pequeños propietarios,

arrendatarios, aparceros y peones del campo—, los terratenientes absentistas, grandes y medianos, junto con su séquito de agentes, administradores y caciques políticos locales, además de la burguesía provinciana de clase media que vive de las rentas de sus tierras arrendadas, sintieron amenazados los cimientos mismos de su existencia. Emplearon todo su peso e influencia, sus contactos con políticos y su decorativa presencia en consejos de administración varios para reforzar toda oposición política y económica posible a la reforma agraria, el seguro social, el movimiento cooperativista y la concesión de préstamos públicos a los pequeños cultivadores; también se valieron de sus considerables contactos sociales con la diplomacia internacional para desacreditar a la República y sus planes reformistas. Y usaron también al clero español.

Es lógico, porque la clase terrateniente compartía intereses comunes con la clerecía española, cuya aplastante influencia en el campo y en las ciudades de provincias tenía tan indefectible apoyo de los terratenientes como manifiesta era su vulnerabilidad al más mínimo crecimiento de la industria y de las modernas comunicaciones, dado el cambio de horizontes que trae consigo la vida de un obrero industrial.

La clase media española seguía —igualmente, por la estructura económica misma del país— la estela de la clase terrateniente y no la de la burguesía urbana. Esa clase media era económicamente pudiente solo en comparación con los artesanos y los obreros, pero, de todos modos, consideraba que también ella tenía que defender su posición en la sociedad. El sector de la clase media que terminó jugando un importante papel entre las fuerzas reaccionarias españolas fue el compuesto principalmente por los rentistas: personas que habían invertido su herencia o sus ganancias procedentes del comercio en tierras arrendadas a corto plazo a agricultores locatarios, y que criaban a sus hijos para que fueran unos *señoritos*, jóvenes caballeros con la vista puesta en una carrera política o militar. Hicieron especialmente manifiesto su malestar cuando los primeros Gobiernos progresistas de la República española comenzaron a minorar las filas de la oficialidad militar y a recortar el presupuesto del Ejército. Pero mezclaron sus eslóganes «antiizquierda» con otros de signo anticapitalista —no de

corte socialista, sino reaccionario o fascista— porque, para ellos, el desarrollo de una industria moderna era una amenaza a su vida de clanes familiares, su influencia social y sus anticuadas formas de hacer negocios.

Así pues, la clase alta española y buena parte de la clase media eran terreno abonado para movimientos que supieran mezclar lemas antisocialistas (o anticomunistas) y anticapitalistas (o antiliberales). Los elementos más activos surgidos de esas clases se encontraban —y continúan encontrándose— en las filas del Ejército y la Iglesia españoles, un hecho que, en sí mismo, solo puede explicarse por el crecimiento retrasado y atrofiado del capitalismo en España.

El Ejército

La tradición en España dicta que los oficiales sean gente mal pagada que tiene que buscarse una compensación adicional. Esto explica lo extendida que estuvo la corrupción en las guerras coloniales españolas y en la de Marruecos; también explica por qué fueron tantos los oficiales españoles que recurrieron a una forma específica de fascismo militar —el de las juntas conspiratorias— cuando, a la conclusión de la campaña marroquí, vieron bloqueadas las vías de salida a su ambición, y también cuando la Constitución republicana, que proclamaba el fin de los negocios paralelos para los militares, amenazaba con convertirse en una realidad permanente. Antes de topar con tales limitaciones, el Ejército había ofrecido unas apetecibles perspectivas profesionales para los hijos de familias españolas de clase media, aun a pesar de la magra paga, gracias a la posición que confería y a los útiles contactos —sociales y comerciales—[4] que prometía. Pero durante los años veinte y treinta, entre el enorme cuadro de oficiales ociosos del Ejército (en algunos desfiles, era fácil observar una relación de un oficial por cada diez hombres de la tropa de reclutas), se contaban no pocos descontentos, temerosos de ser transferidos a la reserva en cualquier momento, y convencidos de que se les estaban escamoteando privilegios legítimos, simplemente porque ya no podían ejercer lo que

consideraban que era la función que debidamente les correspondía en el Estado: no como servidores responsables de este, sino como sus irresponsables capitanes.

En el Ejército español o, para ser más precisos, en la casta de los oficiales, la presencia de una serie de ideas a medio desarrollar sobre la ciencia militar prusiana, condimentadas con una pizca de tradiciones de [la escuela militar francesa de] Saint-Cyr, era suficientemente fuerte como para que sus miembros fueran muy receptivos al militarismo de prosapia nazi, que consideraban un aliado natural. Veían el objetivo característico de este fácilmente al alcance, a saber: un golpe de Estado o, por decirlo con su terminología tradicional, un *pronunciamiento* seguido de la instauración de una dictadura castrense como preludio del renacimiento de una «España imperial fuerte».

La Iglesia

El caso del clero español es más complejo. La Iglesia católica española tiene rasgos característicos propios que pueden antojárseles increíbles e ininteligibles a católicos de países donde son minoría (como es el caso británico), o donde la separación entre Iglesia y Estado es un hecho consumado (como en Estados Unidos o en Francia).

Como la Iglesia española había actuado durante muchos años (generaciones, en realidad) como sostén, agente y, en ocasiones, promotora de movimientos antidemocráticos —y como estaba interconectada, tanto en cuanto a su personal como en cuanto a sus intereses, con la clase terrateniente, el sector reaccionario de la clase media y el Ejército—, los nuevos movimientos obreros surgidos en España se desarrollaron en un ambiente de conflicto enconado con la Iglesia. Para los peones agrícolas, el párroco parecía convertirse casi automáticamente en guardián de los intereses del terrateniente absentista y en aliado del cacique político y del prestamista locales. Aunque muchos de los curas y miembros de las órdenes religiosas eran de origen campesino, o eran incluso hijos de agricultores pobres con familias numerosas, su progresión y sus apoyos dependían de las clases alta y media.

Los políticos asociados al clero español no habían realizado ningún esfuerzo visible por salvar la acabada monarquía en 1931, y no cometieron el error de formar una alianza abierta con el bando perdedor en aquel momento. Pero cuando la nueva República trató de impulsar la separación oficial entre Estado e Iglesia y de abordar el casi insalvable problema de hallar profesores que no pertenecieran al personal de las órdenes religiosas, la Iglesia española movilizó sus recursos sociales y psicológicos y recurrió a su red económica. El clero era (y se declaraba) anticapitalista, pues entendía que el capitalismo moderno disgregaba los viejos monopolios y privilegios, y creaba una clase obrera independiente; pero, al mismo tiempo, la clerecía estaba dispuesta también a ir de la mano de los capitalistas, españoles o extranjeros, que prometían establecer barreras efectivas frente a los movimientos socialista, sindical y cooperativista. Y desde el principio mismo, el clero español estuvo aliado con la clase terrateniente y con la casta militar.

En los años inmediatamente previos [a la Guerra Civil], en ningún otro sitio había mandado la Iglesia española fuera del aislado mundo rural con tan absoluto poder como en el Ejército, donde la mayoría de oficiales estaban totalmente de acuerdo con la persecución (ilegal antes incluso de la llegada de la República) de cualquier soldado que se negara a cumplir con las obligaciones religiosas. No era infrecuente que el Ejército se ocupara de los casos de emancipación religiosa (ya fuera de protestantes, ya fuera de librepensadores) instruyéndolos en Consejo de Guerra, y que los recalcitrantes tuvieran que cumplir penas de prisión. Cuando esas sólidas bases del clero en el campo y en el Ejército se vieron amenazadas por los principios y la praxis de la República en aquellos periodos en que los partidos liberales y de izquierda tuvieron la mayoría, surgió una situación en la que la parte reaccionaria de la clerecía (que, en la práctica, era la inmensa mayoría del alto clero), de la casta de los oficiales y de los dueños de propiedades descubrieron su coincidencia de intereses: se fundieron así en un solo movimiento reaccionario que abarcaba toda una serie de corrientes internas e intereses grupales.

LA REACCIÓN POLÍTICA Y EL FASCISMO

En general, los intereses comunes de esos grupos reaccionarios se definían en negativo. Tres fueron, sin embargo, los movimientos políticos diferentes que, coexistentes durante un tiempo, trataron de dotar a las fuerzas antidemocráticas de un programa en positivo: los monárquicos, los movimientos católico-conservadores autoritarios de Gil Robles y el fascismo propiamente dicho encarnado en la Falange (el partido) y el sindicalismo nacional (la teoría social).

Los monárquicos

Originalmente, los monárquicos españoles estaban divididos en dos facciones rivales: los carlistas o «tradicionalistas», con sus milicias de requetés, y los «monárquicos» a secas. Posteriormente, tras la Guerra Civil, ambas facciones alcanzarían un acuerdo en favor del pretendiente don Juan, hijo de Alfonso XIII.

Los tradicionalistas tenían fuertes raíces en un feudalismo romántico, semipatriarcal, del que quedaban aún vestigios genuinos en algunas de las regiones nororientales. Sus abuelos y padres se habían opuesto a la monarquía «limitada», más o menos constitucional, y al (mal llamado) liberalismo del siglo pasado apelando a Dios, la Patria y el Rey, con este en último lugar. Su monarquismo había devenido en una actitud tradicionalista que abarcaba muchas cosas, como la desconfianza de las provincias hacia la capital, la del campo hacia la ciudad, la de la sociedad agraria hacia la fabril o la de las comunidades rurales aisladas hacia la burocracia central; pero, comoquiera que fuera, contaba con cierto grado de apoyo popular en las provincias norteñas. Disponía, además, del respaldo fanático del clero local.

El segundo grupo de monárquicos, los alfonsinos, estaban más estrechamente ligados a la clase alta, la casta militar y el funcionariado[5]. Los partidarios de Alfonso XIII y su linaje eran, en líneas generales, menos intolerantes en asuntos políticos y religiosos que los carlistas. Estaban dispuestos a aceptar una monarquía constitucional, porque eran conscientes de que, en su país, incluso una monarquía de tipo «inglés» no podía tener

otra base que no fueran las clases acaudaladas y el Ejército, para evitar cambios sociales fundamentales, y de que la posición de la Iglesia en el país proporcionaría las necesarias salvaguardas frente a los «peligros» democráticos. Los alfonsinos participaron en los preparativos de la Guerra Civil; eran mayoría en el estado mayor de las fuerzas conjuradas contra la República democrática y, posteriormente, en el cuerpo diplomático de la España autoritaria, pero no estaban en las filas de los grupos fascistas de choque. Esto los convirtió en útiles intermediarios en fases posteriores. Los contactos de los nazis con ambos grupos monárquicos eran escasos; su cerrada ideología los hacía casi impermeables al aura nazi, y sus ideas sociales eran demasiado problemáticas para el fascismo español en un momento en que este pretendía atraer a una masa de seguidores vistiéndose con el manto de la demagogia social.

El conservadurismo reaccionario

El movimiento político fundado por Gil Robles —astuto político conservador y representante de las posiciones clericales que supo capear el temporal de la Guerra Civil y la actual contienda mundial refugiándose en Portugal— explotó el concepto del Estado corporativo católico que Dollfuss y Schuschnigg habían intentado poner en práctica en Austria tras la destrucción de la democracia y el obrerismo austriacos en 1934. A raíz de las primeras iniciativas de reforma agraria, laicización del Estado, racionalización del presupuesto militar e institucionalización de una seguridad social para los trabajadores impulsadas por la República española, Gil Robles, con la poderosa ayuda de los jesuitas, organizó un cartel de partidos católicos de derecha. Su programa no era abiertamente totalitario, sino meramente «autoritario». Prometía restaurar los derechos de la Iglesia y «la ley y el orden»; atraía las simpatías activas de la burguesía española de provincias y de la banca. Su idea no era conquistar el poder mediante un golpe de Estado, sino hacerlo por medio de una victoria electoral que se conseguiría gracias a la presión a nivel nacional del clero y de los terratenientes.

Fue contra la amenazadora instauración de ese camuflado fascismo de Gil Robles contra la que se alzaron los mineros asturianos en octubre de 1934. La feroz represión de aquel levantamiento, llevada a cabo con la colaboración del «Tercio» (la Legión), fue seguida del «Bienio Negro» de hegemonía derechista; pero no se juzgó oportuno conceder a Gil Robles el cargo de presidente del Gobierno todavía, para no provocar más aún a las fuerzas progresistas del país. Gil Robles y su grupo, la CEDA, nunca lograron la mayoría absoluta en unas elecciones. En los comicios de febrero de 1936, su lema indisimuladamente fascista de «¡Todo el poder para el Jefe!» no surtió efecto y sus socios, encabezados por Calvo Sotelo, entraron en cautelosas conversaciones con la conspiración militar antirrepublicana que, para entonces, ya estaba plenamente en marcha.

Cuando, tras el estallido de la rebelión, Franco fue elevado al rango de dictador militar y optó por convertir la Falange en su aparato político personal conforme a los deseos de sus asesores extranjeros, Gil Robles quedó desamparado. Prefirió permanecer en Portugal en lugar de luchar por el liderazgo del «Alzamiento Nacional», y mantener desde allí la actitud de un buen antirrepublicano, profranquista, profascista, pero no beligerante. Los fascistas españoles jamás cesaron de atacarlo por la tibieza de su modo de obrar, y por su oportunismo, que tanto protagonismo le había dado en el juego político en tiempos de la «degenerada» República.

El fracaso de Gil Robles encerraría una bendición inesperada para él: el hecho de que su movimiento hubiera sido rechazado por los alemanes, que lo consideraron un arma demasiado roma para sus fines, significó que su programa se quedara guardado en un cajón sin haber tenido que pasar la dura prueba de su viabilidad en la práctica. Ha significado también que su maquinaria política no se haya desgastado ni se haya visto comprometida por su uso y abuso durante los años del régimen de Franco. También significa que las mismas fuerzas reaccionarias de las que había surgido su organización política bien podrían apoyarse en aquella llegado el momento, puede que incluso con el respaldo de viejos amigos de Gil Robles en el alto clero internacional y en los mercados bursátiles mundiales. ¿Acaso no había sido su lema «Religión, familia, orden y propiedad»?

La Falange

El 13 de febrero de 1934, dos grupúsculos fascistas, llamado uno Falange y el otro JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista), se fusionaron bajo el liderazgo de José [Antonio] Primo de Rivera, hijo del ya difunto dictador español del mismo apellido. La nueva organización pasó a denominarse Falange Española de las JONS; la mayoría de sus miembros pertenecían a la juventud acomodada; sus líderes se inspiraban a partes iguales en el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, pero imprimieron a su forma de fascismo un sello agresivamente español. «El Estado nacional-sindicalista, corporativo y totalitario, es de tipo español. Es una creación española», escribió José Antonio Primo de Rivera en un famoso pasaje, en el que también proclamó que los orígenes de la Falange se remontaban a los principios de Mussolini y que había descubierto que «en la doctrina nacionalsocialista vibra[ba]n» su doctrina y su fe.

José Antonio, pues así (por su solo nombre de pila) pasó a ser llamado, fue rápidamente proclamado jefe nacional de la Falange. Uno de sus primeros actos fue presentar el uniforme de la camisa azul. Su programa anunciaba la creación de un «Estado nuevo», un Estado fuerte y unido que reconquistaría para España la posición en el mundo que le había arrebatado el «liberalismo», que eliminaría las luchas de clase y que conduciría al país hacia un reino de justicia social universal.

La Falange entró en conflicto, desde sus inicios mismos, con la derecha moderada y con la izquierda. A los partidos de derecha, incluidos los monárquicos y el de Gil Robles, les desagradaba la campaña de José Antonio contra los intereses políticos establecidos y su defensa de una reforma agraria, así como su radicalismo social que tan de cerca seguía el modelo del nacionalsocialismo antes del ascenso de este al poder. La izquierda se vio de pronto criticada por su debilidad por aquellos jóvenes que profesaban una fe ferviente y radical en una Revolución Nacional, y aquellas profesiones de fe radical de la Falange fueron pronto seguidas de peleas callejeras en las que aquellos *señoritos*, acompañados de pistoleros, se batían contra trabajadores afiliados a organizaciones comunistas, socialistas o anarquistas. Sin embargo, el desagrado que aquellos novedosos

métodos inspiraban entre los conservadores convencionales no era óbice para que los maestros y profesores católicos trataran a los estudiantes falangistas díscolos con particular ternura y comprensión. La Falange se había convertido ya al término de 1935 en un movimiento fascista hecho y derecho, con grupos de choque —milicias— y un programa de renacimiento nacional erigido sobre la derrota de la democracia «roja».

La Falange revestía ciertos tintes católicos ausentes en el fascismo italiano y en el nacionalsocialismo germano; su teoría nacional-sindicalista estaba fuertemente influida por los ideales católicos del Estado corporativo. No obstante, los líderes falangistas habían recibido formación política en Alemania, y los nazis —en no menor medida que los fascistas— aceptaban el hecho de que la modalidad española del fascismo poseía sus propios ingredientes religiosos, una realidad que también presentaba la ventaja de granjearle la poderosa amistad del clero español. Y es que, para aquel entonces, la oleada de agitación social que había seguido al despertar de nuevas esperanzas y nuevas fuerzas propiciado por la República había hecho que pareciera ya aconsejable, a ojos de los más clarividentes líderes de la reacción, incorporar un movimiento fascista a su arsenal político, dado que los grupos parlamentarios del estilo del de Gil Robles estaban claramente perdiendo la carrera. En 1936, el nazismo, el fascismo italiano y el ala más combatiente del clero español tenían más o menos igual derecho a reclamarse los grandes valedores y asesores de la Falange.

El propio jefe nacional de la Falange se preparaba ya para la guerra. En noviembre de 1935, José Antonio Primo de Rivera dijo:

> La próxima lucha, que acaso sea más dramática que las luchas electorales, no se planteará alrededor de los valores caducos de derecha e izquierda; se planteará entre el frente asiático, torvo, amenazador, de la resolución rusa en su traducción española, y el Frente Nacional de la generación de nuestra línea de combate.

Vemos ahí la agitación del fantasma bolchevique, plenamente desarrollado y expuesto por un movimiento fascista genuinamente español, aunque en estrechísimo contacto con sus homólogos alemán e italiano. Cuando la lucha electoral estuvo ya perdida, fue la «otra lucha» la que se decidió librar. Los jóvenes abogados de la Falange, sus propagandistas y sus

tropas de asalto reclamaron para sí el liderazgo de la futura Revolución Nacional, en competencia con los generales conspiradores bajo el mando de Sanjurjo y Franco. Pero cuando, el 17 de julio de 1936, estalló el alzamiento para el que tantos grupos e intereses divergentes habían conspirado, la Falange se transformó en una organización de terror político y policial en la retaguardia. José Antonio estaba ya en prisión cuando comenzó la rebelión, pero su equipo de dirigentes llevó a cabo su propia purga antidemocrática con tal esmero, con tal entusiasmo y crueldad, que la utilidad de la Falange se le hizo muy claramente visible al hombre que había pasado a ser jefe militar indiscutido y principal figura política (aunque mucho más controvertida como tal) de la zona rebelde: Francisco Franco.

FRANCO Y LOS FALANGISTAS

Los tradicionalistas se vieron así relegados a estar en primera línea del frente o a situarse en una secundaria línea de la retaguardia, pero sus líderes no estaban en absoluto dispuestos a encajar sin más semejante afrenta a su añejo movimiento. Franco empezó a tener problemas para tratar con ciertos generales tradicionalistas que presionaban para que la línea política de los sublevados fuera contraria a la sugerida —o, mejor dicho, exigida— por los enviados de Alemania e Italia. (Para entonces, el «Alzamiento Nacional» se había enmarañado ya en una red de obligaciones para con las potencias que lo abastecían de armas y personal experto de forma tan generosa como discreta y no precisamente desinteresada). En abril de 1937, medio año después de la ejecución de José Antonio por los republicanos, Franco decretó la fusión de los tradicionalistas y de la Falange en un único partido totalitario que, a partir de ese momento, pasaría a tener la farragosa denominación de Falange Española Tradicionalista y de las JONS: un nombre condenado a ser meramente simbólico, pues pronto su única parte de uso común sería la de «Falange», a excepción de contadas ocasiones oficiales solemnes.

Aquella medida de Franco, sin embargo, tuvo importantes consecuencias. Ató las ansias de los importunos tradicionalistas. Elevó a la Falange desde la condición de una fuerza de choque en manos de un grupo de jóvenes a la dignidad de un partido dotado de un monopolio político, inevitablemente atractivo para cualquiera que buscase protección o promoción. Proporcionó al propio Franco el aparato político del que carecía y que, conforme a la teoría y la praxis fascistas, podría superponer a la administración civil, primero, de la zona que tenía bajo su control y, más tarde, del conjunto del país conquistado. También le facilitaba un programa y una maquinaria propagandística ya hechos que, por su naturaleza misma, podría usar para atraer y absorber a los diversos grupos sociales y fuerzas políticas enfrentadas dentro del «Movimiento Nacional». Y, además, lo convirtió en un *Führer*.

Los estatutos de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS decían a propósito de su jefe, Franco, que

> […] el Jefe Nacional de Falange [...], Supremo Caudillo del movimiento, personifica todos los Valores y todos los Honores del mismo. Como autor de la Era Histórica donde España adquiere las posibilidades de realizar su destino, y con él los anhelos del Movimiento, el Jefe asume en su entera plenitud la más absoluta autoridad. *El Jefe responde ante Dios y ante la Historia*.

En el programa de veintiséis puntos de la reorganizada Falange, se decía que el nuevo Estado «abolirá implacablemente el sistema de partidos políticos con todas sus consecuencias, como el sufragio inorgánico».

Se prometía apoyo a la iniciativa privada y se manifestaba la enemistad falangista tanto con «el sistema capitalista» como con el «marxismo». Se anunciaba asimismo que se protegería la iniciativa privada «contra los abusos del gran capital», que todos los varones recibirían instrucción premilitar y que «el sentido católico, de gloriosa tradición», formaría parte intrínseca de la reconstrucción nacional. Pero, si bien se apoyaba allí que la Iglesia y el Estado alcanzaran una concordia desde sus terrenos respectivos, se anunciaba también que no se admitiría intromisión alguna que dañase la dignidad del segundo.

Ese, pues, fue el programa de compromisos del fascismo español, programa en el que el régimen nacional de Franco se ha fundamentado en los seis años transcurridos desde el fin de la Guerra Civil. En este partido totalitario —que lo es todo para todos los hombres que en él sirven—, se subsumen todos los grupos sociales y las corrientes políticas antes mencionadas. Pero eso no quiere decir que estas hayan desaparecido.

Cuando ya no resultó aconsejable seguir mostrando una conformidad absoluta con los elementos nazi-fascistas de la Falange, los viejos conflictos, los viejos intereses sociales y políticos, salieron de nuevo a relucir entre las grietas de la fina corteza de la unificación totalitaria. Ahora mismo están muy vivos, aguardando al momento propicio.

LOS FRUTOS MUERTOS DE LA VICTORIA

Los vencedores de la Guerra Civil compartieron botín, pero también compartieron decepciones al término del conflicto.

El Ejército estaba inflado, las academias militares habían adquirido una importancia insospechada, se había depositado un enorme poder en los capitanes generales y los gobernadores militares de las regiones y las provincias, y el nuevo Estado hacía todo lo que podía por evidenciar su intención de fortalecer su potencial bélico. Se procedió a ampliar la Armada. Surgió un nuevo Ejército del Aire, dotado de técnicos y material alemanes de excelente nivel. Los reclutas estaban mal vestidos y hambrientos, pero eran obligados mediante intimidación a incorporarse a la tropa. Sin embargo, la educación premilitar estaba en manos de mandos falangistas; los milicianos falangistas exigían un trato especial, y eran los lemas de la Falange —y no los del Ejército— los que prevalecían. Los altos oficiales comenzaron a trasladar al Generalísimo Franco patentes muestras de que aquello no les gustaba (ni a ellos ni a sus homólogos). No les producía agrado alguno la posición de control que ocupaban los asesores alemanes. Sí, es verdad que estos militares de alto rango eran ahora miembros de la Falange, pero no eran falangistas, y los héroes de la «quinta columna» de la Guerra Civil se lo recordaban a cada paso. Cuando los amigos alemanes de la Falange comenzaron a tener problemas, el Estado

Mayor del Ejército continuó creyendo en la victoria germana final contra los «bolcheviques» y los herejes británicos, pero, en el fondo, muchos de los oficiales de toda la vida habrían agradecido la oportunidad de bajarles los humos a los arrogantes «camisas viejas» de la Falange, incluso aunque dicha oportunidad hubiera venido de la mano de un ignominioso hundimiento de la (en su día) admirada Wehrmacht.

La Iglesia española vio restituidos sus antiguos privilegios seculares. Se eliminaron aquellos obstáculos legales que, desde el siglo XIX, se interponían en el camino de las órdenes religiosas. Volvió a encomendársele al clero la educación moral de los jóvenes, así como la censura oficiosa de los libros, especialmente de los de texto. Todas las agrupaciones de Falange, de su Frente de Juventudes y de su Sección Femenina contaban con sus consejeros espirituales. Y aun así, la Iglesia, que reclamaba la autoridad absoluta en asuntos de moral, competía con las organizaciones de propaganda falangistas. El fascismo, aun en su variante española, no deja de ser fascismo; el servicio a la Gran y Nueva España tenía que ser superior a todo lo demás, y el catolicismo bien podía encajar en él. Pero la primera condición requerida para el éxito de esa misión era ser falangista; ir a misa quedaba en segundo lugar. Había elementos en la propaganda de la Falange que recordaban demasiado al radicalismo social. Tanto los sectores más conservadores del clero como los más esclarecidos veían los riesgos y peligros del sistema del partido totalitario. Las bendiciones papales del régimen comenzaron a adquirir un tono más admonitorio, al tiempo que la clerecía española empezaba a mostrar síntomas de inquietud.

También los mostraba el «gran» capital (grande para lo acostumbrado en España). El Nuevo Estado contaba con un enorme aparato burocrático que no salía nada económico. Los grupos, gremios, centros, juntas, etc., del «nacional-sindicalismo» eran costosos e imponderables. Decenas de miles de buenos trabajadores y artesanos habían desaparecido de las fábricas y los talleres; muchos miles de ellos estaban ahora en los batallones de trabajos forzados, construyendo casas y carreteras subvencionadas por el Estado. Pero aquello no era negocio. Las nuevas leyes otorgaban al Estado y al Ejército un control estrecho sobre las industrias y las materias primas, en especial los minerales, que eran considerados de «importancia nacional».

Eran los expertos del Estado Mayor quienes decidían qué hacer con los nuevos yacimientos mineros. Los contratos de suministros a Alemania tenían un carácter político y militar, no comercial. El régimen totalitario aportaba unos beneficios por cuanto mantenía a raya al «bolchevismo» y a la «anarquía», pero era también una máquina engorrosa y contraproducente; y la Falange era un estorbo.

Los monárquicos y los conservadores no tardaron en encontrarse profundamente incómodos. Habían ayudado a poner una organización monopolista fascista al frente, y se les había obligado a pagar sus servicios y aceptar sus favores. Su peso en la propia Falange podría haber puesto freno a los jóvenes advenedizos «radicales» de la organización. Pero la influencia alemana cargó todo su peso a favor del poder de los falangistas propiamente dichos. A la Alemania nazi en guerra de poco le servían los intereses feudales o las personas que no estuvieran dispuestas a obedecer la disciplina del partido. Los periodistas, escritores y oradores falangistas arremetían contra los carlistas, la aristocracia, los monárquicos conciliadores y los conservadores moderados. Franco era encumbrado como Jefe de la Falange, ligado y vinculado a esta; como tal, estaba obligado a mantener la ficción de la unidad y, ante cualquier crisis, impedir una escisión entre los diversos grupos de interés. Aquello lo volvió absolutamente dependiente de los elementos más agresivos, los falangistas beligerantes. Aquella pretendida unidad artificial comenzaba a resultar irritante para los monárquicos y los conservadores. El Partido del Estado tenía muy poco de «tradicionalista», más allá del nombre.

LOS RESULTADOS ECONÓMICOS

De entrada, se apreció una lenta mejoría de las condiciones económicas, como no podía ser de otro modo en uno de los pocos países que se habían quedado al margen de la guerra mundial; un país, además, que, gracias a extenderse por toda la península, actuaba como cámara de compensación y como vía de tránsito entre América y el continente europeo ocupado por los alemanes. Pero, aunque comenzaban a escasear menos los productos básicos gracias a que se estaba volviendo a labrar la tierra, los

salarios y los jornales continuaban siendo bajos; el coste de la vida subía (y sigue subiendo); había disponibilidad de bienes de lujo, pero sus precios resultaban prohibitivos para todo el mundo, salvo unos pocos privilegiados y los extranjeros; el mercado de consumo interior fuera de las grandes ciudades y más allá de los círculos de los dirigentes falangistas y los estraperlistas padecía una escasez crónica de dinero; esa falta de efectivo castigaba especialmente a la clase media, que nunca recuperó su situación de la preguerra; además de la demoledora carga financiera que un Ejército y una Policía inflados significaban para el país, también la voluminosa y pesada maquinaria del Partido extraía dinero en forma de incontables y complejos tributos, tasas y «aportaciones voluntarias», que conformaban un sistema fiscal arbitrario, irregular e incalculable. Cuando, tras cinco años de Paz de Franco, la vida seguía siendo insegura y continuaba estando plagada de los escollos causados por un control autoritario tan torpe como codicioso, la clase media comenzó a intranquilizarse.

El pueblo trabajador se mantenía todavía distanciado del régimen, refractario a sus promesas, su espíritu debilitado por tantas, demasiadas, amenazas. Uno tras otro, los líderes falangistas predicaban la necesidad de ganarse el favor de «las clases laboriosas, hoy descarriadas por el marxismo», que tanto habían sufrido a manos del «capitalismo desbocado» y que hallarían la plena medida de la justicia social únicamente cuando se hubiera llevado a cabo la «Revolución Nacional-Sindicalista completa» en la España de Franco. Se quejaban de la incomprensión del gran público, que subestimaba las dificultades de la reconstrucción. Denunciaban las esperanzas de aquellos «malos españoles» que creían que una victoria de los Aliados les devolvería su corrompida República.

En realidad, los falangistas nunca han dejado de luchar contra las «ilusiones» del sinfín de españoles que estaban convencidos de que una derrota de los nazis —que habían supervisado y aprovechado la Guerra Civil, que estaban ahora incrustados en el Estado fascista y en la vida económica, que recibían los mejores contratos aprobados por el Consejo de Ministros, y que habían construido las emisoras de radio de los falangistas — significaría la derrota de la Falange y del propio Franco.

Tras más de cinco años de esta «nueva España», esa creencia del pueblo llano español es compartida por la mayor parte del resto del mundo. Los españoles republicanos hoy derrotados tuvieron en su momento poder suficiente como para conseguir que la España falangista no fuera un activo en manos de Alemania, sino un lastre para esta; de hecho, las autoridades fascistas consideraron necesario mantener el país fuera de la guerra porque, de haber entrado en ella, solo un ejército de ocupación habría podido garantizar el control total del territorio. Pues bien, esos españoles republicanos estaban (y siguen estando) presentes en España, en sus prisiones, en sus fábricas, en sus talleres y en sus campos, aun cuando hayan sido expulsados del mundo educativo y administrativo. Y sus viejos enemigos continúan sin poder permitirse el lujo de ignorarlos.

Esa es la razón por la que todos los que habían ayudado a derrotar a la República, pero no estaban a gusto con el papel que el régimen totalitario les había asignado, están ahora intentando prevenir el desmoronamiento de todo aquello que ellos mismos habían defendido. Pero también ellos saben que el régimen de Franco y de la Falange está condenado al fracaso; ha dejado de resultar de utilidad para ellos; tiene demasiados lazos nocivos con otras dictaduras que también están condenadas a fenecer. Estas fuerzas sociales y políticas reaccionarias que tuvieron un gran protagonismo en el desarrollo de la Guerra Civil y del Estado falangista quieren ahora hacerse con ese Estado —cuando hayan desaparecido tanto Franco como la Falange — del modo que les vaya a procurar el mayor apoyo posible en el extranjero, entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial.

Dado que España ha sido ya punto de encuentro del fascismo internacional, dado que ha servido de yesca para conflagraciones en lugares alejados de sus fronteras, dado que es la nación que tiene los lazos más estrechos con América Latina y dado que es la que dispone del aparato económico más accesible para los intereses de los nazis alemanes, cuál vaya a ser el régimen posfranquista en España es una cuestión que tiene una importancia internacional de primer orden, y todos los españoles lo saben.

¿Lo saben también todos los no españoles?

LA VERDAD SOBRE LA «NO INTERVENCIÓN»

Hay ciertos hechos y aspectos de la historia reciente de España que han pasado de pronto a ser aceptados por la opinión mundial tras años de tendenciosa negación. Uno de ellos es la verdad acerca de la «no intervención» en su más cruda desnudez: ¿quién se atrevería ahora a negar el masivo suministro de combatientes y tanques italianos, o de material de guerra y exportaciones alemanes, del que Franco fue destinatario al tiempo que la prensa británica, francesa y norteamericana elogiaba el éxito de las iniciativas diplomáticas concertadas para conjurar la posibilidad de una guerra europea? En los recientes juicios celebrados en Roma, el general Roatta se refirió con total cinismo a sus hazañas (suyas y de sus colegas) en España; no son pocos los expertos militares de todos los países que aluden de pasada a los experimentos de prueba que los aviadores alemanes llevaron a cabo en España. Hoy resulta ya hasta redundante mostrar, por enésima vez, que la Alemania nazi y la Italia fascista intervinieron a sus anchas en la guerra española[6], y que los españoles fueron los desafortunados conejillos de indias de aquellos experimentos con la guerra total cuando esta se encontraba aún en su infancia evolutiva como método.

También se ha vuelto superfluo demostrar que la maquinaria administrativa del Estado instaurado por Franco estaba penetrada de agentes alemanes y tachonada de espías de ese mismo país: este hecho, anteriormente tildado a menudo de maliciosa propaganda «roja», ha sido confirmado más allá de toda duda por el vizconde de Templewood, *sir* Samuel Hoare.

Ya no es necesario discutir con los defensores de Franco en Gran Bretaña sobre la destrucción de Guernica, que ellos atribuían a los «rojos». No olvidemos que, al mismo tiempo que la España de Franco se ofrecía como mediadora para evitar los bombardeos aliados de Alemania, la prensa y la radio falangistas se dedicaban a comparar desfavorablemente el carácter «indiscriminado» de estos últimos con la supuesta justificación estratégica de las bombas lanzadas por los aviadores «nacionales» sobre el importante nudo de comunicaciones de Guernica durante la Guerra Civil.

También resulta ya innecesario citar la reveladora serie de discursos del general Franco en el transcurso de la presente contienda: su identificación con las naciones «jóvenes» en su guerra contra las «plutocracias», sus esperanzas de instaurar un nuevo Imperio español tras la caída de Francia, su declaración solemne de que los Aliados habían perdido su guerra, su ofrecimiento para actuar como árbitro de una paz negociada como preludio de una Guerra Santa contra el bolchevismo, su ofrecimiento también de un «ejército de cruzados» que acudiera en defensa de Berlín si se diera la necesidad, sus exabruptos contra el degenerado liberalismo, su intercesión por las ciudades alemanas bombardeadas, su repliegue desde la «no beligerancia» hacia la neutralidad, su énfasis en la independencia española absoluta con respecto a las ideas foráneas, su descubrimiento y revelación del presunto carácter democristiano de su régimen, su petición de contar con un asiento en el Consejo de Paz en pago por su irreprochable neutralidad.

Hasta —*casi*— parece que esté de más demostrar de nuevo que el actual régimen español fue instituido mediante la agresión y está siendo mantenido a través de la opresión; que es totalitario y autoritario; que lo único que modera al fascismo en España es la confusión, los conflictos y la ineficiencia internos, pero que la esencia de la teoría y la praxis políticas del régimen es fascista; que ha arrebatado a Cataluña y al País Vasco la autonomía regional y la responsabilidad local que la República inteligentemente les había concedido, y que ha reprimido la lengua y la cultura catalanas (ni las canciones tradicionales se han librado); que su justicia es una farsa cruel, más atroz si cabe porque se reclama cristiana. Son muchísimos los viajeros y antiguos presos procedentes de esa España —personas que están más allá de toda sospecha de tendenciosidad porque ya han expresado en algún momento sus simpatías monárquicas, clericales o simplemente antirrepublicanas— que han dado fe de lo difundidos que están allí la corrupción y el estraperlo sobre un trasfondo de gris miseria, o del lamentable estado de las prisiones y los presos en España[7], o de la infame alianza entre el clero español y los carceleros-torturadores. La ausencia de la más esencial libertad —la libertad de conciencia, la libertad

de culto, la libertad de reunión y la libertad de expresión— es algo que ya nadie niega salvo los más asiduos y profesionales apologistas del régimen de Franco.

El totalitarismo de la Falange se encamina con rapidez hacia la «inviabilidad». La cuestión, ahora, no es tanto la de «si» tendrá que desaparecer de escena en algún momento como la de «cuándo» y «cómo».

Y después de Franco, ¿qué será de España?

Hay una línea de pensamiento que es la de quienes consideran que el mundo exterior debería centrar todos sus esfuerzos en procurar que el cambio se produzca con las mínimas alteraciones interiores y, preferiblemente, por renuncia voluntaria del propio Franco. Este debería sentir la presión de las grandes potencias —que podrían agitar la amenaza de que, de no abandonar él el poder, España se vería abocada a un aislamiento completo, pero también podrían ofrecer la tentadora promesa de apoyo financiero y comercial para un régimen moderado y contrario al Eje — y del Ejército, el clero y la clase alta y media de la propia España. La amenaza permanente del llamado segundo turno de represalias, es decir, de que se desaten terribles venganzas por las terribles represalias antirrepublicanas, sería jugada entonces como una baza con la que defender la idea de que solo un cambio pacífico de la guardia —por usar una muy sugerente terminología mussoliniana— salvaría a España de otra Guerra Civil y de un nuevo giro a la izquierda. Según este punto de vista, la maquinaria alemana nazi presente dentro de España sería desplazada así por una nueva Administración no falangista y volverían a sentarse las bases para unas nuevas relaciones comerciales sólidas, manteniendo a salvo al mismo tiempo a la España «real», la tradicional, de los embates del modernismo y el colectivismo. Una amnistía y una disolución generales de la Falange y los falangistas permitirían que hubiera ese mínimo de «libertad» y «progreso» sin el que España no sería admitida en el concierto de las naciones libres.

Ya hemos intentado describir y analizar aquí en detalle tanto el origen de la influencia alemana nazi como la estructura de los movimientos conservadores españoles precisamente porque existe el peligro de que se perpetúen a partir de un cambio superficial de etiquetas y figuras políticas en España (como el acaecido con la promulgación del Fuero de los Españoles y la remodelación del Consejo de Ministros en julio de 1945). Esto representaría una amenaza para un mundo pretendidamente democrático y un desastre sin paliativos para los españoles.

Ya es un tópico decir que hay que erradicar el peligro de un renacimiento del militarismo o del fascismo agresivos en Alemania, no solo mediante la destrucción de la maquinaria nazi, sino destruyendo también los grupos sociales de los que esta derivó su poder: la casta militar (o «el estado mayor», según la simplista manera de llamarla que ha hecho fortuna), los terratenientes (los popularmente conocidos como *Junkers)* y la industria de armamentos. No corresponde al presente análisis examinar hasta qué punto puede cumplirse ese objetivo sin acometer antes unos cambios sociales profundos en la estructura de la sociedad y la economía germanas. Pero, en cualquier caso, ese mismo principio sería aplicable a la España falangista y a su papel como trampolín del nazismo (o de alguna otra forma de fascismo).

Supongamos que eliminamos del poder en España a la Falange propiamente dicha y a Franco, con su consentimiento o sin él, mediante una negociación, o a través de un golpe militar, o de resultas de un discreto chantaje internacional: nada de ello afectaría a las raíces de la influencia económica alemana, ni al refugio que en España encuentra la industria pesada germana, ni a las causas del atraso español, ni al carácter opresivo y generador de conflicto de su estructura social y económica. España no estaría liberada todavía; no se habría hecho más que posponer un nuevo alzamiento, un nuevo estallido desesperado. Los réditos inmediatos del «Orden» aparente así creado serían ampliamente anulados por una inestabilidad prolongada. No podemos ignorar, pese a todo, que una situación de ese tipo en España podría convenir a unos cuantos inversores, carteles y conglomerados extranjeros (y no alemanes, precisamente), porque mantendría al país en el nivel de una colonia, con una industria

autóctona débil, unas oportunidades excelentes para las concesiones a capitalistas extranjeros y un pintoresco telón de fondo para turistas en busca del encanto de lo hispánico.

Los elementos de fuera de España que tan eficazmente apoyaron a los rebeldes durante la Guerra Civil y que tanto se han esforzado por blanquearlos tras aquello (más de lo que cabría esperar si solo les hubiera movido el interés por un apaciguamiento que favoreciera la estrategia [aliada] en el Mediterráneo) se inclinan aún por temer un regreso de la República democrática —con sus tintes «izquierdistas» y socialistas— más que ninguna otra cosa. En lugar de en la apelación a la masa del pueblo español para hacer frente a sus gobernantes totalitarios, prefieren confiar en una conversión gradual de la dictadura falangista hacia un gobierno militar como los de la vieja escuela («¡la democracia no es compatible con el temperamento español!»), y esperan que, desacreditada irremediablemente la idea del *Führer* fascista como principio, el retorno de la monarquía sea inevitable. Y cualquier monarquía española, incluso una de corte constitucional, estaría indefectiblemente basada en las clases altas y medias conservadoras. La situación se mantendría, pues, sin el peligro de un giro a la izquierda, siempre y cuando hubiera una relajación de la mano dura penal y penitenciaria y se introdujera un margen «razonable» de libertad de expresión.

El problema, y debemos insistir en ello una vez más, es que ni el bajo nivel de vida que hacía de España un mal mercado de consumo y un caldo de agitación social, ni el estado de la educación española, del que se derivaba la mala situación de ámbitos como la Administración, la ingeniería y el ejercicio de la ciudadanía, pueden experimentar mejoras permanentes y decisivas sin una planificación y una reforma en los planos social y educativo.

Mientras el Ejército español sea un parásito, costoso e improductivo (salvo en conspiraciones, intrigas y sublevaciones); mientras la Iglesia española se niegue a aceptar los principios de la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de culto y la educación laica[8]; mientras los principios del sindicalismo, las sociedades cooperativas y la autoadministración local sean considerados por las clases alta y media

españolas mero bolchevismo; mientras la libertad de investigación y la educación técnica sean tratadas como simples extravagancias; mientras se continúe aplazando la reforma agraria..., mientras todo eso ocurra, las causas subyacentes de la agitación, y de la opresión, la violencia y la miseria, continuarán existiendo en España.

Una monarquía española impuesta por la vía de la intriga política, sin el libre consentimiento de los votantes, tendría que enfrentarse a los mismos grupos y clases que la querían de vuelta si, en algún momento, se propusiera abordar los susodichos problemas con cierto ánimo de progreso. Según el propio don Juan, el «Pretendiente», ha dicho, las dos consignas prioritarias de una monarquía restaurada serían la religión y el orden. Tomadas, no al pie de la letra, sino con todas sus connotaciones en la realidad política española, ambas significarían justamente lo contrario de la libertad de opinión y de conciencia. Tampoco podrían significar otra cosa, pues fue la República española, con todos sus defectos y sus enfermedades infantiles, la que propugnó el mejoramiento social y educativo, los principios de la responsabilidad democrática y la planificación económica progresista. A fin de cuentas, fue por ello por lo que fue perseguida con tanto ahínco, y no por sus debilidades ni por su presunto extremismo.

Si algún margen quedaba para la duda, este fue eliminado por la reacción de los monárquicos españoles al manifiesto del «Pretendiente». Él había considerado oportuno revestir su principio de «religión y orden» con una pátina de terminología liberal y casi democrática, vaga pero conciliadora. Goicoechea, líder monárquico y, hasta fecha reciente*, gobernador del Banco de España, desaprobó esa concesión a la opinión pública en un telegrama: «El país, sin votaciones populares ni libertades democráticos, ha llevado desde 1939 una vida ordenada, pacífica y próspera. Solo la unión de sus elementos dirigentes puede servir, como hiciera en 1936, para confirmar la gran tarea entonces iniciada y guiar a España con seguridad a través de las grandes circunstancias en las que se encuentra». Dicho de otro modo, el sistema instaurado por Franco y los suyos —sin la parasitaria Falange y, si se tercia, sin el propio Franco— es justamente lo que los monárquicos españoles quieren. Una monarquía española será reaccionaria o no será; es prisionera de los «elementos

dirigentes» del país a los que solo les interesa en la medida en que funcione como una barrera, una fortaleza defensora de sus tambaleantes y desfasados privilegios.

La República española

Curiosa perversión de los criterios es esta que nos obliga a justificar la legalidad de la República española en un mundo que reconoce —o pretende reconocer— los principios de la libertad frente a la opresión y la coerción.

La República llegó al poder impulsada por los votos de la nación, aupada por una ola de entusiasmo popular que, aun así, era algo más que mera efervescencia del momento. En España, durante generaciones, los más destacados pensadores, científicos, maestros e ingenieros defensores del progreso social habían luchado contra las fuerzas interconectadas que, más que apoyar a la monarquía, directamente la representaban: el feudalismo estéril, el clericalismo represor y el ruinoso y destartalado Ejército, que con razón se consideraban a sí mismos «obstáculos tradicionales» al avance de las libertades democráticas. Había sido la reiterada desesperación del pueblo trabajador al ver frustrados por esa alianza sus intentos (siempre creativos y, en no pocas ocasiones, incluso geniales) de conquistar una mayor libertad de autodesarrollo la que había desembocado en estallidos violentos, en choques, en enfrentamientos desesperados y huelgas caóticas. En los pocos años en que hubo Gobiernos republicanos con progresistas al frente, se habían dado extraordinarios pasos iniciales en la planificación de la seguridad social, en el incremento del poder adquisitivo por medio del crédito social y la mejora de los salarios, en el control de las condiciones laborales, en la autoadministración regional, en educación (aunque apenas hubiera profesores cualificados para las escuelas de primaria) y en la modernización administrativa (aunque también escasearan los funcionarios bien preparados). No era una República de la clase obrera, porque la población de clase obrera era minoría; pero los obreros, los campesinos, los intelectuales, los empleados y parte de las clases comerciantes trataban de avanzar a tientas hacia una sociedad planificada, humanitaria y socialista que superara la miseria, la ignorancia y la corrupción. Hubo numerosas

disensiones políticas, acibaradas por el sabotaje y la resistencia pasiva de los partidarios del viejo orden. Hubo mucha desconfianza mutua, por lo demás inevitable. Pero fue un saludable comienzo, pese a todo, y dio muestras de su fortaleza en la Guerra Civil, cuando el Gobierno popular, bajo la batuta de los partidos de izquierda, controló el caos, creó un ejército y tomó las riendas de un país sumido en la agonía de una contienda nacional interna y bloqueado por los Gobiernos extranjeros más poderosos, evitando el colapso de su vida económica.

Esa, en definitiva, fue la breve historia de la República española hasta el momento en que cayó derrotada por una combinación de fuerzas exteriores e interiores de todos conocida.

El último Gobierno de la República era el Gobierno legal, constitucional, de España. Pero como cayó derrotado, y como sus tendencias izquierdistas no eran del agrado de algunos, los países democráticos (los países fascistas no cuentan en este sentido) le retiraron su reconocimiento y aceptaron al agresor triunfante como jefe del Estado español, dando así lógica continuación a sus propias políticas de no intervención. Ese pecado original suyo los ha obligado a emprender una serie de acciones que habrían resultado inconcebibles de cualquier otro modo. La radio de la Falange tiene razón cuando recuerda a los españoles que una España republicana habría estado «sin duda» del lado de los Aliados en la actual guerra, y que el régimen de Franco los ha mantenido apartados de esta; pero ha sido con la inestimable ayuda de los Aliados, que se vieron obligados a perseverar en su política no intervencionista desde el momento en que tomaron ese camino. Tuvieron que halagar así a sus adversarios declarados en España y acallar la voz de sus amigos y aliados: los representantes de la derrotada República. Fue un juego diplomático interesante, habilidoso y exitoso como tal, pero sigue sin estar claro quién engañó a quién en las negociaciones entre Madrid, Londres y Washington. La España de Franco se mantuvo fuera de la guerra —como era evidente que haría, teniendo a medio millón de hombres en sus prisiones y campos de trabajos forzados, así como a millones de hoscos y encadenados

enemigos entre su propia población— y el propio Generalísimo continúa siendo reconocido por los Gobiernos aliados, a excepción del de la Rusia soviética.

Entretanto, los españoles republicanos han logrado alcanzar un acuerdo en tres puntos trascendentales:

—Hay que restaurar la República sobre la base de la Constitución de 1931, y toda modificación que se lleve a cabo se hará conforme a los procedimientos (sumamente elásticos) estipulados en el mencionado texto constitucional.

— El Gobierno republicano legal restaurado (y apoyado por todos los partidos republicanos en el exilio) tendrá que promulgar, como primera medida, una amnistía general y total para ambos bandos, y convocar unas nuevas elecciones generales, hasta las que ejercerá las funciones de Gobierno encargado.

— Desde el primer día de restauración de la República, sus autoridades tendrán que emplearse a fondo, con plenas competencias y absoluto vigor, en la prevención y represión de cualesquiera actos de represalia.

Y es que los españoles republicanos —conviene remarcarlo— están decididos a hacer todo lo que esté en su mano para impedir una nueva guerra civil, pero también están convencidos de que solo ellos pueden impedirla a largo plazo.

Un restablecimiento de la República, un regreso del Gobierno republicano reconstituido y su posterior dimisión para ser relevado por un nuevo Gobierno libre y legalmente elegido implicarían, en el mundo de la posguerra que vemos ahora emerger, el apoyo de las Naciones Unidas como un acto diferido de justicia democrática internacional y como una medida clarividente de constructiva habilidad política internacional. El apoyo de las Naciones Unidas, su intervención como garantes y, de ser necesario, su propio control internacional deberían servir para ayudar a que un Gobierno republicano enérgico disuadiera a los conservadores españoles y a la mayoría de los monárquicos de actuar agresivamente en su contra, sobre

todo porque esos otros grupos saben también, por experiencia propia, cuánto margen de maniobra les concede la Constitución republicana. El apoyo económico y financiero de las potencias democráticas al nuevo Gobierno —en el interés de todos— serviría para imponer una planificación y una gestión cuidadosas por parte de las autoridades republicanas españolas, pero también para asegurarse la cooperación de los empresarios españoles, fueran cuales fueren sus simpatías de partido.

Grave peligro para una solución republicana pacífica representarían ciertos sectores del Ejército y de la Falange, es decir, aquellas personas más temerosas de perder ese poder monopolístico y esas ganancias que tan caros compraron. Una amnistía completa haría mucho por eliminar ese riesgo en lo que a las figuras menores respecta. El miedo de estas a un levantamiento popular masivo que, si topara con su resistencia armada, activaría venganzas que ellas tienen sobrados motivos para temer tal vez tenga un beneficioso efecto moderador. La posibilidad de una intervención de los administradores victoriosos de la paz en Europa sería quizá decisiva y aplastaría toda rebelión fascista o militar antirrepublicana en sus inicios mismos.

Pero el peligro existe y ha de ser afrontado. No en vano Radio Nacional de España puso en marcha una propaganda sistemática de exaltación del espíritu del fascismo en todo el mundo en cuanto los ejércitos alemanes comenzaron a rendirse a los Aliados sobre el terreno. Las fuerzas fascistas en España, las fuerzas fascistas en Europa, las fuerzas fascistas en todo el mundo, bien podrían considerar merecedor del mayor esfuerzo el propósito de impedir una restauración de la democracia española, y los restos del nazismo alemán podrían optar por defender así su más preciado reducto superviviente en un mundo de posguerra en el que la democracia sea un principio aclamado que aún esté pendiente de mayor elaboración.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

ADAMASTO[R], [William C. Atkinson], «The Falangist Twilight», *Fortnightly Review*, abril de 1944.

ÁLVAREZ DEL VAYO, Julio, *Freedom's Battle*, 1942 (título original: *La guerra empezó en España: Lucha por la libertad*, Séneca, Ciudad de México, 1940).

ATKINSON, William C., «Suggested Bases for a British Policy to Spain», *Fortnightly Review*, febrero de 1945.

BRENAN, Gerald, *The Spanish Labyrinth* (contiene una bibliografía detallada de libros sobre España), 1943 (hay traducción en castellano: *El laberinto español,* Ruedo Ibérico, París, 1962).

CHASE, Allan, *Falange: The Axis Secret Army in the Americas*, Nueva York, 1943 (hay traducción en castellano: *Falange: El ejército secreto del Eje en América,* Caribe, La Habana, 1944).

D'YDEWALLE, Charles, *An Interlude in Spain*, 1944.

HAMILTON, Thomas J., *Appeasement's Child*, 1943 (hay traducción en castellano: *El régimen de Franco en España: Hijo del apaciguamiento*, Nuestro Tiempo, Santiago de Chile, 1943).

MADARIAGA, Salvador de, *Spain*, 1942 (título original: *España: Ensayo de historia contemporánea,* Aguilar, Madrid, 1934).

TREND, John B., *Origins of Modern Spain*, 1934.

— *The Civilisation of Spain*, 1944 (hay traducción en castellano: *La civilización de España,* Losada, Buenos Aires, 1955).

Notas

1. Joaquín de Oteyza, un distribuidor editorial, solicitó licencia de importación para traer a España en 1951 cincuenta ejemplares de *La forja de un rebelde*, publicada ese mismo año por Losada en Buenos Aires en su lengua original, el español, pero le fue denegada. La primera entrega de la trilogía *(La forja)* fue juzgada de «irreligiosa, inmoral y enemiga del régimen», mientras que de la segunda *(La ruta)* se dijo que «ataca[ba] a la Iglesia, a la moral y al régimen», y de la tercera *(La llama)*, que resultaba «impublicable». Véase el expediente 3848-51 en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, con fecha de 25 de septiembre 1951.

2. Existen numerosas ediciones de la trilogía. Cátedra publicó en 2019 una excelente edición crítica a cargo de Francisco Caudet, con una introducción de 326 páginas.

3. La novela de Ilsa, *Telefónica*, de contenido autobiográfico (aunque con los nombres de los protagonistas modificados) y aparecida originalmente en el periódico socialista austriaco *Arbeiter-Zeitung* en setenta entregas sucesivas a lo largo de 1949, fue publicada finalmente en España en 2019 por Hoja de Lata.

4. Algunos extractos fueron incluidos en *Palabras recobradas, textos inéditos,* edición de Nigel Townson, Debate, Madrid, 2000. *Lucha por el alma española* y *España en el mundo de la posguerra* fueron reeditados en inglés en 2021 por The Clapton Press por primera vez desde su publicación original en 1941 y 1945, respectivamente.

5. *Lorca* fue publicado por Losada en Argentina en 1957; también en Argentina, la Editorial Sur publicó *Unamuno* en 1959.

6. La mayoría de los relatos que componen *Valor y miedo* (libro editado en 1938 por Publicaciones Antifascistas de Cataluña, poco después de que Barea partiera hacia el exilio) y *El centro de la pista* (publicado en 1960 por Ediciones Cid) nunca han sido traducidos al inglés.

7. *Horizon*, 4, 21, septiembre de 1941.

* No existe un cuadro de Goya titulado así. La descripción que hace aquí Barea, sin duda de memoria, se corresponde con las imágenes del ciclo de las «pinturas negras», en especial con la titulada *La romería de San Isidro*, fechada en 1819. El editor agradece esta información a Antonio Muñoz Molina, que generosamente ha proporcionado a la editorial. (N. del T.).

* En estos ensayos hay citas de fuentes españolas de las que ni el editor ni el traductor han podido encontrar su versión original en castellano. Es posible que Barea estuviera citando de memoria.(N. del T.).

* Arturo Barea atribuye por error el siguiente poema a Antonio Machado, cuando es de Manuel Machado. (N. del E.).

* La encíclica *Rerum Novarum* es obra del papa León XIII, no de Pío IX. (N. del E.).

1. Unos pocos afortunados, al parecer, han combatido como «legionarios de la Francia libre» (!) junto a las fuerzas británicas que expulsaron a los fascistas italianos de Eritrea.

* En aquel momento, los laboristas estaban integrados en el Gobierno británico de concentración nacional (el conocido como «Gabinete de Guerra») que rigió los destinos del Reino Unido entre 1940 y 1945 con Winston Churchill como primer ministro. (N. del T.).

1. Esta SIDRO, anteriormente registrada en Bruselas, fue trasladada a Barcelona en octubre de 1941. Controla, entre otras empresas, la Mexican Light and Power Company.

2. Por otra parte, Cambó, además del marqués de Foronda, un grande de España con inclinaciones fascistas, figuraba como miembro del consejo de administración de SOFINA en 1939. La CHADE pertenece todavía al grupo SOFINA; sus beneficios en 1942-1943 fueron de 19,6 millones de pesetas oro.

3. Las escuelas de ingenieros fundadas y gestionadas por los jesuitas en Madrid y en Deusto llevan mucho tiempo proveyendo de personal a las empresas industriales españolas; dichas escuelas tienen un nivel excelente, pero no están autorizadas a conceder títulos universitarios oficiales. Los ingenieros que se gradúan por las escuelas del Estado se orientan así principalmente hacia puestos públicos para los que se requiere tener una titulación oficial, mientras que los puestos mejor pagados, los de la industria privada, son ocupados por alumnos y protegidos de los jesuitas, lo que refuerza extraordinariamente su control sobre los cuadros directivos. Los jesuitas envían ahora a los futuros ingenieros eléctricos a una facultad de Lovaina, porque no cuentan con ninguna escuela de parecida categoría en España.

4. El Ejército español está mucho más interconectado con la poca industria existente (sobre todo, la subvencionada por el Estado) que con la aristocracia. Muchos oficiales militares que han recibido formación en alguna de las armas técnicas terminan por recalar en puestos importantes en la industria mucho antes de que les haya llegado la edad de la jubilación; continúan figurando en las listas de personal del Ejército, pero «apartados del servicio activo y sin sueldo». Esto se explica por la importancia que los contratos militares tienen para la industria y, al mismo tiempo, por la escasez de ingenieros con formación práctica.

5. Uno de los motivos por los que tantos funcionarios de alto rango se volvieron en contra de la República española (y de su Gobierno legal) fue el nuevo procedimiento de ascensos, que ya no se regía por la mecánica norma de la antigüedad, sino por exámenes competitivos: una grave amenaza a un privilegio de casta que apenas se regía por las cualificaciones educativas.

6. Ya en 1939, los Gobiernos alemán e italiano publicaron informes oficiales de su intervención en España; se hizo público, asimismo, el saldo financiero final de las deudas contraídas por el régimen de Franco en el curso de la Guerra Civil, unas cifras que son testimonio impagable de hasta qué punto la no intervención fue un espejismo. Pero la tendencia a ignorar esos datos persistió hasta fecha muy reciente y no es impensable que vaya a revivir de nuevo si se dan las circunstancias oportunas.

7. El católico y monárquico belga D'Ydewalle, por ejemplo, menciona casos de tortura y brutalidad en las cárceles españolas que ponen en evidencia que tales conductas forman parte habitual de la actual práctica de la justicia franquista (véase *Interlude in Spain*, Macmillan, 1944). En la primavera de 1945, tuvieron lugar ejecuciones en masa de detenidos «rojos», al parecer, como represalia por el asesinato de dos falangistas. Todavía se imponen largas penas de prisión a condenados por el «crimen» de haber sido masones antes de 1936. Quienes ya han cumplido condena y salen de la cárcel no pueden conseguir trabajo si no se afilian a la Falange. La policía local y los propios falangistas continúan arrestando y encarcelando a personas de manera arbitraria.

8. Del papel tradicional de la Iglesia española en la formación de la conciencia cívica —el que ya desempeñaba antes de la malograda reforma educativa de la República y ha vuelto a desempeñar con el régimen de Franco— puede uno hacerse muy buena idea leyendo las enseñanzas del catecismo *Ripalda*, su libro de texto de mayor autoridad. En él se predica que el «liberalismo» es un pecado, pues propaga «falsas libertades». Por ejemplo, según el pensamiento liberal, el Estado debería ser independiente de la Iglesia, pero, para la doctrina católica, el primero debe estar sometido a la segunda; el liberalismo propugna la libertad de conciencia, pero, según la doctrina, el hombre no tiene el derecho de elegir su religión, pues el catolicismo es la única verdadera; la doctrina también considera que es deber del Estado apoyar a la única religión verdadera (y, por consiguiente, que el principio liberal de la libertad de culto no es más que una maligna falsedad) o que la libertad de opinión solo puede alcanzar a aquellas opiniones que no hayan sido condenadas por la Iglesia, o que los conceptos de la libertad de cátedra y de reunión también han sido condenados por la Iglesia. La doctrina defiende igualmente que la censura de la prensa es necesaria para prevenir la difusión de ideas perniciosas y viciosas. Etcétera.

* Lo cierto es que Antonio Goicoechea fue gobernador del Banco de España de 1938 a 1950. Por lo tanto, aún lo era en el momento en que los Barea escribieron este informe. (N. del T.).

Contra el fascismo. Lucha por el alma española y España en el mundo de la posguerra. Dos textos inéditos
Arturo Barea

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal)

Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos)
si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Títulos originales: *Struggle for the Spanish Soul* y *Spain in the Post-War World*

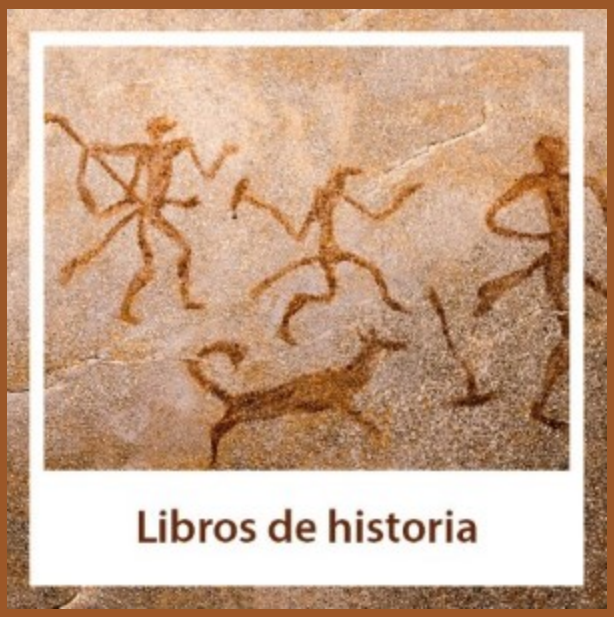
© Arturo Barea, 1941, y herederos de Arturo Barea, por *Struggle for the Spanish Soul*
© Ilsa y Arturo Barea, 1945, y herederos de Ilsa y Arturo Barea, por *Spain in the Post-War World*
© Albino Santos por la traducción, 2023
© Editorial Planeta, S. A., 2023
Espasa es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.planetadelibros.com

Primera edición en libro electrónico (epub): febrero de 2023

ISBN: 978-84-670-6927-3 (epub)

Conversión a libro electrónico: Acatia
www.acatia.es

¡Encuentra aquí tu próxima lectura!



¡Síguenos en redes sociales!